



Los españoles
ante el cambio
José Ignacio Wert

LOS ESPAÑOLES ANTE EL CAMBIO

José Ignacio WERT

© FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y el autor, 2012

Ilustración de portada: La Fábrica de Diseño

Maquetación: Paloma Cuesta

ISBN: 978-84-92561-15-5

Depósito Legal: M-5385-2012

Impreso en España / Printed in Spain

ÍNDICE

LOS ESPAÑOLES ANTE EL CAMBIO

Propósito	9
1. Identidad, nación, autonomías	11
2. La crisis del Estado de bienestar	23
3. Valores personales y sociales	37
4. La política	69
5. Conclusiones: ¿ahora qué?	107

POST-SCRIPTUM

Las Elecciones Generales 2011: un análisis preliminar . . .	117
1. Los números de la elección: la victoria del PP, la implosión del PSOE y el aumento de la fragmentación	118
2. La interpretación: una elección de excepción en un entorno de excepción	131
3. Las consecuencias: el PP, ante la hora de la verdad; el PSOE, ante la necesidad de reinventarse	143
Índice de gráficos y cuadros	151

LOS ESPAÑOLES ANTE EL CAMBIO

José Ignacio WERT*

* Sociólogo. Expresidente de Demoscopia, de Inspire Consultores, de Kantar Media, de ESO-MAR y de EFQM. En la actualidad es ministro de Educación, Cultura y Deporte. Este texto fue remitido a la Fundación FAES meses antes de su nombramiento.

PROPÓSITO

En las páginas que siguen se intenta una reflexión ordenada sobre lo que la sociedad española nos dice acerca de sí misma: cómo se reconoce; en qué cree; qué espera del futuro y qué le desespera del presente; cuál es su humor y cuáles son sus disposiciones para afrontar los problemas.

Se plantea con el ánimo de servir de pauta a un debate más amplio sobre los desafíos de nuestro país, que tome en cuenta como inexcusable punto de partida un mapa de opiniones, actitudes y valores anclado de la forma más objetiva posible en el conocimiento empírico, pero capaz de ir unos pasos más allá de lo descriptivo para buscar tanto preguntas como posibles respuestas ante el *qué hacer* que, a plazo más corto que largo, se plantea una sociedad como la nuestra que no sólo está pasando un momento de coyuntural dificultad, sino que se encuentra en un cruce de caminos histórico, de cuya respuesta al mismo va a depender su devenir en los próximos y decisivos años.

Ese propósito práctico –y también la premura con que se ha debido llevar a cabo– explican algunas carencias y omisiones en el texto. No hay, desde luego, un tratamiento exhaustivo de todas las cuestiones que el autor considera relevantes

LOS ESPAÑOLES ANTE EL CAMBIO

en la construcción de un mosaico completo del estado de nuestra sociedad, sino más bien un tratamiento sintético de las dimensiones que en esta coyuntura le han parecido más relevantes.

1

IDENTIDAD, NACIÓN, AUTONOMÍAS

Empecemos, pues, por lo primero, **cómo nos definimos los españoles en términos de identidad**. Sin entrar a discutir con detalle un marco teórico sobre cómo cambia la definición identitaria nacional en el marco de la globalización, hay que decir, para poner en contexto la situación española, que, grosso modo, las sociedades nacionales que presentan algún problema de identidad (o de *integración nacional* en un sentido más amplio) **pueden tener ese problema hacia fuera o hacia dentro**.

El problema de integración *hacia fuera* se define por la presencia más o menos intensa de un sentimiento de amenaza a la identidad, la integración o la cohesión nacional, como consecuencia de la irrupción de minorías venidas de fuera, más o menos numerosas, que rechazan, desafían, o simplemente permanecen al margen de un consenso nacional inclusivo. El problema *hacia dentro* se produce cuando una parte de los nacionales –en base a una fractura que puede ser étnica, religiosa, cultural o de otro tipo– rechaza, del modo que sea, su voluntad de formar parte de la sociedad nacional de que se trate y propugna segregarse de esa comunidad nacional mediante la formación de una entidad nacional propia.

Ejemplos de lo primero serían hoy sociedades como Estados Unidos o Francia. Es de lo que trataba, por ejemplo, en el último libro que publicó, Samuel Huntington¹, cuando planteaba el desafío que al modelo de integración de los inmigrantes, el *melting-pot*, le suponía la presencia de la inmigración hispana numerosa, compacta, y geográficamente próxima a sus países de origen, al estar menos dispuesta que la inmigración –especialmente, la europea– de siglos anteriores a suscribir la identidad nacional americana. Los problemas franceses –relacionados con la inmigración de origen magrebí– se manifiestan en la dificultad de integrar no ya a quienes inmigraron hace una o dos generaciones, sino a sus hijos o a sus nietos, que rechazan –a veces de forma explosiva– su asimilación a los valores, al modo de vida y a la cultura cívica *republicana* que, con mayor o menor sinceridad, abrazaron sus abuelos o sus padres.

Sin embargo, en España, pese a la excepcional intensidad y rapidez del flujo migratorio que hemos experimentado en los últimos doce años (en los que la población extranjera ha pasado de suponer poco más del 2% de la población a representar más del 12% de la misma²), **el problema fundamental de identidad lo tenemos *hacia dentro*.**

¹ Samuel P. Huntington, *Who Are We? The Challenges to American National Identity*, Simon & Schuster, Nueva York, 2004 (Hay traducción española: *¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense*, Paidós, Barcelona, 2004).

² En 2000, había en España 923.000 extranjeros sobre una población de 40.500.000. En 2011, 5.731.000 extranjeros representan el 12,2% de la población total de 47.151.000 (INE, Padrón Municipal).

¿En qué términos se puede definir ese problema? Con carácter general, la inmensa mayoría de los españoles (85%) estamos *muy* (50%) o *bastante* (35%) orgullosos de serlo. Sólo un 12% manifiesta sentirse *nada* (4%) o *poco* (8%) orgulloso de su españolidad³. A primera vista, pues, el orgullo de pertenencia –que podemos confortablemente asumir como un *proxy* de sentimiento identitario nacional– no parece ofrecer una dimensión problemática con carácter general. Sin embargo, en esta como en las restantes dimensiones relacionadas con los sentimientos identitarios, no basta atender al dato general, sino que es preciso detenerse en sus fracturas territoriales.

Porque la identidad española se encuentra en distintas situaciones competitivas respecto a la identidad regional. Sobre el sentimiento de orgullo que despierta la pertenencia a una región determinada, los resultados globales son muy similares a los que evoca la identidad nacional: el 84% de los españoles está *muy* (54%) o *bastante* (30%) orgulloso de su identidad regional. Esta coincidencia –nuevamente desde la perspectiva de la generalidad– nos indica que en esta dimensión predomina de forma abrumadora un *sentimiento inclusivo* de orgullo de pertenencia: **el orgullo de ser español convive armoniosamente con un orgullo de parecida intensidad por sentirse miembro de una Comunidad Autónoma.**

³ Los datos que siguen, salvo mención en contrario, corresponden al *Barómetro Autonómico II* del CIS (E. 2.829) realizado entre enero y marzo de 2010 sobre una muestra de 10.409 entrevistas, de carácter no proporcional, en las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas.

Pero no cabe duda de que esa armonía en la vivencia de un sentido múltiple de pertenencia registra una acusada fractura en algunas Comunidades en las que no parece fácil la integración armoniosa de esos sentimientos de identidad múltiple. Esas Comunidades son, acusadamente, Cataluña y el País Vasco y, algo más tenuemente, Navarra.

De acuerdo con los más recientes datos del CIS al respecto⁴, en el conjunto de España un 60% de la gente considera a España “mi país”, la forma de identificación emocional-racional más fuerte, frente a otras variantes menos comprometidas (“una nación de la que me siento miembro”, “un país del que soy ciudadano”, “un país compuesto por varias nacionalidades y regiones”) o totalmente descomprometidas (“un Estado al que mi país no pertenece”). Pues bien, en Cataluña esa identificación *fuerte* la comparten el 34,7% de los ciudadanos, en Navarra el 34,9% y en el País Vasco apenas el 21%.

A su vez, frente a una actitud favorable al reconocimiento al derecho de secesión de las Comunidades Autónomas⁵ que es inferior al 2% en el conjunto de las Comunidades a excepción de estas tres, en Navarra, esa actitud la suscriben el 13%, en el País Vasco el 21,9% y en Cataluña el 23,6%. Por otra

⁴ *Barómetro Autonómico II* citado *supra*.

⁵ El formato de la pregunta (forma de articulación del Estado que prefiere) no autoriza estrictamente a calificar de “independentistas” a quienes suscriben la opinión favorable al derecho de secesión de las Comunidades Autónomas, puesto que expresan una disposición a favor del reconocimiento del derecho, no su propia actitud frente a la independencia, pero en la práctica puede haber casi una equivalencia entre aquella opinión y esta actitud.

parte, mientras en el conjunto de las Comunidades, salvo estas tres, menos del 8% dice sentirse “poco” o “nada” orgulloso de ser español, en Navarra ese sentimiento de distancia afectiva lo suscriben el 26%; en Cataluña, el 29,4%, y en el País Vasco, el 40,3%.

Esas serían, en unos pocos trazos, las dimensiones actitudinales del problema. Hablar de su génesis nos llevaría mucho más espacio del que razonablemente podría dedicársele en un trabajo de este carácter. Pero, mirando al futuro, es preciso, a mi juicio, interrogarse acerca de la naturaleza del problema y sus vías de solución. Y ambas tareas requieren un mínimo esfuerzo de reflexión sobre las causas de la situación actual.

Esto exige comenzar por establecer que, en la perspectiva del *big picture*, la sociedad española no presenta ni mucho menos un cuadro de desintegración que se pueda comparar al de otras sociedades que en el pasado reciente han experimentado procesos de fragmentación violentos (como la antigua Yugoslavia) o más o menos pacíficos y pactados (como la antigua Checoslovaquia) o que se enfrenten ahora a un riesgo de fragmentación (como Bélgica). Pero no puede desconocerse que en España es necesario encontrar una forma de canalizar esas pulsiones de desintegración⁶ –por limitadas o selectivas que sean– antes de que las mismas se enquisten más dañinamente en la convivencia.

⁶ Helena Béjar, en un sugerente trabajo (*La dejación de España. Nacionalismo, desencanto y pertenencia*, Katz, Madrid, 2008) usa el concepto de *dejación* para remitir a un entendimiento de la dimensión nacional, bastante común en el *mindset* de los *progresistas* españoles.

Los antecedentes históricos más próximos en cuanto a la forma de dar cauce institucional a identidades particulares más fuertes sin poner en cuestión la unidad del Estado-nación llamado España son los primeros Estatutos de Autonomía que en la II República se promulgaron para Cataluña, el País Vasco y, aunque la norma nunca llegó a estar en vigor por el desencadenamiento de la Guerra Civil, Galicia. En esas tres Comunidades existía no sólo un sentimiento identitario particular más definido que en el resto de España, sino una referencia –más o menos mitificada o falseada– a una soberanía originaria de raíz historicista y una articulación político-partidista peculiar con partidos *nacionalistas* influyentes, cuyo ideario incorporaba de forma más o menos explícita una aspiración a la independencia o a la asociación con España desde una óptica confederal⁷. Pero lo más importante, a los efectos que aquí nos importan, es que en la II República prevalece un enfoque *particularista* que lleva a buscar la solución de la “cuestión” vasca, catalana y gallega, manteniendo en el resto del país una estructura político-administrativa de carácter centralista⁸.

A la Transición llegan muy vivas las respectivas *cuestiones* catalana y vasca (esta última, además, coloreada por la exis-

⁷ Tanto el PNV como ERC –referentes hegemónicos del nacionalismo vasco-navarro y catalán respectivamente en la II República– eran partidos de ideario abiertamente independentista, en tanto que el Partido Galeguista se mantenía más bien en una postura confederal.

⁸ La división provincial de 1822 y las modificaciones a la misma de 1833, sin llegar a hacer tabla rasa de los criterios históricos, como intentó José Bonaparte al repartir el territorio en prefecturas y sub-prefecturas como se había hecho en Francia, sí mantiene en lo básico un principio de jacobinismo político, orientado a la existencia de un poder central muy fuerte y una división del territorio más administrativa que política.

tencia de una violencia terrorista particularmente intensa y sanguinaria por parte de ETA⁹) y, algo menos acusada, la gallega. Pero, además, junto a estas demandas históricas de particularidad, se registra la emergencia de movimientos regionalistas o nacionalistas en otras Comunidades y, sobre todo, se abre camino un discurso político –en el que coinciden los partidos al dar forma constitucional al Estado de las Autonomías– que considera necesaria la generalización de un sistema de autonomías territoriales, aunque promueva una gradación –más en el tiempo que en el resultado final– entre las Comunidades llamadas “históricas” y las de nueva creación.

A estas alturas es inútil abrir una discusión acerca del preferible contrafáctico de qué hubiera sucedido de haberse optado por un esquema distinto, de *devolution* limitada a las Comunidades históricas, como se ha hecho, por ejemplo, en el Reino Unido. Pero tampoco tiene mucho sentido cerrar los ojos a que ese esquema –que sin duda ha tenido virtudes y rendimientos constatables¹⁰– ha aparejado nuevos problemas de integración, ha suscitado una dinámica de emulación entre Comunidades potencialmente desintegradora y, lo peor a mi juicio, no sólo no ha resuelto las diferentes “cuestiones” históricamente pendientes, sino que las ha agravado.

⁹ Antes de la muerte de Franco, desde su primera víctima en 1968, ETA había cometido 44 asesinatos. Entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución añade 87 víctimas mortales a su macabra estadística.

¹⁰ Me he ocupado con detenimiento de la cuestión en “España: ¿La Nación deconstruida?”, *Cuadernos de Pensamiento Político*, nº 12, octubre-diciembre 2006, págs. 9-55.

Y no tanto porque se hayan producido grandes cambios en Cataluña o en el País Vasco –los dos ámbitos más problemáticos en esta dimensión– en el sentido de intensificarse la voluntad desintegradora de sus ciudadanos. Desde que se usa sistemáticamente en las encuestas el mismo termómetro identitario (cómo se considera la gente en cada Comunidad en un gradiente que va desde el sentimiento de *españolidad exclusiva* al de *identidad regional exclusiva* pasando por distintos grados de *identidad inclusiva*), el sentimiento de identidad regional excluyente se mantiene constante tanto en una como en otra:

CUADRO 1

Identidad regional excluyente

(Porcentaje que se considera, respectivamente, sólo catalán o vasco)

	1990	2005	2010
Cataluña	14	14	14
País Vasco	20	24	24

Fuente: Barómetros Autonómicos del CIS de las fechas indicadas

Sin embargo, a despecho de esta realidad, lo cierto es que las élites políticas nacionalistas han conseguido arrastrar a grupos más amplios de la ciudadanía a considerar como parte integrante de la agenda de las respectivas sociedades políticas lo que en el País Vasco se ha codificado como el “derecho a decidir” y en Cataluña se ha etiquetado de “soberanismo” y que en ambos casos implica la proclamación del derecho a decidir la secesión respecto de España.

Ahora mismo asistimos a un *tira y afloja* en esta dirección, algo más larvado en el País Vasco desde que el nacionalismo fuera expulsado del Gobierno regional en 2009¹¹ y, en cambio, más activo en Cataluña, donde el nacionalismo, con una u otra vestidura partidaria, de hecho no ha dejado de gobernar desde 1980, puesto que la experiencia del *tripartit* liderado por el PSC-PSOE que ocupó la Generalitat entre 2003 y 2010 no ha sido menos nacionalista en sus obras que los sucesivos gobiernos de CiU.

Por ejemplo, las campañas de las *consultas soberanistas* en Cataluña constituyen una interesante piedra de toque de esta estrategia. Una confusa representación de entidades ciudadanas, culturales y políticas, de muy diverso pelaje y arraigo, han promovido con la cooperación abierta de ERC y la más solapada de CiU –y, en algunos casos, con el PSC haciendo de “tonto útil” al facilitar recursos y logística– unos “referenda” locales de guardarrópía (sin ningún tipo de control de censo, votantes, etc.) escalonados a lo largo de un año y medio en 550 municipios en los que se preguntaba a los participantes si estaban de acuerdo con que “la Nación catalana devenga un Estado de derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea” (*sic*). Es decir, que ya partimos de que la *Nación catalana* no sólo existe sino que, una vez independizada, va a ser parte de la Unión Europea. Pero, a lo que vamos, lo importante es que en esa consulta no han participado más que –dando por buenas las cifras nunca verificadas de los organizadores– unos

¹¹ Después de los últimos acontecimientos, la reemergencia de la *izquierda abertzale* bajo la bandera de conveniencia de Bildu con el aval del Tribunal Constitucional y su notable resultado electoral en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo de 2011, no tardará en manifestarse una nueva fase en la demanda soberanista.

900.000 catalanes, esto es, menos del 18% del censo, de los que alrededor del 90% (por tanto, un 16% del censo) han votado afirmativamente. Puestas las cosas en su sitio, no habría pues mayor motivo para inquietarse. No lo habría, de no ser porque el *Molt Honorable President de la Generalitat* y sus *Consellers* pertenecientes a *Convergència Democràtica de Catalunya* participaron en la mascarada y votaron por la independencia.

La vieja referencia orteguiana de la “conllevancia” como estrategia a aplicar en las relaciones con Cataluña (y habría que añadir en la perspectiva actual al País Vasco) se está poniendo muy difícil, pero, no tanto porque haya arraigado en las respectivas sociedades de forma mayoritaria el *gen* independentista, cuanto porque las élites nacionalistas han encontrado en ello un filón inagotable de *poder estratégico* que les permite una provechosa explotación hacia dentro, pero sobre todo, hacia fuera, en una relación cada vez más bilateral y ventajista con el Estado.

Y, además, esto plantea una cuestión más delicada, la dinámica de *emulación negativa* que ha arrastrado a otras Comunidades a *buscarse a sí mismas* exaltando su particularismo, inventando identidades y jugando con las palabras al borde del precipicio. Es verdad que estas veleidades –que tuvieron especial viveza en el sarampión de reformas estatutarias que brotó entre 2004 y 2008, y que llevó a las reformas de los Estatutos catalán, andaluz, valenciano, castellano-leonés, aragonés y balear; el de Castilla-La Mancha encalló por falta de acuerdo sobre la cuestión del agua– parecen haberse sosegado un tanto cuando otras urgencias, nacidas de la crisis, han venido a sustituir tales afanes.

Y, de hecho, aún *sotto voce*, con disimulos y sobreentendidos, más bien comienza a abrirse paso una sensibilidad opuesta en la ciudadanía. Por primera vez desde el comienzo de la Transición encontramos encuestas en las que hay una proporción significativa de gente que creen excesivo el grado de autonomía transferido a los gobiernos autonómicos. Por citar sólo la más robusta de ellas, en el *Barómetro Autonómico* del CIS más reciente¹² hay cinco Comunidades en las que las opiniones favorables a disponer de mayor autonomía en la propia Comunidad están igualadas o son inferiores (notablemente en Asturias y Madrid) a las de quienes están a favor de una menor autonomía. Y en el conjunto de España, los que quisieran más autonomía para su Comunidad apenas representan 15 puntos más que quienes desean lo contrario, siendo claramente mayoritaria (en torno al 50%) la proporción de quienes consideran suficiente el *quantum* de autonomía conseguido.

La cuestión actual –encuadrada en estos mapas mentales que venimos de describir– es la de si estamos o no preparados para una *reflexión informada* sobre la sostenibilidad del actual modelo y si existe o no la energía política para propiciarla y aplicar las consecuencias. Porque el sistema ha dado lugar al surgimiento de unas élites políticas celosas de lo conseguido y, probablemente, resistentes a cualquier redimensionamiento a la baja del tinglado institucional construido y del soporte competencial que lo sostiene. *Hic sunt leones*. Esas élites no son sólo –y habría que decir tal vez que no son principalmente– las de los partidos de identidad nacionalista: tam-

¹² *Barómetro Autonómico II*, cit.

bién se han acomodado en los partidos nacionales y, dentro de ellos, han ganado una notable autonomía.

Necesitamos que el *Estado compuesto* que se construye según las líneas maestras del Título VIII de la Constitución, sin necesidad a priori de una reforma constitucional, pero sin descartarla si fuera imprescindible, se haga más económico, y más eficaz. Lo necesitamos y, además, nos lo exige nuestro compromiso dentro de la Unión Económica y Monetaria. Es discutible si ello exige alguna recuperación competencial por parte del Estado central o basta un alineamiento “voluntario” de todas las Comunidades sobre el respeto a ciertas bases comunes y la contención económica. Pero, además, es preciso podar la fronda político-administrativa que se ha ido creando en las Comunidades Autónomas, con estructuras de *mini-Estados* que no es posible –ni útil– mantener. He aquí una tarea de envergadura que difícilmente puede abordarse sin un acuerdo de fondo entre los dos grandes partidos nacionales, que debería constituir una de las tareas inexcusables en la legislatura. De hecho, esto se ha hecho ya varias veces, primero entre UCD y PSOE (LOAPA y derivados en 1981) y entre PP y PSOE (1992, con el pacto sobre asunción de competencias por las Comunidades de *vía lenta*). Ahora hace, incluso, más falta¹³.

¹³ Los cambios políticos que han propiciado las elecciones autonómicas de 2011 (especialmente en Baleares y Castilla-La Mancha) ya han motivado algunas decisiones unilaterales por parte de los nuevos gobernantes en la dirección de supresión de organismos, simplificación de la estructura administrativa y austeridad en el gasto. Evidentemente se trata sólo de una parte, incluso pequeña, de lo que es necesario en el proceso de racionalización del Estado compuesto, pero que puede tener un valor ejemplar y despertar la emulación.

2

LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR

Bajo este epígrafe quiero abordar algunas cuestiones que hoy están –de forma más o menos directa u oblicua– en el centro del debate político y social, que forman parte de la *almendra* de las preocupaciones públicas. La crisis actúa como forzado catalizador del debate, pero, con crisis o sin ella, se trata en todo caso de un debate pendiente que de una forma u otra estaba planteado.

Involucra este asunto cuestiones cognitivas y orientaciones de valor, condicionantes fácticos y condicionamientos políticos. Me voy a centrar en la descripción de cómo ve la sociedad española la crisis del Estado de bienestar, hasta qué punto la conoce y en qué términos la define y cómo se orienta actitudinal y valorativamente frente a ella, así como si existe o no una ventana de oportunidad para las reformas, cuál es su anchura y cómo aprovecharla.

Es preciso, desde esta perspectiva, un mínimo anclaje teórico de lo que vamos a tratar, para introducir una distinción clave en Sociología, entre las **opiniones**, las **actitudes** y los **valores**. Son tres niveles distintos de profundidad de disposiciones psicológicas con las que la gente se enfrenta a la realidad, y es

esa diferencia de profundidad lo que marca, desde el punto de vista práctico, la mayor o menor dificultad de cambiarlas.

Bob Worcester propuso hace ya unos años una expresiva imagen literaria acerca de las opiniones, las actitudes y los valores. “Las **opiniones** son las ondas en la superficie de la conciencia pública, superficiales y fácilmente modificables; las **actitudes** son las corrientes que se mueven por debajo de la superficie, más profundas y fuertes; los **valores** son las mareas profundas del humor de la gente, lentas en cambiar, pero poderosas”¹⁴.

Pero una cosa es el nivel de profundidad al que operan estas disposiciones psicológicas y otra la solidez de la base cognitiva que las soporta. Porque puede darse el caso de tener valores muy arraigados, anclados en conocimientos equivocados de la realidad sobre la que operan esos valores, y lo mismo sucede con las actitudes y las opiniones. La endeblez de la base cognitiva no enerva la intensidad de los juicios de valor.

En esta cuestión, por un lado, importa no tomar las opiniones por actitudes, ni tomar las actitudes por valores ni, por supuesto, tomar las opiniones por valores, es decir, que no se debe transitar sin el adecuado equipaje conceptual por esos distintos niveles de profundidad y, por ejemplo, darle más importancia de la que tienen a opiniones que, como apuntaba an-

¹⁴ Robert Worcester, ‘Why do we do what we do? A Review of what it is we think we do, reflections on why we do it, and whether or not it does any good’, *International Journal of Public Opinion Research*, Volumen 9, Número 1, Primavera 1997, p. 2-16.

tes, pueden ser muy volátiles, y pueden cambiar si cambia la base cognitiva que las sustenta y, por tanto, pueden llevar a conclusiones equivocadas acerca de la receptividad de la sociedad para admitir algunos cambios.

Vamos pues al segundo aspecto, el tema de la **base cognitiva**.

Puede resultar sorprendente saber que –de acuerdo con los datos del barómetro sanitario realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, con cadencia bianual, el último disponible es de 2009¹⁵–, son muchos más los españoles que creen que la Sanidad se financia con cotizaciones sociales (45%) que los que dicen que se hace a través de los impuestos (23%).

Pero aun más sorprendente puede parecer otro dato sobre cómo se distribuye socialmente esa errónea noción. En efecto, uno puede pensar dos cosas a este respecto:

- a) Que se trata de un poso de la época, larga, en la que efectivamente la Sanidad se financiaba con cotizaciones sociales, y, por tanto, tenderá a pensarlo en mayor medida la gente de más edad.
- b) Que es una consecuencia de un pobre nivel de información de la gente con menos recursos culturales.

¹⁵ Estudio 2.821, realizado entre febrero y noviembre de 2009 en tres oleadas sobre una muestra total de 7.800 entrevistas.

Falsas ambas. Tanto los más jóvenes (46%) como los más educados (52%) piensan, en proporción mayor, que son las cotizaciones sociales las que pagan el sistema sanitario. Y ello no porque estén más equivocados –lo están en medida parecida– sino porque en menor medida tienden a no dar una respuesta a la pregunta. Esto aplicado a otras cuestiones que tienen que ver con la protección social y, por supuesto, sin ir más lejos, las propias pensiones, da una cierta idea de que la base cognitiva, por lo menos en lo que se refiere a la relación entre los aspectos financieros y la cobertura obtenida, es muy limitada.

Hecha esta introducción, lo primero que habría que decir sobre el tema que nos ocupa, sobre lo que es la posición de la opinión pública española, es que tenemos una sociedad, que por razones que sería no solo compleja sino probablemente imposible de enumerar aquí por falta de espacio, responde más que ninguna otra de aquellas con las que la podamos comparar a lo que yo he llamado en alguna ocasión **el síndrome estatal asistencialista**, lo que otros llaman, más orientado por lo ideológico o lo político, el *consenso socialdemócrata*.

¿Qué es lo que quiero decir? Hay una pregunta clásica que se utiliza en toda la investigación comparativa para determinar los valores básicos de la gente respecto a la protección social, que se expresa a través de un indicador con tres alternativas:

- La primera, que llamaríamos **estatal-asistencialista**, según la cual el Estado es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos.

- Una, de tipo intermedio, según la que correspondería al Estado ocuparse, únicamente, del bienestar de aquellos que no pueden valerse por sí mismos, de los más desfavorecidos. A esta la llamaríamos **conservadora-corporativa**, utilizando la terminología del economista danés Gosta Esping-Andersen, uno de los más distinguidos artífices de la elaboración del marco teórico del Estado de bienestar¹⁶.
- Y una tercera, que dice que los ciudadanos son esencialmente responsables de su propio bienestar y es a ellos a quienes les toca garantizarlo y asegurarlo. Es lo que podríamos llamar una **concepción liberal**.

En España disponemos de la evolución de este indicador desde 1989 hasta 2008. Además, esta pregunta se utiliza en el *International Social Survey* y en todas las investigaciones que nos permiten análisis comparativos. De todas ellas deducimos:

Primero. Los valores acerca del asistencialismo en España son los más estatistas de toda la Unión Europea y de otras economías desarrolladas tales como Estados Unidos, Australia, Canadá, etc.

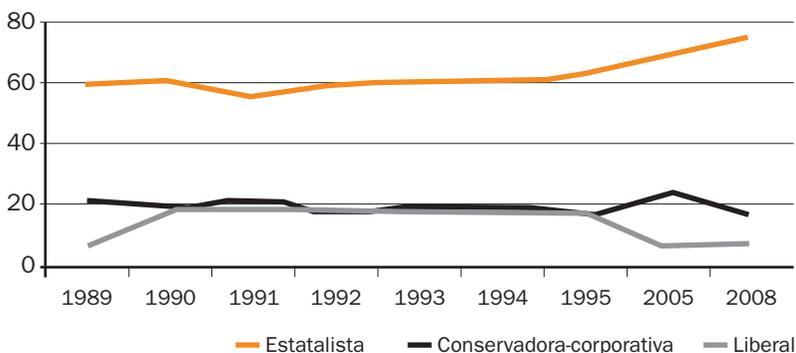
Esto, de alguna forma, se podría explicar recurriendo a un argumento cultural, histórico, e incluso de tipo religioso, relacionándolo con la matriz católica de la cultura española.

¹⁶ Esping-Andersen, G.: *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Polity Press, Londres, 1990.

Segundo. Pero esto, siendo ya en sí mismo un elemento importante en el análisis, se completa con una observación que, quizá, pueda resultar más contraintuitiva, y desafiar la expectativa que uno pudiera elaborar a ese respecto y es que **la posición de valor estatalista, lejos de disminuir, no ha hecho otra cosa que aumentar en los últimos años.**

GRÁFICO 1.

Opinión ante el Estado (1989-2008)



Fuentes: Ver nota al pie¹⁷.

En concreto, como puede verse en el gráfico anterior, en 1989, el 58% de los españoles pensaban que el Estado es responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, y en 2008, última ocasión en la que el CIS ha utilizado este indicador, quienes lo pensaban habían pasado

¹⁷ Fuentes: Estudios del CIS, a saber, E. 1.849 (1989), E. 1.910 (1990), E. 1.971 (1991), E. 2.017 (1992), E. 2.063 (1993), E. 2.111 (1994), E. 2.187 (1995), E. 2.594 (2005), y E. 2.765 (2008), todos ellos sobre muestras nacionales de alrededor de 2.500 entrevistas. Cfr. también Arriba, A; Calzada, I, & del Pino, E.: *Las actitudes de los españoles hacia el Estado de Bienestar (1985-2005)*, Opiniones y Actitudes, nº 55, CIS, Madrid, 2006.

a ser el 74%. Mientras tanto, lo que podíamos llamar la opinión liberal, aquella según la cual son los propios ciudadanos los responsables de su bienestar, que arranca en 1989 en un valor del 5%, está en 2008 en un valor muy similar, del 7%.

Y, además, lo que es muy interesante también desde este punto de vista, es que no se trata de un sustrato valorativo que, de acuerdo con los datos recogidos, se pueda vincular, por ejemplo, a la cultura del asistencialismo que prevaleció durante el franquismo, porque vemos que entre los jóvenes existe un predominio del ingrediente estatal-asistencialista tan fuerte como entre los mayores. Igualmente, puede afirmarse que prácticamente no existe discriminación ideológica, en ningún sentido, en cuanto atañe a la vigencia de esta orientación estatalista, que prevalece con parecida intensidad entre quienes se declaran más inclinados a la derecha o a la izquierda, quienes votan al PP o al PSOE.

Fijémonos ahora en las tres dimensiones fundamentales del sistema de protección social, la sanidad, las pensiones y el desempleo.

En una investigación realizada hace unos años en el marco del *International Social Survey Program* sobre las once economías más desarrolladas del mundo –España entonces era la undécima–, la posición de los españoles en cuanto a la necesidad de que el Estado subvenga, de acuerdo con un principio universalista, a cada una de estas necesidades, respecto a la sanidad, era la segunda más alta.

En las pensiones, igualmente, la segunda más alta, y en el desempleo, y con gran diferencia, la primera más alta. Las diferencias en el apoyo a una cobertura universal proporcionada por el Estado, en el caso de las pensiones y la sanidad están en el orden de un 20% por encima de la media de los once países, y respecto al desempleo en el orden de un 30% más alto¹⁸.

Los datos más recientes al respecto¹⁹ sugieren que se mantiene muy elevada la vigencia del principio universalista y público de cobertura de sanidad, pensiones y desempleo, pero que hay algunos matices que se deben considerar.

La asistencia sanitaria continúa siendo el elemento considerado más intangible de la protección social: casi el 90% opina que debe ser pública y financiarse mediante impuestos²⁰, y casi la mitad la selecciona como la partida de gasto en la que en ningún caso es justificable un recorte en caso de

¹⁸ Calzada, Inés: “¿Qué Estado del Bienestar queremos? Las opiniones de la ciudadanía sobre cómo son y cómo deberían ser nuestras políticas sociales”, *Zerbitzuan*, nº 42, dic. 2007, pág. 103-114.

¹⁹ El último estudio del CIS sobre el Estado de bienestar (E.2.765, *cit.*) se lleva a cabo al comienzo de la crisis, concretamente en el verano de 2008. La conciencia de deterioro de la situación de la economía era ya muy extendida (casi el 60% calificaba la situación económica como *mala* o *muy mala*), pero es dudoso que existiera entonces cualquier conciencia sobre la necesidad de ajustar las cuentas públicas. No parece descabellado imaginar que ahora –cuando la proporción de los que consideran mala o muy mala la situación económica ha alcanzado una cota superior al 80% y la conciencia de la necesidad de ajustar las cuentas públicas está claramente más extendida– haya algún cambio en las opiniones inspirado por el realismo.

²⁰ Aunque la mayoría piensa que la Sanidad se financia mediante cotizaciones sociales, la estructura de la pregunta específica que se financia mediante impuestos, por lo que en realidad la respuesta debe entenderse más como expresión de la preferencia por su condición pública que por el modo de su financiación.

necesidad. Es igualmente **muy amplio el consenso sobre la cobertura pública de las pensiones de jubilación**, pero una cuarta parte de los españoles considera que junto al sistema público se debe incentivar la contratación de planes privados de pensiones con carácter complementario. Por último, respecto a las **prestaciones por desempleo**, manteniéndose una **sólida mayoría favorable a la necesidad de que el Estado proporcione una cobertura económica digna a los desempleados**, también se registra la opinión de un **40% que está de acuerdo con la idea de que esa cobertura hace que la gente se vuelva perezosa**.

¿Hasta qué punto se ha instalado en la opinión pública española la necesidad de una reforma de la protección social? Si atendemos a los datos del estudio anterior, parece claro que predomina cierto escepticismo acerca del futuro de la cobertura social: el 34% de los entrevistados piensa que la situación de las pensiones públicas empeorará (el doble de quienes creen que mejorará) y el 28% piensa también que empeorará la protección del desempleo (igualmente dos veces más que quienes creen que mejorará). **Menos del 10%, sin embargo, está de acuerdo con que se reduzcan prestaciones y servicios sociales si es necesario para ser más competitivos**.

Las reacciones sociales a las reformas en curso –básicamente, al aumento de la edad de jubilación y el alargamiento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión– **son claramente negativas**. Sería absurdo esperar otra cosa en el cuadro de actitudes y valores que hemos examinado. Tenemos así que:

- En conjunto, la reforma de las pensiones concita –en una escala de 0 a 10 en la que el 0 representa el máximo rechazo y el 10 la máxima aprobación– un claro *suspenso* (2,64). Ningún grupo social significativo le concede su aprobación y factores como la edad, la ocupación, la clase social, la ideología o el voto apenas discriminan la intensidad del rechazo.
- El aumento a 67 años de la edad de jubilación concita apenas la conformidad del 17% de los españoles²¹, mientras que el aumento a 25 del número de años utilizados en la base de cómputo para el cálculo de la pensión recaba sólo una conformidad ligeramente superior, del 21%. Ni siquiera entre los votantes del PSOE esa conformidad alcanza siquiera a una cuarta parte de los mismos.
- Tan sólo obtienen una conformidad mayoritaria los aspectos *compensatorios* del acuerdo (reconocimiento de cotización a los becarios y reconocimiento de 9 meses de cotización por hijos a las trabajadoras con permiso de maternidad). Sobre la necesidad de cotizar 37 años para recibir la pensión completa, la opinión se halla dividida por la mitad²².
- La mayoría entiende que la reforma no solucionará los problemas de las pensiones, que reaparecerán en unos pocos años (47%), mientras que un 15% piensa que la reforma no

²¹ CIS, Estudio 2.864, Barómetro de marzo de 2011.

²² Pese a que la formulación del indicador (“Percibir la totalidad de la pensión si se ha cotizado durante 37 años”) favorecería la respuesta positiva.

era necesaria y un 21% cree que había que hacer la reforma y que es mejor que se haya hecho con el acuerdo de sindicatos y empresarios.

Se puede entender lo anterior a partir de dos elementos. Uno, la debilidad de la base cognitiva sobre la necesidad de las reformas; y otro, la oferta a la sociedad de un relato acerca de la necesidad de reformas que sea coherente y que permita que aquellas se implementen con menor coste social.

Sin desconocer que **ninguna reforma de los sistemas de protección social** para acomodarlos a una situación más tensa, tanto desde el punto de vista de los recursos como desde el punto de vista de la base, **ha recibido de entrada las bendiciones de la opinión pública**, es decir, todas han tenido algún grado de coste. Además, se trata de unas cuestiones delicadas desde el punto de vista político.

Aquí es preciso atender al marco teórico de la formación de las actitudes sobre este tipo de cuestiones. Generalmente se considera predominante el *autointerés* u orientación *egotrópica* (la gente es consciente de su interés, y cuanto más cercana se encuentra la edad de jubilación, reacciona más negativamente a cambios que supongan empeorar su situación cara a aquella o ya dentro de ella). Esto es lo que da lugar al llamado “poder anciano”, la teoría del *grey power*, muy determinante políticamente por dos razones. En primer lugar, porque cada vez en las sociedades como la nuestra hay más *grey people*, hay más gente acercándose a la edad de la jubilación (los *baby boomers*, con las numerosas cohortes que los forman).

Y, por otro lado, porque son las personas de esa edad las que votan en mayor proporción y, por tanto, el coste electoral de contrariarles en un tema tan central es muy elevado.

Pero aun dentro de ese marco de limitaciones y aun con esas dificultades, lo cierto es **que los países que han emprendido reformas, incluso los que lo han hecho a partir de una cierta resistencia de sus opiniones públicas, si han sido capaces de explicarlas, han conseguido al final que se entiendan y esa es una condición esencial para que se acepten y es obvio que aquí habría que seguir ese camino.** Las circunstancias no son precisamente favorables. Pero al mismo tiempo es imprescindible que estas reformas –que son tan penosas como inevitables– puedan contar si no con el entusiasmo, al menos con la comprensión de la ciudadanía.

Desde esa perspectiva, la situación española es particularmente delicada, por la forma en la que a nuestro país le afecta la cuestión del **envejecimiento**. Entre 1975 y 2010, los mayores de 65 años han pasado de representar el 10% de la población a suponer el 17% de la misma; antes de 15 años probablemente se superará el 20%²³. Sin duda, el peso mayor de la población de más edad que trae causa de la mayor supervivencia y del descenso de la fecundidad es en sí mismo un fenómeno social positivo cuantitativa y cualitativamente, pero, también en sí mismo, trae consigo un serio problema de estabilidad presupuestaria puesto que incide en tres rúbricas (Sa-

²³ Pérez Díaz, Julio: “El envejecimiento de la población española”, *Investigación y Ciencia*, noviembre, 2010, páginas 34-42.

nidad, Pensiones, Dependencia) cuyas tendencias expansivas dificultan aquella, algo que estamos ya comprobando –en la actual coyuntura de crisis económica y necesidad de consolidación fiscal– de manera aguda. Es precisa alguna forma de *nuevo contrato social* que redefine la *solidaridad intergeneracional* sobre bases posibilistas y realistas, atentas a las nuevas realidades demográficas que la condicionan más allá de lo ideológico, del voluntarismo o de las buenas intenciones.

3

VALORES PERSONALES Y SOCIALES

Parece evidente que uno de los cambios más importantes que haya experimentado la sociedad española en el curso de los últimos 30-35 años es el acusado **pluralismo axiológico** que existe dentro de la misma, sobre todo por lo vivo del contraste que el mismo supone con la situación precedente, durante el franquismo, en el que, al menos en la superficie, prevalecía un **sistema de valores oficial**, un monolitismo axiológico cerrado y compacto.

Pluralismo axiológico y crisis de valores funcionan en el debate social como sinónimos, algo que no es del todo cierto. Siendo un poco más exigentes con los conceptos hablaríamos de crisis de valores más bien para referirnos al debilitamiento del lugar de los valores en una sociedad, en tanto que el pluralismo axiológico remite a la vigencia dentro de aquella de sistemas de valores distintos, al margen de la intensidad de los mismos. Se puede decir, sin mucho margen de error, que en España tenemos de las dos cosas²⁴.

²⁴ Un reciente artículo de Miquel Porta Perales (“La crisis de valores y el individualismo”, ABC, 12 de marzo de 2011, pág. 3) apunta en la dirección correcta al relacionar esa crisis con la secularización y la democratización de la sociedad y el pluralismo axiológico derivado de aquellas, señalando que de la misma no se deriva necesariamente una quiebra moral, aunque el pluralismo, en sí mismo, no es tampoco una garantía de progreso moral.

El debilitamiento del papel de prescripción axiológica de las instancias socializadoras en las sociedades tradicionales (la familia, la escuela, y la Iglesia) es un fenómeno que tiene lugar en todos los procesos de modernización. Lo excepcional del caso español es la velocidad a la que el mismo se ha producido y –en mi opinión– el desconcierto axiológico en que en buena medida ha dejado instalada a la sociedad.

Desde este punto de vista, probablemente un factor muy importante es la acelerada pérdida de centralidad de la Iglesia Católica, y muy especialmente en lo que se refiere a su papel de prescripción moral. Sin entrar en excesivos pormenores, lo cierto es que, aunque España sigue siendo *nominalmente* una sociedad homogénea en lo religioso, el lugar de la religión en la vida ha experimentado una drástica reducción.

En efecto, de acuerdo con el Barómetro del CIS de julio de 2011²⁵, casi tres cuartas partes (72%) de los adultos españoles se declaran *católicos*, frente a algo más del 2% de creyentes de otra religión²⁶, 17% de *agnósticos* y 7% de *ateos*. Ese

²⁵ Estudio 2.909, realizado sobre una muestra de 2.475 casos.

²⁶ Téngase en cuenta que el universo de los barómetros del CIS son los nacionales españoles. El peso de los creyentes de otras religiones –particularmente la musulmana por el peso de la población magrebí, pero también evangélicos y otras Iglesias protestantes entre los latinoamericanos– en el conjunto de la población residente debe de estar entre el 5 y el 7% de aquella.

rango de identificación confesional es sólo ligeramente superior a la media de la UE²⁷ (68%) y claramente inferior al registrado en los países más caracterizados por la intensidad de su definición religiosa en Europa: Grecia (95%), Polonia (93%), Portugal (81%) e Italia (79%).

Lo más destacable, sin embargo, a este nivel, es el ritmo al que se produce esa desidentificación religiosa en España. En efecto, la identidad católica era suscrita como propia por el 91% de los españoles en 1981 y por el 87% en 1990²⁸, lo que supone que la contracción de esa identificación supera el 20% respecto al principio de la década de los 80 y el 17% respecto a su final. El proceso, pues, se ha acelerado notablemente en los últimos veinte años.

Aun más importante, esta caída del sentimiento de identidad religiosa se correlaciona fuertemente con la edad. En el barómetro del CIS de julio de 2011, la media de los españoles que se definen como *católicos* es del 71,7%. Entre los mayores de 65 años suscriben esa identificación el 91%; entre los menores de 35 no llega al 55%.

Pero donde con mayor nitidez se aprecia la pérdida de importancia de la dimensión religiosa en la vida española es, sin

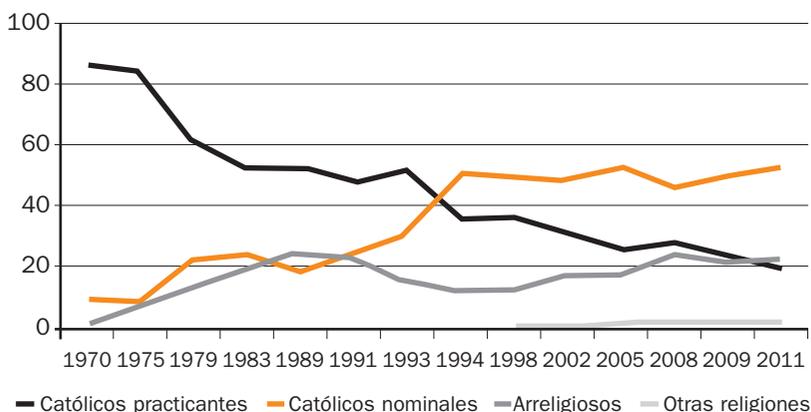
²⁷ *European Mindset 2009*, Fundación BBVA, www.fbva.es, estudio sobre una muestra representativa de los adultos en 14 países europeos (incluida Turquía) en diciembre de 2009.

²⁸ Datos de F. Andrés Orizo, *Los nuevos valores de los españoles*, Fundación Santa María, Madrid, 1991, págs. 120-121.

duda, en la **práctica religiosa**. Aquí sí que es posible ver la condición casi telúrica del cambio producido en los últimos 40 años, como nos lo muestra el Gráfico 2.

La práctica religiosa, en efecto, ha pasado de ser un comportamiento muy mayoritario²⁹ en la sociedad a con-

GRÁFICO 2
Práctica religiosa en España (1970-2011)



Fuentes: Informes FOESSA (1970, 1975 y 1993); F. Andrés Orizo, *España entre la apatía y el cambio social*, Mapfre, Madrid, 1983 (1979 y 1983); P. González Blasco y J. González Anleo, *Religión y Sociedad en la España de los 90*, Fundación Santa María, Madrid, 1992 (1989); A. De Miguel, *La Sociedad Española 1992-1993*, Alianza Editorial, Madrid, 1992. Desde 1994, todos los datos corresponden a los barómetros del CIS. *Recuérdese la limitación del universo a nacionales españoles.

²⁹ Los datos de FOESSA correspondientes a las dos primeras encuestas (1970 y 1975) podrían acogerse con alguna reserva en cuanto a la sinceridad de la práctica declarada en ellos, en función del contexto político autoritario que aún prevalecía en España y la identificación de la práctica religiosa con la conformidad política del momento. Téngase en cuenta, además, que en la serie de FOESSA se agrupan en la categoría de *católicos practicantes* a quienes se declaraban “muy buenos católicos”, “católicos practicantes” y “católicos poco practicantes”, es decir, es quizá excesivamente inclusiva.

vertirse en un fenómeno, si no residual, sí claramente minoritario.

Evidentemente, una parte de ese proceso tiene que ver con la adopción –muy tardía en relación con el contexto europeo– de un patrón de secularización que la mayoría de las sociedades occidentales, y muy singularmente las europeas, habían adoptado antes. Pero hay algo más, algo específico que tiene que ver con la inusitada velocidad e intensidad que registra ese proceso.

La relación entre la edad y la práctica religiosa tiene una notable fuerza. De acuerdo a la última Encuesta sobre Religiosidad del CIS³⁰ el porcentaje de menores de 35 que se definen a sí mismos como *católicos practicantes* no llega al 10%³¹, en tanto que entre los mayores de 65 años la proporción de practicantes alcanza el 55%. Casi tan fuerte es la covariación entre esta identificación y el voto: mientras el 52% de los votantes del PP se definen como católicos practicantes, sólo el 21% de los del PSOE lo hacen en los mismos términos.

³⁰ Encuesta de Religiosidad del CIS para el Ministerio de Justicia, de febrero de 2008 (E. 2.752), realizada sobre una muestra de 1.957 casos.

³¹ Bien es cierto que –como la reciente *Jornada Mundial de la Juventud* celebrada en Madrid en agosto de 2011 ha puesto de manifiesto– aunque sean menos numerosos, los jóvenes que viven hoy su religiosidad lo hacen de una forma mucho más comprometida, asertiva y desinhibida que sus padres o sus abuelos.

El vínculo entre esa práctica y las prescripciones institucionales de la Iglesia es, en conjunto, bastante débil: apenas el 18% de la población que se define como católica declara un nivel de práctica consistente con el que la Iglesia define como preceptivo (asistencia a misa la mayoría de los domingos y festivos o con mayor frecuencia). Mientras entre los católicos menores de 35 años el cumplimiento básico del precepto dominical no llega al 6%, entre los mayores de 65 años la fidelidad a ese precepto alcanza el 33%³².

Más allá de estos aspectos generales de identidad y práctica, interesa profundizar algo más en el *lugar* de la religión en la vida de la gente y, muy especialmente, dado nuestro punto de vista analítico, su papel como **prescriptor axiológico**.

Porque esa pérdida de lugar no se entiende sin una referencia al **debilitamiento extraordinario de la centralidad de la Iglesia tanto en el papel de prescripción moral** como en el de influencia admitida sobre otros aspectos del comportamiento, señaladamente, la política.

En esta dimensión, los datos son contundentes. El 52%³³ piensa que la Iglesia Católica no da respuesta adecuada a las necesidades espirituales de la gente, el 61% considera

³² CIS, barómetro de junio de 2011.

³³ Todos los datos que siguen corresponden a la última *Encuesta de Religiosidad* del CIS, *cit.*

inadecuada su respuesta a los problemas de la vida familiar, el 65% entiende inadecuada su respuesta a los problemas relacionados con la investigación científica (biotecnología, ingeniería genética...) y una proporción similar (62%) considera inadecuada su respuesta al crecimiento del SIDA. Sólo en un asunto, los problemas derivados de la pobreza, se encuentra un juicio más equilibrado –sin llegar a ser positivo– sobre la respuesta eclesial, relacionado posiblemente con la visible presencia de la Iglesia en las organizaciones caritativas y, sobre todo, en la más importante de ellas, Cáritas.

En lo que atañe a los temas de moral individual y microsocioal como el divorcio, el aborto, el uso del preservativo o las relaciones homosexuales, la discrepancia personal es aún mayor: el 71% está personalmente contra la postura de la Iglesia respecto al divorcio, el 60% se opone a la postura sobre el aborto, el 58% está contra esa doctrina sobre los preservativos, el 62% se opone a la doctrina sobre la homosexualidad, el 57% se opone a la doctrina sobre la eutanasia. Entre los más jóvenes, el nivel de rechazo personal a esa doctrina es más intenso.

La cuestión, en el plano que aquí nos interesa, es determinar hasta qué punto el vacío prescriptivo que deja (a su pesar) la Iglesia ha sido o no rellenado con otras alternativas –sistemáticas o no– de valores. Es una cuestión compleja. Involucra dimensiones distintas: hasta qué punto hay o no acuerdo sobre lo que es bueno y deseable (*pluralismo axiológico*), qué grado de coherencia interna existe en los siste-

mas de valores de la gente (es decir, si la gente tiene un conjunto coherente de orientaciones de valor o más bien un *patchwork* de valores incongruentes entre sí desde el punto de las construcciones morales articuladas) y a quiénes –si es que a alguien– se confiere *legitimidad prescriptiva* para marcar esas orientaciones de valor.

Una aproximación *modesta* a la cuestión nos lleva en primer lugar a examinar cuál es el lugar que se confiere a los distintos aspectos de la vida (jerarquía de las *cosas que importan* o *valores finalistas*) y cómo se declinan en los distintos sectores de la sociedad.

Disponemos de datos al respecto en tres encuestas recientes³⁴ que nos permiten trazar un mapa preciso de esas orientaciones finalistas (ver Cuadros 2 y 3).

A pesar de algunas diferencias en la formulación de las preguntas en las tres encuestas, el análisis conjunto de las tres nos sitúa ante un panorama axiológico referido a los valores finalistas bastante bien definido.

³⁴ Se trata del Barómetro del CIS de diciembre de 2009 (2.497 casos), la encuesta de Metroscopia en la que se basa el libro *Pulso de España 2010. Un informe sociológico* (Toharia, J.J. [coord.], Biblioteca Nueva, Madrid, 2011), realizada entre septiembre y noviembre de 2010 sobre una muestra de 5.000 casos, y la encuesta *Valores Sociales y Drogas 2010*, realizada por encargo de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la Obra Social de Caja Madrid y el Pan Nacional contra la Droga en febrero de 2009 sobre una muestra de 1.200 casos. Las dos primeras contemplan el universo de mayores de 18 años, mientras la tercera se dirige a personas comprendidas entre 15 y 64 años de edad.

CUADRO 2

Importancia asignada a distintos aspectos de la vida

¿Podría decirme qué importancia tienen en su vida los siguientes aspectos? Utilice para valorarlos una escala del 0 al 10 en la que 0 significa “nada importante” y 10 significa “muy importante”.

	Nada importante			Muy importante				(N)
	(0-1)	(2-3)	(4-6)	(7-8)	(9-10)	(N. S.)	(N. C.)	
El trabajo	2,8	0,6	6,7	24,3	63,6	1,2	0,8	(2489)
La familia	0,3	0,2	1,0	8,2	90,0	0,2	0,2	(2489)
La política	26,3	14,7	36,8	14,9	5,2	1,5	0,6	(2489)
El bienestar económico	0,4	0,6	14,2	41,3	42,4	0,6	0,6	(2489)
El tiempo libre	1,2	1,3	18,4	41,7	35,8	1,1	0,5	(2489)
La salud	0,2	0,0	1,7	6,3	91,4	0,2	0,2	(2489)
Los amigos y las amigas	0,8	0,7	15,7	35,5	46,0	0,6	0,6	(2489)
La religión	25,2	12,6	31,0	16,9	12,8	0,8	0,7	(2489)

	Media	Desviación típica	(N)
El trabajo	8,66	2,08	(2439)
La familia	9,63	0,99	(2481)
La política	3,97	2,93	(2437)
El bienestar económico	8,13	1,70	(2459)
El tiempo libre	7,80	1,94	(2450)
La salud	9,68	0,93	(2479)
Los amigos y las amigas	8,16	1,84	(2458)
La religión	4,52	3,31	(2450)

Fuente: CIS, Barómetro de diciembre 2009

CUADRO 3

Cosas que importan en la vida

(Puntuación media en escala de 0 a 10 en la que 0 equivale a ninguna importancia y 10 a mucha importancia)

	Media	Desviación típica
La familia	9,5	1,0
La salud	9,5	1,0
Los amigos	8,3	1,8
El tiempo libre	8,1	1,8
El trabajo	8,1	2,2
El dinero	7,2	1,9
La religión	4,4	3,5
La política	4,3	3,1

Fuente: Metroscopia 2010

En los tres estudios, la **salud** y la **familia** ocupan –de forma destacada– las posiciones de mayor relieve. Evidentemente, la primera es una condición *sine qua non* para el planteamiento jerárquico del resto de los valores finalistas. Su elevada valoración responde a su naturaleza de prerrequisito de todo lo demás, hasta el punto de que en las investigaciones comparativas³⁵ no se suele incluir entre los aspectos a los que se da más importancia en la vida, ya que se considera que no está en el mismo plano que los restantes valores.

³⁵ Por ejemplo, ni el *European Values Study* ni el *World Values Survey* incluyen la salud en los ítems por cuya importancia en la vida se pregunta.

CUADRO 4
Jerarquía de los valores finalistas

VALORES FINALISTAS	MEDIA EN ESCALA DE 1 A 10
Tener unas buenas relaciones familiares	9,14
Mantener y cuidar la salud	8,55
Tener muchos amigos y conocidos	8,44
Ganar dinero	8,30
Tener una vida sexual satisfactoria	8,26
Tener éxito en el trabajo	8,21
Cuidar el medio ambiente	8,19
Disponer de mucho tiempo libre/ocio	8,06
Obtener un buen nivel de capacitación cultural y profesional	8,05
Respetar las normas	7,91
Llevar una vida moral y digna	7,90
Superarse día a día	7,79
Vivir como a cada uno le gusta sin pensar en el qué dirán	7,73
Respetar la autoridad	7,71
Preocuparse por lo que ocurre en otros lugares del mundo	6,41
Vivir al día sin pensar en el mañana	6,28
Hacer cosas para mejorar el barrio/comunidad	5,98
Arriesgarse ante cosas nuevas e inciertas	5,89
Invertir tiempo y dinero en estar guapo/a	5,87
Interesarse por temas políticos	4,56
Preocuparse por cuestiones religiosas/espirituales	3,83

Fuente: *Valores Sociales y Drogas 2010*

En cuanto a la **familia**, no es ningún descubrimiento que España, como la mayor parte de las sociedades *meridionales*, es una sociedad más *familista* que las de los países del norte y del centro de Europa o los norteamericanos. De cualquier forma, la familia aparece en las investigaciones comparativas

(señaladamente en el *World Values Survey*) como un anclaje de referencia vital prácticamente universal, por más que los vínculos familiares se configuren de formas distintas y la *cultura de la familia* sea muy diversa en las distintas sociedades³⁶.

Lo que merece más atención es lo que sigue en importancia. De alguna forma, se observa en las tres encuestas que existe una **alta valoración relativa** de los **amigos/as** y el **tiempo libre** y una **valoración relativamente menor** en cambio del **trabajo** y el **dinero/bienestar económico**, mientras que política y religión son considerados como **aspectos poco** (en rigor, *muy poco*) **importantes** en la vida.

Una primera lectura de ello nos conduciría a hablar de un patrón cultural muy *vitalista* y *presentista*, una cultura del *carpe diem*, desentendida de lo social-abstracto y más atenta al disfrute que al sacrificio. Esto es, nos llevaría al tópico de la visión *orientalista* de nuestra sociedad, tópico –por cierto– particularmente dañino en esta precisa coyuntura. ¿Es así? ¿Debe serlo?

Lo primero que habría que señalar al respecto es que cuando se contempla este indicador en una perspectiva com-

³⁶ Téngase en cuenta que la pregunta equivalente a la que aquí estamos usando para establecer los valores finalistas ofrece en el *World Values Survey* la siguiente ordenación de más a menos importante (el valor expresa la proporción de los que consideran cada aspecto como *muy importante*) en media de todos los países incluidos en el estudio: Familia (89%), Trabajo (65%), Amigos (44%), Religión (40%), Tiempo libre (33%) Cfr. Inglehart, R., Basáñez, M., Díez Medrano, J., Halman, L., y Luijkx, R. (editores), *Human Beliefs and Values*, México D.F., Siglo XXI Editores, 2004, página 25.

parativa amplia, como, por ejemplo, la que proporciona el *World Values Survey*, el panorama es bastante más difuso. La primacía de las orientaciones presentistas (amigos, tiempo libre) entre los españoles es menos marcada en este estudio y no está alejada de la media, si bien es cierto que los datos son más antiguos³⁷.

Ahora bien, si observamos, en el estudio del CIS de 2009, cómo se declina a través de la edad la importancia asignada a los distintos aspectos de la vida observamos que las orientaciones más hedonistas (amigos, tiempo libre) son significativamente más fuertes entre los más jóvenes, en tanto que aquella que más claramente implica una dimensión de sacrificio o de aplazamiento de las gratificaciones, el trabajo, es entre los jóvenes significativamente más débil, mientras que el bienestar económico alcanza la máxima importancia entre los más jóvenes. Evidentemente, existe un efecto *life stage* (punto del ciclo vital) que hace que las preocupaciones y los focos de interés experimenten variaciones sensibles a lo largo de la vida. Pero, sin sacar las cosas de quicio ni dar toque apocalíptico alguno a este relato, sí resulta inquietante ver cómo entre los jóvenes parece haber una cierta ruptura del vínculo entre el trabajo (y extensivamente, el esfuerzo y el sacrificio) y el logro (en su dimensión más mostrenca, al menos, la del bienestar económico). ¿Nos encontramos ante una generación a la que no hemos sabido enseñar ese vínculo? ¿Los *hijos de la prosperidad* están axiológicamente mal equipados para enfrentarse a adversidades como

³⁷ *Human Beliefs and Values*, cit., páginas 26 a 33.

las presentes y no tienen la *resilience*³⁸ necesaria para hacerles frente? Dejémoslo así, en preguntas sin respuesta.

Los análisis anteriores acerca de la religiosidad ya dejan adivinar algo de la modesta importancia relativa de la religión en la vida de los españoles. Baste ahora añadir que es esta una dimensión en la que la fuerza explicativa de la edad es contundente: mientras para los menores de 35 años la media de importancia atribuida a la religión es de 3,48, entre los mayores de 65 años es de 6.49. Esa pérdida de lugar de la religión en la vida de los españoles se pone de manifiesto con claridad en los datos del *World Values Survey*, según los cuales España ocupa el lugar 53 de los 70 países analizados: la proporción de españoles que según ese estudio consideran la religión *muy importante* en sus vidas es del 19%, frente a una media del 40% en los 70 países en que se plantea la cuestión³⁹.

En cambio, la minusvaloración de la política como algo importante en la propia vida está mucho menos fracturada, es más homogénea. Nos detendremos en ello en el siguiente epígrafe, pero baste aquí apuntar que ni la edad, ni el género, ni la afinidad electoral marcan grandes diferencias en la condición claramente subordinada que se concede a la política en las orientaciones finalistas de los españoles. Únicamente advertimos

³⁸ El concepto de *resilience* (que los diccionarios traducen como *resistencia* o *elasticidad* y que algunos psicólogos simplemente denominan “resiliencia”) se refiere a la capacidad psicológica de afrontar de forma positiva el estrés más intenso (típicamente, el *estrés post-traumático*) y, extensivamente, evoca la personalidad capaz de enfrentar cualesquiera dificultades con voluntad y ánimo de superarlas.

³⁹ *Human Beliefs and Values*, cit. página 31.

diferencias a través del nivel de estudios: a mayor nivel, mayor consideración de la importancia de la política (2,61 entre los que no tienen estudios; 5,07 entre quienes tienen estudios superiores). En esta dimensión, por otra parte, la posición relativa de España entre los países investigados en el *World Values Survey* es aun más extrema: sólo en 5 de los 71 países en que se incluye esta dimensión en el estudio la gente siente la política como menos importante que en España⁴⁰.

Pasamos ahora a considerar otro aspecto de la cuestión, lo que podríamos denominar niveles de consenso/disenso acerca de la aceptabilidad de conductas sujetas a algún grado de controversia moral. Dos son las dimensiones a explorar: el nivel general de aceptabilidad de esas conductas controvertidas, que nos dará la medida de la *tolerancia* o *indiferencia*⁴¹ con que la sociedad contempla esas conductas, y el grado de división que existe dentro de la sociedad respecto de ellas, lo que nos permitirá establecer hasta qué punto hay un conflicto de valores en su interior.

Los datos españoles más recientes son los que nos ofrece la encuesta *Valores Sociales y Drogas 2010*⁴², tal como se muestran en el cuadro que sigue:

⁴⁰ *Human Beliefs and Values*, cit. página 29.

⁴¹ Evidentemente, lo que para algunos es *tolerancia*, una dimensión socialmente positiva, otros lo considerarán *indiferencia*, falta de brújula axiológica, algo negativo para la sociedad.

⁴² *Valores Sociales y Drogas 2010*, cit. Nótese que el universo de esta encuesta es el de personas de 15 a 64 años, es decir, más abierto por abajo (lo más común es que las encuestas de opinión se dirijan a los mayores de 18 años) y más cerrado por arriba (normalmente no hay un límite superior de edad en la definición del universo) que la práctica totalidad de las encuestas que estamos utilizando.

CUADRO 5

Nivel de justificación de diferentes comportamientos

(% en escala agrupada*)

	Inadmisible	Poco admisible	Bastante/ totalmente admisible
Que se aplique la eutanasia a todo aquel que lo pida	15,9	23,9	60,2
Que exista libertad total para abortar	21,1	24,7	54,2
Tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo	34,9	20,7	44,4
Aplicar pena de muerte a personas con delitos muy graves	46,3	17,9	35,8
Fumar en edificios públicos	53,2	23,4	23,5
Que una persona se suicide	53,5	25,5	21,0
Beneficiarse de una promoción profesional jugando con ventaja	58,9	23,7	17,5
Hacer trampa en exámenes u oposiciones	58,6	24,5	16,9
Emborracharse en lugares públicos	62,8	22,2	15,1
Tener una aventura fuera del matrimonio	64,3	21,5	14,2
Fumar marihuana o hachís en lugares públicos	70,8	15,6	13,6
Modificación genética de los alimentos	64,4	22,9	12,7
Engañar en pago de Impuestos	69,0	19,2	11,8
Comprar algo aun sospechando que ha sido robado	69,2	19,3	11,5
Hacer ruido las noches de los fines de semana impidiendo el descanso de los vecinos	73,5	15,8	10,7
Robar artículos en grandes almacenes	78,6	14,2	7,3
Buscar disculpas para coger bajas laborales injustificadas	77,8	15,3	6,9
Mentir en interés propio aunque perjudique a otros	74,9	18,3	6,8
Conducir con exceso de velocidad	82,1	11,7	6,2
Contratar en peores condiciones a un extranjero por serlo	85,9	9,6	4,5
Conducir después de haber tomado unas copas	85,9	10,1	4,0

Fuente: *Valores Sociales y Drogas 2010*

* Escala: 1 a 3 = Inadmisible; 4 y 5 = Poco admisible; 6 y 7 = Bastante admisible; 8 a 10 = Totalmente admisible

Varias cuestiones llaman la atención. Sin duda, en primer lugar, la de que **la mayor aceptabilidad o la menor inaceptabilidad se refieran justamente a cuestiones de indudable calado moral**: tanto la eutanasia como el aborto, las dos conductas más “aceptables” de la lista, a gran distancia de las que le siguen, tienen que ver con la vida humana, su garantía y su defensa. Por cierto, hay un muy llamativo contraste –dentro de las cuestiones de mayor trascendencia moral– entre la amplia aceptación que se registra hacia la eutanasia y el rechazo que en cambio suscita el suicidio, cuando en el fondo la primera podría definirse como un suicidio asistido, eso sí, con algún soporte “causal” que lo “justifique”.

Contrasta así esa amplia admisibilidad de conductas de efecto trascendente e irreversible con lo que parece **cerrada intolerancia hacia comportamientos sociales de efectos banales** (como hacer ruido los fines de semana) o, en la práctica, **mucho más generalizados socialmente** (mentir en provecho propio, copiar en los exámenes, conducir con exceso de velocidad o, la que provoca el mayor rechazo de toda la lista, conducir después de haber tomado unas copas).

¿Cómo se explica ello? Hay varias dimensiones que atender. La primera, la que fundamentalmente explica por qué hay un rechazo tan cerrado a esas conductas banales o frecuentes que acabamos de ver, nos lleva a la distinción –elaborada en la politología anglosajona– entre cuestiones *posicionales* (*position issues*) y cuestiones *de valencia* (*va-*

lence issues)⁴³. Las primeras son aquellas acerca de las que existe división o fractura en la sociedad, mientras que las segundas son aquellas en las que todo el mundo tiene una actitud –favorable o contraria– homogénea, hay un *punto ideal* en el que converge la sociedad sin mayores fracturas. Ejemplo de cuestiones posicionales serían la pena de muerte, el aborto o las relaciones homosexuales. Ejemplo de cuestiones de valencia serían robar, o conducir bebido, conductas acerca de las que, además de un reproche penal, existe un reproche moral más o menos compartido por la sociedad, con muy pocas excepciones.

Pues bien, en este contexto analítico, lo más relevante es ver cómo en las cuestiones posicionales **la balanza moral parece inclinarse claramente por la actitud permisiva**, la de admitir como justificables aquellos comportamientos con más carga de controversia moral. Esto se manifiesta en cuestiones como la aceptación de la eutanasia o el aborto respecto a los cuales la proporción de rechazo en este universo (recordemos sus limitaciones de edad) resulta en términos absolutos muy minoritaria y en términos relativos mucho más permisiva que la de otras sociedades. Aunque el universo sea distinto y los datos algo más viejos que los que estamos comentando, vale la pena extraer una vez más del *World Values Survey* algunos indicadores comparativos.

⁴³ El concepto fue desarrollado originalmente por Donald Stokes a principios de los 60 y refinado por él y David Butler más tarde. Cfr. *Political Change in Britain: Forces Shaping Electoral Choice*, Londres, Macmillan, 1969.

Estos nos ratifican en la impresión que surge de la encuesta que estamos comentando. Respecto a las conductas de mayor *densidad moral* (las atinentes al derecho a la vida y su protección), observamos que el rechazo a la eutanasia (24% frente a una media en los 79 países en que se incluyó el indicador del 44%; la posición española ocupa el lugar 60 de 79, ordenados de más a menos rechazo de la conducta) o al aborto (28% frente a una media de 44%; la posición española es la 54 de 81) figuran entre las de aquellas sociedades donde el rechazo es menor. Aún más llamativa es la distancia respecto de la media de la posición sobre la homosexualidad: un rechazo del 17% frente a una media del 56%; la posición relativa es la cuarta más tolerante de los 80 países que incluyen la pregunta, sólo en Islandia, Suecia y Holanda hay una posición más tolerante. Asimismo, respecto a conductas como la prostitución o el consumo de drogas *blandas* la posición española se encuentra también en el *podio* de las más tolerantes⁴⁴.

Pero, probablemente, la pista más interesante que esta investigación comparativa nos suministra es la que se refiere a la evolución experimentada por la opinión pública española en el decenio que media entre 1990 y 2000. Aunque la comparación está afectada por el hecho de que en la oleada más reciente se hayan incluido algunos países emergentes y en desarrollo que no estaban incluidos en la anterior y, dentro de ellos, varios países musulmanes que muestran los más altos

⁴⁴ *Human Beliefs and Values, cit.*, pág. 365 y ss.

índices de rechazo, sobre todo a las conductas que retan la convención moral tradicional, lo cierto es que en el conjunto de los países los índices de rechazo incondicional de esas conductas no sólo han variado poco, sino que incluso en la mayoría de ellos han aumentado.

Sin embargo, **en España –especialmente en las cuestiones que atañen a la moral sexual y aquellas relacionadas con la protección de la vida humana– los índices de tolerancia experimentan un llamativo aumento.** Así, por ejemplo, mientras en el conjunto de los países analizados en el *World Values Survey* el rechazo a la homosexualidad se reduce en 7 puntos porcentuales, en España lo hace en 29 puntos. Mientras en el conjunto de países aumenta en 2 puntos el rechazo a la prostitución, en España el mismo disminuye en 20 puntos. Aumenta la tolerancia hacia la eutanasia en España en 21 puntos, mientras en el conjunto prevalece la tendencia contraria (aumenta 2 puntos el rechazo).

Es cierto que en algunos de los casos citados el aumento de la media del rechazo se debe a la inclusión en la encuesta de sociedades más *cerradas*. Pero, incluso si limitamos la observación a sociedades occidentales incluidas en la encuesta en los dos momentos temporales veremos que **en ninguna como en España tiene lugar un cambio tan intenso en el sentido de la apertura a admitir todo género de comportamientos moralmente controvertibles.**

¿Qué está pasando? Decía antes que probablemente nos encontramos ante un cuadro en el que se combinan un cierto

pluralismo axiológico junto con una pérdida de anclajes de los sistemas de valores. Ello tiene que ver, a mi entender, con el proceso de secularización tratado *in extenso* en las páginas anteriores y también con otras transformaciones sociales importantes que atañen a las otras instancias *tradicionales* de socialización, la familia y la escuela.

No es posible detenernos tanto como, probablemente, el tema reclame en la relación que pueda establecerse entre los cambios en estos pilares sociales y lo que podríamos caracterizar –como mínimo– como el desconcierto axiológico de la sociedad española. Pero sí puede afirmarse, como mínimo, que ha cambiado profundamente la intensidad y el sentido de ese proceso dentro del núcleo familiar y que se ha debilitado notablemente el papel de la escuela en esa misión.

Ese cambio responde tanto a las transformaciones materiales, formales e institucionales en las propias agencias de socialización, como a la reacción pendular que se produce en la sociedad española con el advenimiento de la libertad política en el proceso de Transición democrática, respecto a la “abolición” de un sistema de valores “oficial” y la entrada en escena de un “mercado de valores”, no en el sentido convencional del mercado bursátil, sino en el de la competencia de sistemas de orientación moral distintos buscando la adhesión voluntaria de la gente.

Los cambios familiares relevantes en este escenario tienen múltiples dimensiones. En un lapso temporal muy breve, a lo sumo de 35 años, hemos pasado de un modelo único de fa-

milia a una pluralidad de *tipos* familiares. De la *familia* a las *familias*. No somos desde luego en esto una excepción: es un proceso por el que han ido pasando la mayoría de las sociedades occidentales en el curso de los últimos 70 años. El elemento diferencial es que aquí lo hemos hecho más tarde, más rápido y más *a fondo*.

Sea el que sea el indicador que adoptemos (natalidad, nupcialidad, separaciones y divorcios, tamaño medio de la familia) en todos ellos encontramos el mismo patrón: cambio muy intenso a partir de la muerte de Franco (en el caso de los divorcios es algo posterior, puesto que la ley data de 1981) en la misma dirección que las sociedades europeas de nuestro entorno, y un “punto de llegada” que, en muchos casos, llega más lejos de lo que, a lo largo de un periodo mucho más largo, lo han hecho aquellos países a cuyas pautas de configuración familiar nos acercamos.

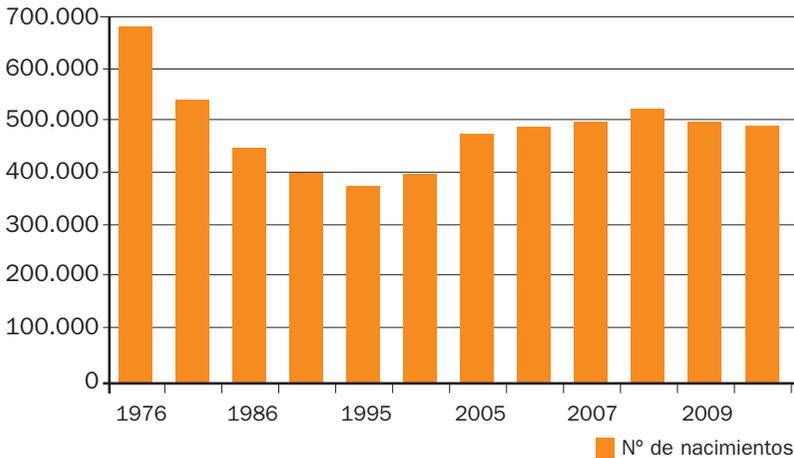
La natalidad experimenta una contracción insólita entre 1976 y 1995. En apenas 20 años el número de nacidos en España desciende en una proporción desconocida, el 47%, en ausencia de fenómenos explicativos *externos* (guerras, epidemias). La tasa bruta de natalidad⁴⁵ pasa del 18,74 al 9,23 es decir, desciende por encima del 50%. El indicador coyuntural de fecundidad⁴⁶ desciende aun más: del 2,80 al 1,17. Esa tenden-

⁴⁵ La tasa bruta de natalidad es el número de nacidos por cada mil habitantes.

⁴⁶ El indicador coyuntural de fecundidad expresa el número de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida si presentase a cada edad la misma intensidad fecunda que la observada en cada momento sobre la población total de mujeres.

cia se *corrige* un tanto en los años siguientes: en 2008, la natalidad había crecido un 43% respecto al punto más bajo de la serie (1995), gracias, también, al superior aporte de las madres extranjeras, tras la intensa corriente migratoria que tiene lugar en los años anteriores. Pero, tras la llegada de la crisis económica, ha vuelto a descender la natalidad, que ahora es un 7% menor que en 2008, como consecuencia del descenso de la natalidad tanto entre madres españolas como extranjeras: el patrón de natalidad de estas últimas tiende a aproximarse cada vez más al de las nacionales⁴⁷.

GRÁFICO 3
Natalidad en España (1976-2010)

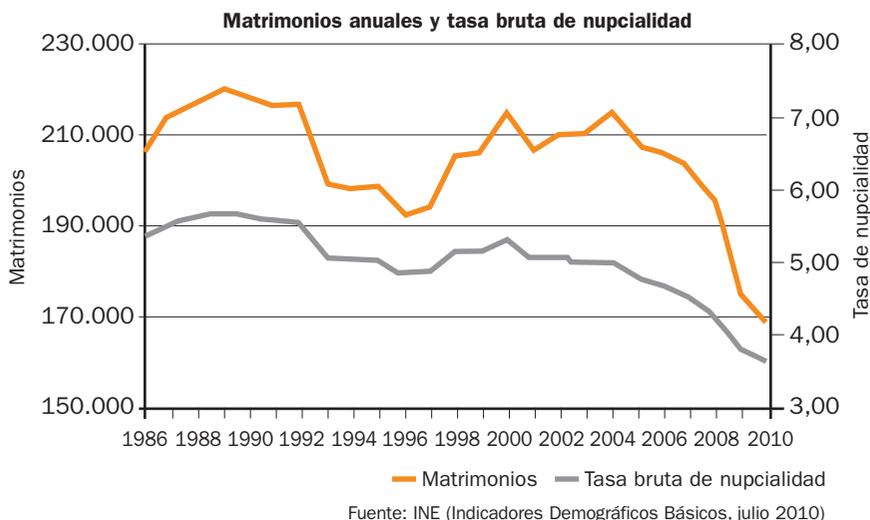


Fuente: elaboración propia sobre datos del INE

⁴⁷ En 2002 el número medio de hijos por mujer extranjera era de 2,05 frente al 1,21 de las españolas; en 2010 el número medio de las extranjeras ha descendido a 1,64 mientras el de las españolas es de 1,32.

Menos hijos de menos matrimonios. La caída en la nupcialidad es también muy pronunciada. Si en 1976 la tasa bruta de nupcialidad⁴⁸ era de 7,18 en 2010 había descendido casi a la mitad, a 3,67.

GRÁFICO 4
Nupcialidad en España (1986-2010)



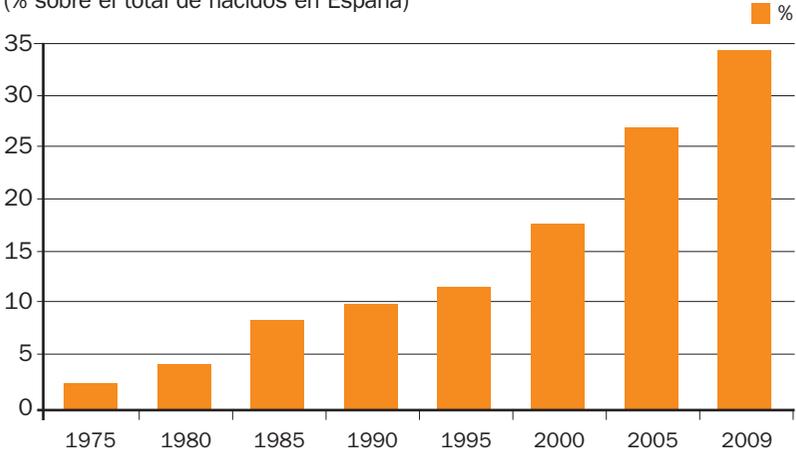
Este descenso de la nupcialidad tiene un claro reflejo en el incremento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, que han pasado de representar el 2,02% del total de nacimientos en 1975 a suponer el 34,84% de aquellos en 2009 (último año disponible):

⁴⁸ La tasa bruta de nupcialidad expresa el número de matrimonios por cada 1.000 habitantes.

GRÁFICO 5

Nacidos de madre no casada (1975-2009)

(% sobre el total de nacidos en España)



Fuente: Elaboración propia sobre Indicadores Demográficos Básicos del INE

Este notabilísimo cambio, en un tiempo tan reducido tiene también algo que ver en su origen con las diferencias entre madres españolas y extranjeras. Así, en 2002 (primer año en que el INE desglosa este dato según la nacionalidad de la madre) las diferencias entre la proporción de hijos nacidos de madres no casadas españolas (el 19,27%) y extranjeras (el 43,05%) eran muy acusadas. En 2009, en cambio, la proporción de hijos extramatrimoniales de las extranjeras ha descendido ligeramente (41,87%), mientras que, en cambio, la proporción ha aumentado mucho entre las españolas (32,57%).

Otro cambio importante en el contexto familiar es el que se deriva de la existencia de una legislación que permite el divorcio, prohibido hasta 1981. La proporción de rupturas matrimo-

niales ha ido creciendo de forma ininterrumpida desde la aprobación de la ley (en ese año se registraron poco más de 16.000 rupturas, sumando separaciones y divorcios) hasta el comienzo de la crisis económica. Así, en 2006 se produjeron en España 149.000 separaciones y divorcios, apenas 50.000 menos que matrimonios se celebraron en ese año. Desde ese año, hasta 2009, y pese a un cambio legislativo que simplifica la tramitación de esos procesos, se ha reducido apreciablemente el número de rupturas, que en 2009 descendieron hasta las 124.000. Sin embargo, y pese a la persistencia de la crisis económica a la que la mayor parte de las interpretaciones atribuye el descenso de los últimos años, en 2010 las rupturas matrimoniales han vuelto a repuntar casi un 3%, totalizando algo más de 127.000⁴⁹.

Pero, sin duda, el factor más importante en el contexto en el que aquí estamos analizando la cuestión es la revolución que en estos años se produce respecto a la incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar. Un solo dato da idea de la magnitud del cambio producido. En 1976, la proporción de mujeres mayores de 16 años que formaban parte de la población activa era del 28,8%. Hoy esa proporción es prácticamente doble, del 53,1%, que se eleva hasta el 68,2% si consideramos sólo a las mujeres menores de 65 años. En 1976, la tasa de actividad masculina (78%) era 2,7 veces superior a la femenina. Hoy la diferencia entre la tasa de actividad masculina (67,4) y la femenina es apenas del 27%.

⁴⁹ INE, *Movimiento Natural de la Población* para los datos hasta 2009 y Consejo General del Poder Judicial para los datos de 2010.

Nada de lo anterior implica necesariamente una pérdida de importancia de la familia, del vínculo familiar. La diversidad estructural que ha adquirido la *familia nuclear* –entre las que hay familias tradicionales, monoparentales, reconstituidas, parejas del mismo sexo...– es compatible con la persistencia de un sentimiento *familista* muy activo, con la conservación de un potente vínculo con la *familia extensa* (abuelos, tíos, primos, hermanos...) que no se limita sólo a lo afectivo, sino que se extiende al apoyo económico, a la prestación de servicios gratuitos, etc. La diversificación de la familia, como hemos visto en otros indicadores, no se traduce en su disolución, en su banalización o en su pérdida de relieve.

Pero, en el tema que aquí nos ocupa, el de su funcionamiento como agencia de transmisión de valores, sí que hay una doble implicación que atañe tanto al contenido como a la intensidad en el ejercicio de esa función.

Respecto al contenido, obviamente, lo más relevante es que la transmisión de valores en la familia ya no puede tener ese carácter *compacto* o *cerrado* de un sistema de valores tradicionales, coherentes entre sí, mayoritariamente compartidos. Los valores, como hemos señalado, han entrado en competencia entre sí y en el *mercado de los valores* (quizá, para evitar interpretaciones financieras equivocadas y para darle más fuerza gráfica a lo que queremos decir deberíamos hablar más bien del *supermercado de los valores*) cada uno elige lo que quiere y lo combina como quiere.

Pero, además, la intensidad de la propia transmisión de valores, de la educación en valores en el seno del núcleo familiar, no puede sino resentirse del cambio en los roles familiares que la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del hogar supone. La maternidad a tiempo completo se está convirtiendo en una situación minoritaria. Más trabajo de la mujer fuera de casa no significa, ni mucho menos, desatención a los hijos y a su educación, pero sí implica una dedicación cuantitativa menor a todo ello.

Y, por último, también hay que referirse al debilitamiento de la escuela y del sistema educativo en general como transmisores de valores. El modelo educativo imperante –más aun desde su radical descentralización– por encima de su mediocre rendimiento en la función de transmisión de conocimientos, como acreditan persistentemente las comparaciones internacionales, lleva a que prevalezca –especialmente en el gestionado públicamente– un práctico desistimiento de la función de transmisión de valores o, quizá dicho de modo más preciso, la idea de que debe inculcarse en los educandos el concepto de que los valores –especialmente en lo que se refiere a las orientaciones de moral individual– banalizados en el concepto de *estilos de vida* son todos igualmente aceptables⁵⁰.

⁵⁰ Hace poco escuché a José Luis García Delgado recordar una anécdota de Fabián Estapé, quien en una de sus clases, refiriéndose a la temprana muerte del padre de Joseph A. Schumpeter y la impronta que en su carácter había impreso su madre, se hizo a sí mismo una pregunta retórica: “¿Qué es un hombre?” para responderse a continuación: “Un hombre es una madre y un Bachillerato”. Si la madre y el Bachillerato no proporcionan la base axiológica, no habría que extrañarse de las consecuencias.

En semejante contexto, probablemente el único valor que tiene un arraigo universal y que provee quizá la explicación fundamental acerca de la amplia aceptación que encuentran en nuestra sociedad conductas que son objeto de controversia moral en otras sociedades y lo han sido en la nuestra también, es el del que, en términos positivos, denominaríamos *tolerancia axiológica* y que, en términos más críticos, remite a la condición relativa, opcional o dispositiva de las orientaciones de valor:

CUADRO 6
Pluralismo y respeto a la diversidad

	% “muy” o “bastante” de acuerdo con cada frase
Cada uno puede pensar lo que quiera, siempre que respete las ideas de los demás y no trate de imponer las suyas	98
Para que el país vaya bien, lo importante es que todos respetemos las ideas y la forma de vivir de los demás, por raras o diferentes de las nuestras que puedan parecernos, siempre que estén dentro de la ley	89
Nadie está en posesión de la verdad ni tiene derecho a decir a los demás cómo deben pensar o cómo tienen que vivir	88
Debemos esforzarnos por evitar el uso de palabras o expresiones que, aunque antes se utilizaran de forma corriente, ahora pueden resultar molestas u ofensivas para determinadas personas o grupos	78

Fuente: Metroscopia 2010

Para evitar malentendidos: no se trata, ni mucho menos, de demonizar el pluralismo y la tolerancia, ni de lamentarse de que disfruten de tan extendida vigencia en nuestra sociedad. Tenemos los españoles suficientes motivos en nuestra historia para considerar que la tolerancia es un ingrediente muy necesario de la convivencia democrática cuando no de la convivencia *tout court*⁵¹. La cuestión no es esa. Lo sospechoso de tan universal y compacto *consenso de tolerancia*... es que casa mal con lo que vemos por la calle.

Tiene un inocultable aroma de lo que llaman los sajones *lip service*, tributo obligado a una corrección que va más allá de lo que comúnmente llamamos corrección política. En un contexto de cuya génesis no podemos ocuparnos⁵², pareciera que lo único que puede darse por cierto es que nada lo es. O, por lo menos, uno no debe aparecer abanderando certezas que corren el riesgo de dejar de serlo. De forma tal que lo mejor es que cada uno *guarde su alma en su almarío*, como quiere el dicho tradicional, y haga *como que* acepta la tolerancia universal como único *imperativo categórico* de la nueva moralidad.

Y así estamos. Llenos de dudas, o cuando menos de reservas, acerca de lo que es bueno o malo, y sobre todo, de nues-

⁵¹ De la presencia de los rasgos de insolidaridad e intolerancia en la tradición político-cultural española desde la perspectiva de su continuidad histórica me he ocupado en Lopez Pintor, R. y Wert J.I., "La otra España: Insolidaridad e intolerancia en la tradición político-cultural española", en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 19, 1982, págs. 7-25.

⁵² Me refiero a asuntos tales como el final de las grandes narrativas o *meta-relatos* (Lyotard) que daban un sentido moral inequívoco a todas las facetas de la existencia.

tra capacidad para pronunciarnos con claridad sobre ello en el espacio público cuando no incluso en el privado. La presión de ese relato –a mi entender– enerva expresiones de valor más decididas en los terrenos en que se intuye que una *convicción* en un sentido contrario al relato *tolerante* puede ser mal vista o peor entendida. Se trata de un fenómeno de *espiral de silencio* del tipo del que describe –aplicado a la expresión de la preferencia política– Elisabeth Noëlle-Neumann⁵³. La intensidad con la que ese relato se ha instalado en la opinión española arroja alguna sombra de duda no sólo sobre la sinceridad de tan llamativa homogeneidad en el culto a la tolerancia, sino, sobre todo, de la de tanta tolerancia como hemos podido observar a lo largo de este examen de las opiniones, actitudes y valores de los españoles en el tema que en este epígrafe hemos analizado.

⁵³ Noëlle Neumann, E., *La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social*, Paidós, Barcelona, 1995.

4

LA POLÍTICA

Aun cuando política, en sentido amplio, es casi todo de lo que venimos hablando, vamos a ocuparnos en este epígrafe de aquellas actitudes políticas –en sentido estricto– de los españoles que nos parecen más relevantes en la composición del *mosaico* que estamos describiendo.

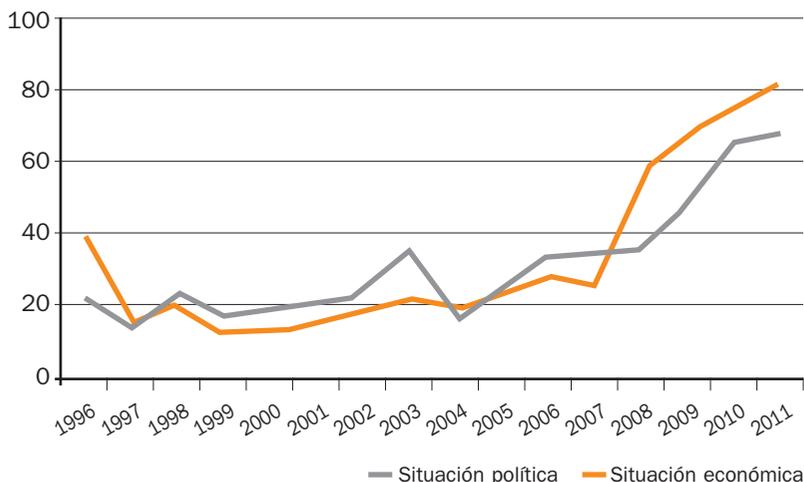
Obviamente, el análisis de estas actitudes políticas en la presente situación **no puede desentenderse de las características singulares de aquellas en lo que se refiere al entorno de crisis económica y social que se ha instalado en España desde 2008**. Si alguien alberga la menor sombra de duda acerca de la interacción entre actitudes políticas y entorno económico, puede bastar la contemplación del Gráfico 6 para disiparla en el acto.

A lo largo de la mayor parte del periodo que se contempla en el gráfico, las percepciones respectivas de la situación económica y la situación política aparecen estrechamente asociadas, con muy pocas y muy puntuales excepciones, todas ellas explicables.

GRÁFICO 6

Evolución de las percepciones de la situación económica y de la situación política (1996-2011)

(% que las definen como *mala* o *muy mala*)



Fuente: Elaboración propia sobre Barómetros del CIS (julio de cada uno de los años señalados)

La primera, al comienzo de la serie, corresponde al cambio de Gobierno de 1996, después de 14 años de gobierno de Felipe González. En ese momento, pese a lo ajustada que resultó la victoria del PP, la opinión pública en general –y no sólo los votantes del PP– concedió un cierto crédito de esperanza política al nuevo equipo, a pesar de que aún se percibía en términos bastante negativos la situación económica. El segundo punto de divergencia de ambas series corresponde a la tensión política que se desencadena con motivo de la guerra de

Iraq: ello genera un (breve) periodo de malestar político que carece de motivación económica alguna.

De la excepcionalidad de la situación presente da cuenta una mirada en zoom al periodo de gobierno de Zapatero que se inicia en 2004. Se parte de un *momento* de generalizada satisfacción tanto en lo político como en lo económico que da paso a una situación en la primera legislatura en la que manteniéndose la satisfacción económica, se registra sin embargo un leve repunte de la insatisfacción política, tras la que se adivina la huella de las querellas específicamente políticas que jalónaron aquel periodo (básicamente las relacionadas con la negociación con ETA y la discusión del Estatut de Cataluña). Pero se trata de una divergencia ligera, pudiendo decirse que el humor político de la sociedad en su conjunto, sin ser claramente positivo, no podría definirse tampoco como claramente negativo.

Todo ello cambia y lo hace de modo drástico cuando se generaliza la percepción social de una grave crisis económica, algo que sucede a una velocidad vertiginosa a partir de las elecciones de ese año. **Entre febrero y diciembre de 2008, la proporción de españoles que consideran *mala o muy mala* la situación económica del país pasa del 37% al 68%⁵⁴, un ritmo de deterioro del que no existe precedente alguno desde que en España se hacen encuestas seriadas.**

⁵⁴ Barómetros mensuales del CIS.

Ese negro humor económico –que, visto en la perspectiva que otorga el tiempo, lleva a preguntarse a qué mente genial se le ocurrió la idea estratégica a la que se aferró el Gobierno de negar la crisis económica hasta que le llegó el agua al cuello– viene a trasladarse al humor político, con una pendiente algo más suave y sin que se alcance la cima de descontento que elicitaba la situación económica. Pero es más que obvia la clara interdependencia que existe entre ambas: el efecto de tracción hacia abajo de la percepción de la situación política que ejerce la percepción de la situación económica es en realidad la explicación principal del deterioro de aquella. De parecida manera a como, en los momentos de prosperidad, fue el *feelgood factor* que de aquella se derivaba el que *tiró* de la percepción positiva de la situación política.

No podemos, pues, ignorar las dimensiones económicas y sociales de las actuales expresiones de malestar político, pero sí sería bueno que fuéramos capaces de *aislar* en lo posible su impacto, cosa que no es en absoluto fácil por el grado en que unas y otras están interpenetradas.

Pero, al mismo tiempo, parafraseando –en serio– el título –irónico– del famoso análisis económico de Carmen Reinhart con Ken Rogoff⁵⁵ sobre la repetición de las crisis económicas y financieras en la historia, *esta vez es diferente*, o, por lo menos, existe la sensación de que puede serlo: **muchos españoles piensan que la actual crisis va a reconfigurar de alguna manera los espacios**

⁵⁵ Reinhart, C. y Rogoff, K., *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*, Princeton University Press, 2009.

sociales y políticos y que sus efectos –incluidos los políticos– van a ser duraderos durante generaciones.

No hay dudas de que **la crisis ha erosionado fuertemente la confianza política**. Las preguntas prácticas serían: ¿ha tocado sólo la corteza o ha llegado a las raíces? Y junto a ella: ¿existe una reflexión social sobre las posibilidades y limitaciones de *agencia* del poder político que modere o racionalice las expectativas?

Todo esto es *work in progress* y, por tanto, las respuestas tienen un cierto carácter especulativo y conjetural. No es que no dispongamos de una cierta secuencia de datos que nos permita trazar algún esbozo sobre la cartografía mental de los españoles en torno a las consecuencias de la crisis⁵⁶. El problema es la condición mudadiza de aquellos, al compás de la

⁵⁶ Entre las investigaciones acerca del impacto de la crisis en la opinión pública, la primera y más robusta de todas ellas es la que lleva a cabo la Fundación BBVA entre mayo y julio de 2009, *Percepción del Modelo Económico y Valoración de la Crisis*, basada en una amplia encuesta con una generosa base muestral (6.002 casos). La Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), a su vez, ha patrocinado una investigación de Analistas Sociopolíticos basada en dos encuestas realizadas en el otoño de 2009 y de 2010, con una robustez muy inferior (alrededor de 800 casos cada oleada) y cuyos resultados están recogidos en Pérez-Díaz, V. y Rodríguez J.C., *Alerta y Desconfiada. La Sociedad Española ante la Crisis*, Funcas, Madrid, 2010. Tiene también valiosa información demoscópica (y buen análisis sobre aquella) el trabajo de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón recogido en Toharia, J.J. (coordinador), *Pulso de España 2010. Un informe sociológico*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, que contempla los resultados de una amplia encuesta (5.000 casos) ya citada. De este último trabajo –y en el tema que nos ocupa– quiero destacar los excelentes análisis de Emilio Lamo de Espinosa (“La Segunda Transición”, páginas 48-68) y Francisco Llera (“La crisis política”, páginas 69-83). Circunstancialmente (y con las limitaciones que hemos descrito ya anteriormente) también hay alguna información relevante sobre el impacto de la crisis en la investigación de la FAD *Valores Sociales y Drogas 2010*, citada.

evolución de esta *crisis de nunca acabar* en la que continuamos enfangados.

En la medida en la que las investigaciones de que disponemos nos permiten, no obstante, establecer algunas conclusiones, las más relevantes serían:

- Al compás de su desarrollo, la crisis se ha ido viendo no sólo como más intensa y más grave de lo que al principio parecía, sino, y esto es lo más destacado, como más prolongada en el tiempo y de mayor impacto de medio y largo plazo.
- Respecto a lo primero, mientras en el estudio de la Fundación BBVA de 2009 había un 52% de los entrevistados que confiaban en la superación de la crisis española en un lapso de dos años o inferior al mismo, las investigaciones posteriores (tanto la de Funcas como la de la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón) sitúan la recuperación en un horizonte temporal más alejado⁵⁷.

⁵⁷ Los indicadores no son directamente comparables, ya que en Funcas se pregunta sobre la recuperación de la tasa de paro anterior a la crisis. En 2009, el 17% responde que se tardarán más de 5 años (media: 3,6 años), mientras que en 2010 los que creen que se tardarán más de 5 años en recuperar esa tasa son más del doble (38%) y la media de años ha subido a 4,8 (*Alerta y Desconfiada*, cit., página 54). A su vez, en el estudio de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón el indicador usado es más *cualitativo* (“¿Cree que el final de la actual crisis económica [mundial/española] está ya cerca o que aún falta tiempo para que empiece a mejorar definitivamente?”) y muestra un contundente 89% que piensa que a la crisis española aun le queda *recorrido*, 10 puntos más que quienes creen lo mismo respecto a la crisis mundial (*Pulso de España*, cit., página 130).

- En cuanto a lo segundo, la maduración de la crisis parece haber empezado a producir expectativas a la baja y lo que pudiéramos llamar un cierto *fatalismo histórico*. En la investigación *Valores Sociales y Drogas 2010*⁵⁸ vemos, en efecto, cómo hay un 59% de los entrevistados que considera que las oportunidades de que van a disponer sus hijos/as van a ser menores que las que él o ella han disfrutado, mientras que apenas un 15% sostiene el pronóstico inverso (el de que sus hijos/as tendrán mejores oportunidades que ellos mismos).
- En parecido sentido, la misma encuesta muestra que un 53% cree que la protección social en el futuro será peor que la que actualmente se disfruta, mientras que apenas un 19% piensa que será mejor.
- Seis de cada diez entrevistados opinan que la actual crisis influirá negativamente en el futuro económico y social de los que ahora son menores, en tanto que sólo un 20% piensa que la crisis mejorará su futuro.
- Muy parecidas –si no algo más negativas– son las impresiones que desprenden los resultados del último estudio del CIS⁵⁹ que aborda esta cuestión de las expectativas. Según

⁵⁸ Es preciso recordar una vez más que el universo de este estudio es un tanto especial: 15 a 64 años. En esta cuestión, que tiene una clara dimensión intergeneracional, ello quiere decir que están pesando más de lo que lo harían en una encuesta convencional las opiniones de los más jóvenes, mientras que pesan menos de lo que lo hacen en el universo convencional las opiniones de las personas de más edad.

⁵⁹ Barómetro de diciembre de 2010, E. 2.856.

el mismo, una proporción muy mayoritaria de los españoles piensa que “la herencia que van a recibir los jóvenes del siglo XXI” será negativa respecto al empleo (77%), las condiciones de trabajo (66%), o la capacidad de compra (61%). También son considerables (y muy superiores a sus contrarias) las expectativas negativas en torno a la calidad de vida (43%) y la protección social (45%). Aun peor: los propios jóvenes entrevistados suscriben en proporciones similares –cuando no superiores, como sucede con el empleo– esas sombrías perspectivas.

Se hace difícil exagerar la importancia de estas percepciones, que vienen a sugerir que la idea de que el *ascensor social* ha dejado de funcionar en una sola dirección (hacia los pisos de arriba) está muy extendida entre los españoles.

Esto es algo inédito en la experiencia vital (y también en los mapas mentales) de la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos (tal vez habría que exceptuar a aquellos que conservan recuerdos *de primera mano* de la Guerra Civil o, al límite, de la primera postguerra, esto es, a quienes rondan o superan los 80 años).

La idea de una *generación perdida* que expuso hace unos meses el Fondo Monetario Internacional como una hipótesis aplicable no sólo a España, sino a todos aquellos países en los que se advertía riesgo de que se originara un desempleo estructural que impidiera la normal incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, ha prendido como algo más que una amenaza improbable. Así, en la encuesta de la Fundación

José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón citada, casi dos tercios de los entrevistados consideran que el actual nivel de paro juvenil es una situación muy grave que nunca se había dado antes con tanta fuerza, mientras sólo el 35% opina que esta situación ya se había dado en épocas anteriores⁶⁰.

Todo lo anterior lleva de forma natural a preguntarse hasta qué punto percepciones de este tipo pueden o no desencadenar una revisión de los fundamentos de la adhesión democrática, de la conformidad con el funcionamiento del sistema político.

Los datos en este punto mezclan elementos tranquilizadores con otros que no lo son tanto.

Por un lado, los cimientos de la democracia, en general, y de la adhesión al sistema no parecen resentirse. Se mantiene en lo sustancial la idea de que “la actual democracia, con todos sus defectos e insuficiencias constituye el periodo en el que mejor ha estado nuestro país en su historia”⁶¹, opinión que suscribe (totalmente o bastante de acuerdo) el 72% de los españoles. Pero no deja de ser significativo cómo esa adhesión se debilita en los estratos más jóvenes: entre los menores de 35 años, el porcentaje de desacuerdo con la misma alcanza un inquietante 26%.

⁶⁰ *Pulso de España, cit.*, págs. 176-177. Lo cierto es que este nivel de desempleo juvenil no es rigurosamente inédito: en la anterior crisis de empleo, el paro juvenil superó el 46% en dos trimestres de 1994.

⁶¹ *Metroscopia 2010, en Pulso de España... cit.*, pág. 125.

Otro tanto sucede con la valoración retrospectiva del proceso de Transición a la democracia. Siendo abrumador el acuerdo con la proposición de que “la forma en que se llevó a cabo la transición del franquismo a la democracia constituye un motivo de orgullo para los españoles”⁶² (80% responden afirmativamente) también entre los menores de 35 años registramos una conformidad significativamente más baja (72%). Muy similares son los resultados sobre este mismo indicador en la última encuesta del CIS que trata esta cuestión⁶³, realizada en las mismas fechas aproximadamente, y en la que disminuye algo (76%) el *orgullo retrospectivo* sobre la Transición y también es más bajo ese sentimiento entre los más jóvenes (62%).

Pero, por otro lado, esta adhesión genérica a la democracia y sus frutos históricos coexiste con un claro debilitamiento no sólo, como veremos, de la apreciación del *output* de los productos de la acción del sistema político, sino también de lo que es la base formal de su funcionamiento, la Constitución y su desempeño práctico en la actualidad.

El estudio del CIS arriba citado⁶⁴ nos muestra que, en términos generales, la satisfacción con la Constitución domina sólo muy ligeramente sobre la insatisfacción (46% *muy o bastante satisfechos*, frente a 39% *muy o bastante insatisfechos*). Estos porcentajes suponen un retroceso apreciable respecto a la situación que en la misma serie se registraba siete años

⁶² Metroscopia 2010, en *Pulso de España...*, cit., pág. 214.

⁶³ Se trata del barómetro de noviembre de 2010, E. 2.778.

⁶⁴ Barómetro de noviembre de 2010, E. 2.778.

antes, al cumplirse el 25º aniversario de su aprobación⁶⁵, cuando la satisfacción (54%) superaba en 20 puntos a la insatisfacción (34%).

Un indicador algo más sutil y explicativo⁶⁶ nos revela que un 39% de los españoles cree que la actual es “una buena Constitución”, mientras que una proporción muy superior, el 54% entiende que se trata de una “Constitución con cosas buenas y cosas malas”. Es cierto que sólo un 5% considera que es “una mala Constitución”, con lo que puede afirmarse que en absoluto está vigente una actitud abiertamente *anticonstitucional* en la opinión. Pero también en este asunto observamos que los menores de 35 años son quienes en menor medida (34%) muestran una aprobación sin reservas del texto constitucional.

En este espíritu no puede extrañar que exista un *humus* social claramente favorable *in genere* a la reforma de la Constitución: según el más reciente estudio del CIS al respecto⁶⁷, prácticamente la mitad de los españoles se manifiestan partidarios de “reformularla en algunos puntos”, frente a un 25% que opta por “dejarla como está”. Resulta a este respecto particularmente significativo que la opinión favorable a una reforma (implícitamente *limitada*) de la Constitución se reparte sin fracturas apreciables por los distintos grupos sociodemográficos y afinidades políticas: los votantes del PP y los del PSOE se manifiestan a favor de la reforma en proporción idéntica.

⁶⁵ Barómetro de septiembre de 2003, E. 2.535.

⁶⁶ Metroscopia 2010, en *Pulso de España...*, cit., pág. 121.

⁶⁷ Barómetro de noviembre de 2010, E. 2.778.

Una aproximación complementaria a este asunto la proporciona, con una formulación del indicador que da por supuesta la necesidad de alguna reforma, la encuesta de la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón⁶⁸. Según la misma, el 37% de los españoles cree que la Constitución “necesita reformas y retoques profundos pues ha quedado desfasada en relación con la realidad española actual”, en tanto que un 58% suscribe la idea de que “sólo necesita algunos retoques parciales y, en conjunto, sigue siendo válida para la sociedad española actual”. También en esta dimensión los más jóvenes se muestran partidarios en medida mayor (sin llegar a ser mayoritaria) de una reforma más radical.

Otra cosa es que exista una opinión clara sobre lo que debe ser reformado. En una pregunta *abierta* (de respuesta espontánea) incluida en el barómetro del CIS que venimos comentando, los aspectos que se mencionan con mayor frecuencia como objeto de la reforma, por parte de quienes son partidarios de la misma, vienen a ser la organización de la justicia (10%), el sistema autonómico (7%), la organización de las Cámaras parlamentarias (5%) y, aun más residualmente, la forma de Estado (3%).

Pero, sin duda, **el dato más preocupante es el que se refiere a la satisfacción con la forma en que funciona la democracia en España**. Existe un amplio consenso sobre la fuerza explicativa de este indicador, muy utilizado en la investigación comparativa, como *proxy* de la *salud democrática* de una sociedad en un momento dado.

⁶⁸ *Pulso de España...*, cit., pág. 122.

Pues bien, los datos españoles más recientes⁶⁹ son –por decir lo menos– altamente inquietantes. En efecto, se registra un 50,7% de *muy* (5%) o *bastante* (45,7%) satisfechos con la forma en que funciona la democracia en España, frente a un 47,1% de *muy* (9,5%) o *bastante* (37,6%) insatisfechos. No se trata sólo de que las proporciones de satisfechos o insatisfechos estén tan equilibradas, sino, lo que es aún peor, que la insatisfacción extrema con esa forma de funcionar es el doble prácticamente de la satisfacción extrema. El que uno de cada diez ciudadanos se muestre tan frustrado con el funcionamiento de la democracia es un fenómeno nunca visto antes desde que se usa este indicador.

Un indicador prácticamente idéntico en una encuesta del CIS realizada casi exactamente 10 años antes⁷⁰ arrojaba una proporción del 74,5% de los españoles *muy* (10,6%) o *bastante* (63,9) satisfechos, frente a apenas un 22,2% que se mostraban *poco* (17,9%) o *nada* (4,3%) satisfechos.

Nos hallamos, pues, ante un cuadro de deterioro severo de las bases de sustentación de la *conformidad democrática* que debería ser objeto de preocupación inmediata entre las élites políticas de todos los colores. Máxime cuando esas mismas élites están, por así decirlo, *en el ojo del huracán* de la deslegitimación social.

⁶⁹ Barómetro de noviembre de 2010, E. 2.778.

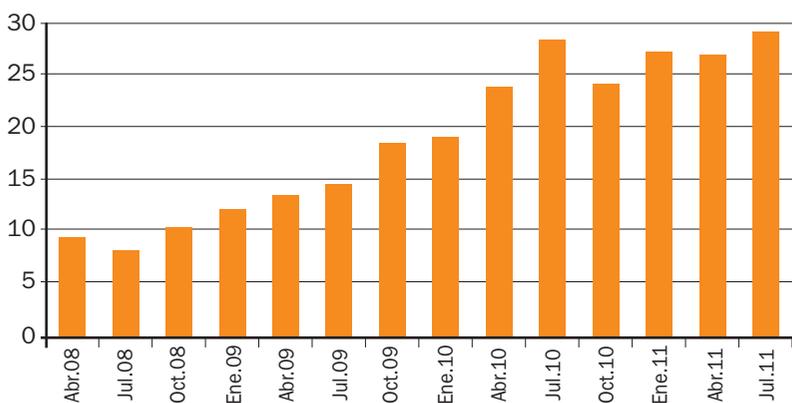
⁷⁰ Estudio *25 Años Después*, diciembre 2000, E. 2.401.

Efectivamente, una de las dimensiones más inequívocas de ese deterioro es el desapego respecto de los operadores de la política, los políticos o la llamada *clase política*.

Se ha convertido en un lugar común la referencia a la consideración del personal político como uno de los principales *problemas* por parte de los ciudadanos. El siguiente gráfico nos muestra cómo ha evolucionado en el curso de los últimos tres años la consideración de los políticos, la clase política, los partidos y el Gobierno como uno de los tres principales problemas a los que se enfrenta España:

GRÁFICO 7

La clase política, los partidos y el Gobierno como problema (2008-2011)
(% que los menciona como uno de los tres principales)⁷¹



Fuente: Elaboración propia sobre Barómetros del CIS de las fechas señaladas

⁷¹ Suma de los ítems “La clase política, los partidos políticos, críticas a la política en general” y “El Gobierno, los políticos y los partidos”. La Nota de Investigación 201101 del CIS sobre este problema (publicada en la web el 16 de junio de 2011) se centra en el primero de los ítems y no aclara nada sobre el segundo, pero, a los efectos que aquí tratamos, agruparlos tiene todo el sentido.

La dinámica de la que da cuenta el gráfico no puede sino interpretarse como la consecuencia de una visión muy extendida socialmente que pone en los políticos todo el foco de la responsabilidad en la mala gestión de la situación social y económica.

Este estado de opinión –al margen de lo ajustadas que sean o dejen de ser las bases cognitivas en que se sustenta– refleja también la retroalimentación que tiene lugar entre una visión hipertrófica de las limitaciones y *vicios* de la *clase política* que reflejan los medios de comunicación y una creciente frustración ciudadana ante lo que esencialmente se percibe como incapacidad de aquella de proveer respuestas eficaces a los problemas que tan agudamente se manifiestan en el campo económico y social.

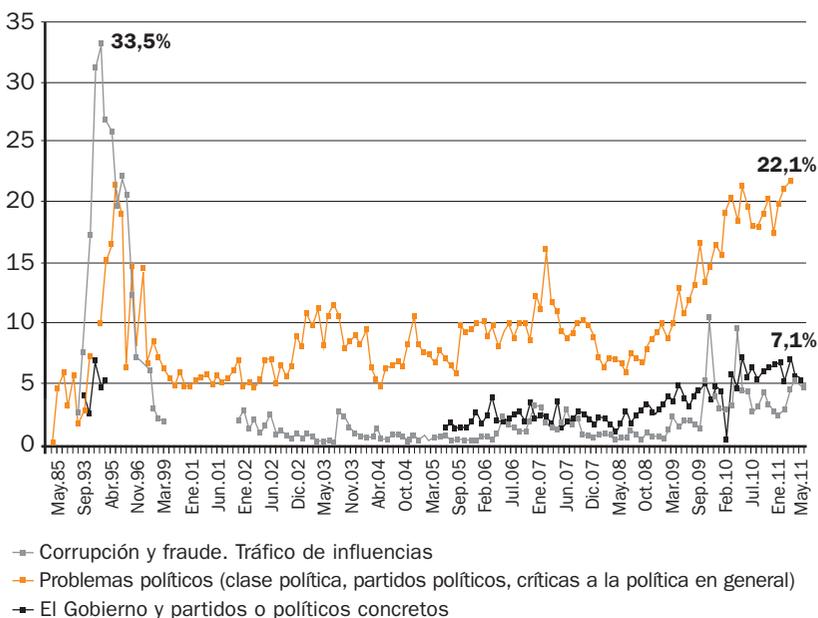
Pero sean cuales sean las condiciones *genéticas* de estas percepciones, sobre las mismas opera el llamado *teorema de Thomas*, una de las reglas de oro a tener en cuenta en la interpretación de los fenómenos sociales: “Cuando los hombres definen unas situaciones como reales, sus consecuencias son reales”⁷². Una vez que se desencadena el mecanismo de considerar a los políticos como un *agente del problema* en lugar de como un *agente de la solución* tenemos a la vista un serio problema de representación y legitimidad, de implicaciones múltiples. Corregir esta percepción va a llevar tiempo.

⁷² La formulación de este *teorema* se debe a William I. Thomas en su obra de 1928 (en colaboración con su esposa Dorothy) *The Child in America: Behavior Problems and Programs*, Nueva York, Alfred A. Knopf.

Tampoco hay que pensar que es una situación completamente inédita. El gráfico que sigue, que forma parte de la *Nota de Investigación 201101* del CIS elaborada para explicar justamente la emergencia de esta percepción problemática de los políticos en la opinión pública española, nos muestra que (a) no es la primera vez en la que un factor *político* es percibido como muy relevante en la agenda de los problemas sociales y (b) este surgimiento de alguna dimensión de la política como *problema social* tiene lugar en coincidencia o en asociación con crisis económicas.

GRÁFICO 8

Evolución de los problemas relacionados con la política desde 1985 (%)



Fuente: CIS (Nota de Investigación 201101) http://www.cis.es/cis/opencms/Archivos/NotasdelInvestigacion/NI001_ProblemaClasePolitica_TablasGraficos.pdf

Esta percepción de cuestiones políticas como graves problemas sociales adquirió en la anterior crisis económica (1992-1996) una focalización muy precisa en el tema de la corrupción, que llegó a ser citada –en 1995– como uno de los tres principales problemas de la sociedad española por más de un 33% de los entrevistados. En el momento álgido de esa crisis, las referencias más genéricas a los políticos, a los partidos o a la clase política como problemas sociales sumaban entre un 10% y 15% adicional a las menciones a la corrupción, con lo que, en conjunto, los problemas que etiquetaríamos como políticos totalizaban un número de menciones superior incluso al que registramos en esta crisis, en la que la suma de cuestiones de naturaleza política no rebasa –hasta ahora– el 40%.

Esto debe llevar a una cierta relativización en la interpretación del dato del creciente descrédito aparente de la clase política, pero no convierte en banal ni en irrelevante el dato. Tal vez lo que haya que preguntarse antes que otra cosa es por qué ahora el desalineamiento político, las actitudes de rechazo a los políticos y a sus formaciones, tienen ese carácter tan genérico⁷³. Por qué, en definitiva, pareciera que el severo juicio acerca del desempeño de los políticos evita hacer distinciones entre las responsabilidades de unos y otros, no establece una gradación de la *accountability* en función de sus diferencias po-

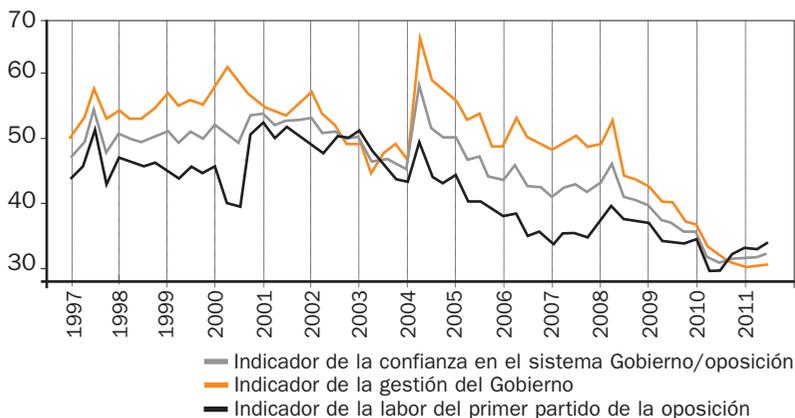
⁷³ El desglose que facilita el CIS en la *Nota de Investigación 201101*, cit. de las referencias *verbatim* recogidas en esta pregunta ratifica efectivamente la condición genérica de las mismas. La más frecuente (51% sobre el total de quienes están incluidos en la categoría) es la de quienes mencionan genéricamente a los políticos/as y la clase política como problema. Otro 25% se refiere a “la política” (sin adjetivos ni aclaraciones) como problema social.

sicionales, en particular desde la perspectiva de la *agencia* distinta de que se dispone en el poder y en la oposición.

El gráfico que sigue nos ofrece la evolución del indicador de confianza en el sistema Gobierno/oposición desde que en 1997 se comenzara a recoger sistemáticamente por el CIS. En él podemos ver cómo evoluciona a lo largo de todo este periodo –que cubre la casi totalidad de los Gobiernos de Aznar y Zapatero– la confianza en el Gobierno, la confianza en el principal partido de la oposición y el índice sintético que se construye con la media de ambos⁷⁴:

GRÁFICO 9

Indicadores de confianza en el sistema Gobierno/oposición (1997-2011)



Fuente: Indicadores del Barómetro CIS (julio 2011)

⁷⁴ Este indicador se construye con la pregunta sobre valoración respectiva de la labor del Gobierno y la del principal partido de la Oposición en una escala semántica (*muy buena, buena, regular, mala y muy mala*) que se reconvierte a numérica. El valor 50 correspondería a una valoración media de *regular*.

Extraña en principio que la correspondencia entre mejor valoración del Gobierno y peor valoración de la oposición –es decir, el funcionamiento de las respectivas valoraciones en una lógica *suma cero*– sea más la excepción que la regla. De hecho, lo que podemos más bien observar es que apenas hay dos momentos en que esa dinámica se vea con claridad. Uno, tras las elecciones de 2000 en las que la insospechada magnitud de la victoria del PP no sólo apareja una abrupta mejora de la valoración del Gobierno, sino también una caída simétrica de la valoración de la oposición del PSOE. En sentido inverso, la crisis política que en el primer trimestre de 2003 trae consigo la guerra de Iraq supone que el descenso de la valoración del Gobierno del PP y el ascenso de la de la oposición del PSOE sigan un ritmo acompasado. Pero es significativo que tanto tras las elecciones de 2004 (pese a la extrema tensión y profunda polarización bajo la que aquellas se desarrollaron) como después de las –más sosegadas– elecciones de 2008, no sólo mejora la valoración del partido que las gana sino también la del partido que las pierde. Aún las elecciones siguen funcionando como un *morale booster* democrático por encima de su resultado.

Ahora bien, lo más llamativo que este gráfico nos indica es lo que sucede desde que la crisis económica –disueltos apenas los efectos del *chute* electoral sobre la moral ciudadana– a partir de mediados de 2008 asoma su feo rostro con mayor claridad. Porque una mirada en *zoom* sobre estos últimos tres años nos permite ver que las valoraciones del Gobierno y la del principal partido de la oposición han venido cayendo en picado y prácticamente en paralelo.

Tan en paralelo, que no es sino hasta bien entrado 2010 cuando se produce, en un cuadrante muy bajo, la *tijera* entre Gobierno y oposición, es decir, cuando el desempeño de esta última comienza a ser valorado en términos menos drásticamente negativos que los que se adjudican al Gobierno.

No vamos aquí a entrar por menudo en la explicación de cómo, durante ese periodo, pese a esa valoración más baja que la del Gobierno, el PP ha estado por delante del PSOE no sólo en las estimaciones de las encuestas, sino en los resultados de las elecciones de distinto alcance que se han celebrado⁷⁵. A nuestros efectos, lo que importa retener es que –a diferencia de lo que se registra en procesos de cambio anteriores –desde luego, *muy* a diferencia de lo que sucede en 1982; no tanto respecto a lo que pasa en 1996– no parecen existir vasos comunicantes entre el reflujo de la adhesión y el compromiso depositados en el partido gobernante y una marea de adhesión emocional, de esperanza, en relación con el partido que –presumiblemente– le iba a reemplazar.

Pero no es este un fenómeno que se limite al principal partido de la oposición. Lo que podemos advertir es la existen-

⁷⁵ Sucede así con claridad en las elecciones gallegas de febrero de 2009 y en las elecciones europeas de junio de ese mismo año. Las elecciones vascas, que se celebraron coincidiendo con las gallegas, son la excepción. En las elecciones catalanas de 2010 el PSC retrocede enormemente, y el PP tiene un notable incremento. Finalmente, en las elecciones celebradas el 22 de mayo (autonómicas y locales) y en las Elecciones Generales del 20 de noviembre la estruendosa ventaja del PP sobre el PSOE va mucho más allá de lo que sugeriría el modesto alcance del *adelantamiento* en la valoración que se refleja en el gráfico.

cia de un desalineamiento de la sociedad no sólo respecto de los dirigentes políticos, de sus organizaciones y de sus instituciones –aunque respecto de todos ellos alcance mayor intensidad– sino, en general, respecto de la mayor parte de agentes institucionales y/o de grupos sociales a los que se atribuye alguna responsabilidad en la gestión de lo colectivo (al margen de su condición pública o privada). Muy pocos escapan a esta dinámica, como podemos ver en los datos del Cuadro 7.

CUADRO 7

Nivel de confianza en instituciones y grupos sociales

Institución / Grupo	Media (escala de 0 a 10)
Los científicos	7,4 (7,5)
Los médicos	7,4
La Universidad	6,8 (7,2)
La Sanidad Pública	6,7
La Policía	6,7 (6,8)
La Seguridad Social	6,6 (6,7)
Pequeñas y medianas empresas	6,6
Los intelectuales	6,5
La Guardia Civil	6,5 (6,5)
Los militares (FFAA)	6,5 (6,3)
Las ONG	6,2 (6,1)
Las fundaciones	6,0 (6,0)
La radio	5,8 (6,5)
Instituciones de la Iglesia (Cáritas)	5,8
El Rey	5,6 (6,6)
El Tribunal Constitucional	5,3 (5,7)
Los abogados	5,2
Las grandes empresas españolas	5,2
Los notarios	5,2
El Defensor del Pueblo	4,8 (6,1)

Continúa en la página siguiente

LOS ESPAÑOLES ANTE EL CAMBIO

Viene de la página anterior

Institución /Grupo	Media (escala de 0 a 10)
Los jueces	4,8 (5,3)
Los funcionarios	4,8 (5,3)
La prensa (los periódicos)	4,7 (5,4)
La obra social de la Iglesia	4,7
Los fiscales	4,7 (5,0)
Los tribunales de justicia	4,6 (5,3)
Los empresarios	4,6 (5,0)
Las multinacionales	4,5 (3,4)
Los Ayuntamientos	4,3 (4,9)
El Parlamento (Las Cortes)	4,2 (5,5)
La televisión	4,1 (4,4)
La Iglesia Católica	4,0
Los Gobiernos de las CC.AA.	4,0
Las cajas de ahorros	3,7
La Administración de Justicia	3,5
Los Sindicatos	3,3 (3,6)
Los Obispos	3,1
El actual Gobierno del Estado	3,0 (4,4)
Los bancos	2,9 (3,8)
Los partidos políticos	2,8 (3,5)
Los políticos	2,6 (3,8)

Fuente: Barómetro Continuo de Confianza Ciudadana, julio 2011⁷⁶

Este cuadro proporciona una información excepcionalmente rica porque –a diferencia de la mayor parte de las informaciones más o menos seriadas de las encuestas sobre confianza

⁷⁶ Realizado por Metroscopia para *El País* sobre una muestra cuyo tamaño no se especifica, con un indicador que se incluye en los distintos sondeos que esa empresa lleva a cabo. Ver *El País* del 7 de agosto de 2011, sección *Domingo*, página 8. El dato que figura entre paréntesis corresponde a una encuesta de la misma empresa realizada sobre una muestra de 5.000 casos entre septiembre y noviembre de 2010. Ver *Pulso de España, cit.*, págs. 244-245.

institucional⁷⁷– incluye una enorme variedad de instituciones y grupos y no la habitual lista corta de instituciones públicas o semipúblicas que se suelen manejar en este indicador.

Aunque no disponemos de un dato dinámico dentro de la serie acerca de todas las instituciones o actores sociales, los que tenemos son suficientes para permitirnos afirmar que **esta crisis parece haberse llevado por delante una parte no menor del *goodwill* social y político acumulado desde la Transición, supone una descapitalización sensible de las *reservas de aprecio* que los protagonistas del espacio público habían logrado acumular en este periodo.** Pero, dentro de esa tendencia general, otra específica no parece menos importante: **la descapitalización es tanto más intensa cuanto mayor la proximidad del actor de que se trate al ámbito político estricto y cuanto más vinculado aparezca a la esfera de la gestión general.**

En el 25% superior, las 10 instituciones mejor valoradas, **no existe ninguna institución o grupo que sea percibido socialmente como *político* en sentido estricto.** Aparecen dentro de él los operadores institucionales del orden y la seguridad (Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía), los grupos sociales vinculados a la prestación de servicios sociales básicos (la Sanidad Pública, los médicos, la Seguridad Social) y diversos grupos sociales o ins-

⁷⁷ Además, sucede que el CIS –cuyas muestras son siempre estadísticamente robustas– ha sido muy poco sistemático en el recurso a este indicador y no ha incluido siempre las mismas instituciones. Las dos más recientes (noviembre 2010 y noviembre 2008) sólo tienen en común 6 instituciones. Al igual que sucede con las encuestas de Metroscopia en aquellas instituciones o grupos de los que hay datos secuenciales, en las encuestas del CIS hay una caída muy abrupta de la valoración del Gobierno central (pasa de una media de 4.79 a una 3.52) y una caída bastante más suave del resto de instituciones.

tituciones como los científicos, la Universidad, las PYMES, o los intelectuales, que tienen en común únicamente la falta de perfiles *contenciosos*, que viven *au dessus de la mêlée* actual o que no pueden ser responsabilizados –por acción u omisión– de la presente crisis. Se trata, además, no sólo de las instituciones mejor valoradas sino también de aquellas que en menor medida resienten en su valoración el deterioro generalizado que afecta a la mayoría de las demás; apenas pierden aprecio social o incluso, alguna de ellas, como los militares, lo gana ligeramente.

Entre la 11^a y la 20^a posición –instituciones o grupos que *aprueban* con menor holgura el veredicto social– tenemos ya alguna institución política: el Rey, el Tribunal Constitucional y, en el límite, el Defensor del Pueblo. En los casos de este último y del Rey, experimentando un deterioro muy fuerte en su aprecio respecto al dato anterior⁷⁸. Se trata de las referencias institucionales incluidas en la encuesta más alejadas de la esfera de la contienda política partidista y, ello no obstante, no consiguen escapar del deterioro que afecta a los actores del sistema político. El resto de grupos y actores sociales incluidos en este tramo es muy variopinto: la radio (también sometida a un claro descenso), un conjunto de grupos e instituciones del *Tercer Sector* (ONG, fundaciones, Cáritas), dos grupos de profesionales jurídicos (abogados y notarios) y las grandes empresas españolas.

⁷⁸ El dato referido al Rey en esta serie es muy llamativo, porque parece registrar una merma de valoración muy abrupta en un periodo muy corto, sin que hayan mediado en el mismo *externalidades* que lo puedan explicar. Aunque formulado de modo más institucional (*La Monarquía*), el indicador comparado del CIS de Noviembre de 2008 a Noviembre de 2010 no sigue para nada ese patrón, puesto que su valoración pasa de 5.36 en 2008 a 5.14 en 2010 y su descenso es el más suave de las 6 instituciones que se incluyen en las dos encuestas.

En una zona de valoración ya claramente negativa, en el tercer cuarto del *ranking*, hay tres *clusters*: uno, el de los operadores jurisdiccionales públicos (jueces, fiscales, y Tribunales de Justicia), todos ellos con un notable grado de deterioro institucional entre una y otra encuesta. Otro, los medios, la prensa y la televisión (ambos también muy *maltratados* por el último periodo, relativamente más la prensa escrita). Y el tercero, las instituciones políticas, a saber, Ayuntamientos (menos erosionados) y Parlamento (fuertemente penalizado). Junto a ellos, los empresarios *in genere* (menos deteriorados en su imagen de lo que se podría imaginar), los funcionarios (respecto de los que sucede lo contrario, ya que su valoración está muy erosionada), y las multinacionales, que, curiosamente, resultan ser el único grupo cuya imagen mejora muy intensamente respecto a la encuesta anterior. La *Obra Social de la Iglesia*, etiqueta introducida sólo en la encuesta más reciente y sobre cuya correspondencia mental en la gente tenemos algunas dudas, aparece también en este grupo, a bastante distancia de su más cualificada representación (Cáritas) que, tal vez por ser una referencia más concreta y conocida, está bastante mejor valorada.

Y, finalmente, **los grupos e instituciones que ocupan las 10 últimas posiciones de la tabla están abrumadoramente dominados por los actores de carácter político o parapolítico**. Se incluyen los Gobiernos autonómicos, la Administración de Justicia⁷⁹,

⁷⁹ Nótese que la valoración de la “Administración de Justicia” es nítidamente inferior a la que concitan los “los tribunales de justicia”. Aunque pueda existir cierta nebulosa conceptual en torno al primer concepto, parece claro que la gente entiende por ello la organización y gobierno de la justicia, es decir, la dimensión más *política* de aquella y eso explica una valoración mucho más crítica.

los sindicatos, el actual Gobierno del Estado, los partidos políticos y, *last but not least*, los propios políticos. De todos ellos, el mayor deterioro corresponde al Gobierno, pero también las dos categorías más genéricas –la colectiva y la individual– referidas al personal político, que ya partían de niveles de aprobación ínfimos, sufren con especial virulencia el desgaste de los últimos meses.

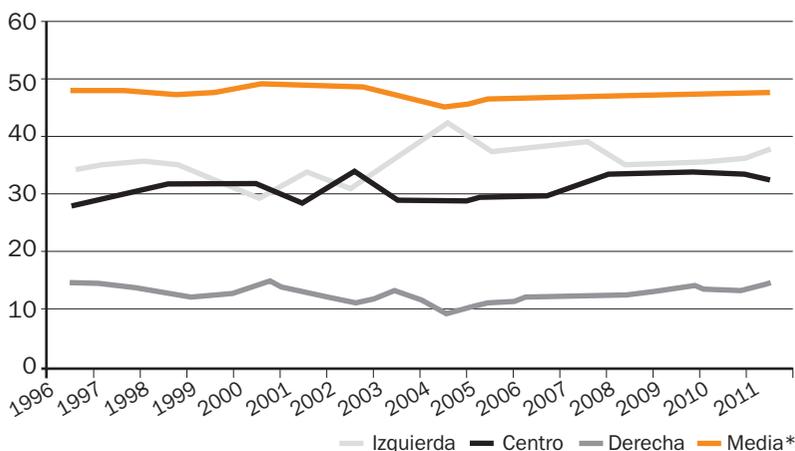
Junto a estas instituciones políticas, las dos referencias *institucionales* de la religión mayoritaria, a saber, la propia institución, (la Iglesia Católica), y su jerarquía (los Obispos) se encuentran también en este grupo. No existe respecto a ninguna de ellas dato dinámico, con lo que resulta difícil establecer hasta qué punto esta pobre valoración ciudadana se resiente o no de los efectos de la crisis. Lo que sí está claro, en el plano estático, es la nítida cesura que se establece en la opinión entre el papel asistencial y caritativo de la Iglesia (cuya expresión más definida es Cáritas) y la institución y su cúpula jerárquica.

Completan este último grupo de instituciones y entidades peor valoradas las dos tipologías de entidades financieras: cajas y bancos. Sólo hay dato dinámico acerca de los bancos y está entre los de evolución más negativa. Con todo, está claro que predomina una imagen estereotipada y muy poco atenta al papel de cada una de estas categorías en la actual crisis financiera, puesto que han sido las cajas de ahorros mucho más que los bancos quienes han protagonizado no sólo los episodios de mayor imprudencia financiera, sino también la práctica totalidad de las necesidades de inyección de recursos públicos.

Una pregunta que tiene sentido formularse a la vista de todo lo anterior es hasta qué punto sigue funcionando el eje izquierda-derecha como elemento de orientación, explicación o predicción del comportamiento electoral. La reciente historia electoral de nuestro país, desde 1996 a nuestros días, nos ofrece un interesante laboratorio, en tanto en cuanto a lo largo de ese periodo hay suficiente variabilidad en el comportamiento electoral como para poder establecer la sensibilidad del posicionamiento ideológico a tales variaciones (bien originándolas, bien respondiendo a ellas).

El Gráfico 10 da una respuesta bastante clara a ese interrogante. Por la información que en el mismo se resume puede

GRÁFICO 10

Autoposicionamiento ideológico (1996-2011)

Fuente: Elaboración propia sobre Barómetros del CIS (julio de cada uno de los años señalados). *Izquierda* es la suma de las posiciones 1 a 4 de la escala, *Centro* posiciones 5 y 6 y *Derecha* posiciones 7 a 10. *: Para una mejor visibilidad del gráfico, la media del posicionamiento en la escala 1-10 se ha multiplicado por 10.

afirmarse que el eje de auto-identificación ideológica parece haber perdido relevancia como factor explicativo y predictivo del comportamiento electoral.

Como puede apreciarse, la media del **autoposicionamiento ideológico de los españoles no sólo es prácticamente idéntica ahora a la que había en 1996, sino, lo que es más importante, su recorrido a lo largo de estos últimos 15 años es muy reducido** y, desde luego, muy inferior al recorrido experimentado por el propio comportamiento electoral en el periodo que consideramos.

Entre la media más a la derecha (2000) y la media más a la izquierda (2004) hay apenas 47 centésimas de variación, un 9% en términos relativos. El *swing* que se registra entre los dos grandes partidos en las elecciones celebradas en esos mismos años es superior a los 15 puntos porcentuales; el PSOE aumenta entre una y otra elección casi un 25% su espacio electoral, mientras que el PP ve contraer el suyo por encima del 15%.

Evidentemente, esto no implica que no exista una correlación clara entre la auto-definición ideológica y el comportamiento electoral. Por supuesto que existe. Por ejemplo, el auto-posicionamiento medio de los votantes del PSOE de 2008 en la escala 1 a 10 era de 3,61, mientras el de los votantes del PP era de 6,58⁸⁰. **Lo que sucede es que –en función de la coyuntura– la gente cambia de voto sin por ello cambiar de ideología.**

⁸⁰ CIS, *Post-Electoral Elecciones Generales y al Parlamento de Andalucía 2008*, E. 2.757, realizado sobre una muestra de 6.083 casos entre marzo y mayo de 2008.

Por supuesto, ese proceso se produce sobre todo en las posiciones más hacia el centro de la escala, puesto que en las más extremas es más rígida la correspondencia entre identificación ideológica y voto. Pero en las posiciones que van del centro-izquierda al centro-derecha y, muy especialmente, en las posiciones que llamaríamos de *centro puro* (puntos 5 y 6 de la escala)⁸¹, en las que se concentra más de un tercio de los que se identifican ideológicamente, hay un amplio espacio de *conversión* electoral. Así, mientras en las elecciones de 2008 el 29% de esos electores de *centro puro* habían votado al PSOE⁸², ahora la proporción de esos electores dispuestos a votarle se ha reducido al 13%⁸³.

La discusión –aún viva en la politología española– acerca del supuesto *déficit estructural* desde el que el centro-derecha se enfrenta electoralmente al centro-izquierda, dado que hay una proporción abrumadoramente superior de gente que se posiciona a la *izquierda del centro* (51% de los que se posicionan

⁸¹ Hay una prolongada discusión académica en diversos países acerca de la condición especial de estas posiciones como supuestos *no lugares* políticos, escondrijos del desinterés y la alienación política más que de la moderación y la templanza. Un reciente análisis de Mariano Torcal muestra que no es el caso en España, donde las personas que se colocan en el centro de la escala tienen niveles educativos y de interés e implicación políticos no diferentes de la media. Sobre la relevancia de la disputa por ese electorado, Belén Barreiro ha analizado los procesos electorales desde 1993 en base a las respectivas encuestas postelectorales del CIS para concluir que siempre el partido mayoritario entre quienes se sitúan en el punto 5 de la escala es el ganador de las Elecciones. Cfr. Torcal, M. “El significado y el contenido del centro político en España”, Fundación Alternativas, documento de trabajo n° 168-2011, www.falternativas.org y Barreiro, B., “El centro decide las elecciones en España”, *El País*, 6 de diciembre de 2007.

⁸² *Post-Electoral Elecciones Generales y al Parlamento de Andalucía 2008*, cit.

⁸³ CIS, Barómetro de julio de 2011, E. 2.909.

lo hacen en las posiciones 1 a 4 de la escala) que a la derecha del centro (15% de los que se posicionan se colocan entre las posiciones 7 a 10)⁸⁴ tiene hoy, a mi juicio, menos interés práctico del que se suele adjudicar. En realidad, lo más importante desde esta perspectiva para el PP es ser percibido por el electorado de *centro puro* en una posición que no esté tan diametralmente alejada de su propia colocación en el espacio político como para convertirle en “no votable” por exclusión ideológica. No parece ser esa la situación, a juzgar tanto por la distribución de las intenciones de voto (en las encuestas más recientes la intención de voto al PP entre esos electores de *centro puro* triplica casi a la del PSOE⁸⁵) cuanto por cómo posicionan esos electores al PP: a la derecha de ellos mismos, pero no *tan a la derecha* como para plantearse un escrúpulo a la hora de votarle⁸⁶.

Este repaso a las cuestiones políticas que –desde la perspectiva práctica que orienta este trabajo– nos han parecido más relevantes en este momento no puede cerrarse (en realidad sí podría, pero seguro que los lectores lo echarían en falta) sin una referencia al fenómeno del llamado *Movimiento 15-M* o, más coloquialmente, el movimiento de los *indignados*. Probablemente menos por la importancia intrínseca del movimiento en sí que por el valor sintomático que la reacción so-

⁸⁴ *Post-Electoral Elecciones Generales y al Parlamento de Andalucía 2008, cit.*

⁸⁵ CIS, Barómetro de julio de 2011, E. 2.909.

⁸⁶ En el Barómetro del CIS de julio de 2011 (cit.), los entrevistados que se sitúan a sí mismos en las posiciones 5 y 6 (*centro puro*) otorgan al PP un posicionamiento medio de 7.4.

cial al mismo tiene acerca de buena parte de las cosas de las que venimos tratando.

En rigor, a mi juicio, **más relevante que la propia indignación como fenómeno social es la anchura del crédito social que ha obtenido en forma de simpatía y/o adhesión a sus tesis**⁸⁷. La misma se explica fundamentalmente por la capacidad de *resonancia* que sus presupuestos *legitimadores* y la *música* de sus propuestas han conseguido. Esa resonancia trae causa del hecho de que el mal humor económico (y sus reverberaciones políticas y sociales), cuyas dimensiones hemos ido viendo a lo largo de las páginas anteriores, ha estado, por así decirlo, encapsulado y carente de vehículos de expresión al exterior o, cuando ha buscado alguna forma de expresión, no ha encontrado suficiente legitimidad social en sus promotores para abanderarla⁸⁸.

El éxito –en cambio– de los *indignados* radica en que han sido capaces de establecer un *frame* en torno a un mínimo denominador común de carácter negativo que les ha colocado en una posición muy favorable a la hora de granjearse una amplia simpatía no sólo en lo que llamaríamos las áreas sociales más afines a su sensibilidad (jóvenes, desempleados...) sino en la sociedad en su conjunto. A ello contribuye –y en mi opinión en no pequeña medida– un malentendido bastante ex-

⁸⁷ Me he ocupado de la cuestión en “Descifrando la indignación”, en *El País*, 30 de junio de 2011, página 35.

⁸⁸ Esto último es lo que sucede con la fracasada huelga general convocada por los Sindicatos mayoritarios el 29 de septiembre de 2010.

tendido acerca de su identidad ideológica, que, como veremos, resulta muy llamativo.

Para ilustrarlo, bastan unas pocas cifras significativas. Según el Barómetro del CIS de junio de 2011⁸⁹, el 50% de los españoles seguía con *mucho* o *bastante* interés este movimiento y sólo un 20% vivía entonces al margen de la información sobre el mismo. Entre el 80% que se declaraba, en mayor o menor medida, atento a la cuestión, el 70% declaraba una actitud muy o bastante positiva hacia el mismo. Por supuesto, entre los más jóvenes, esa actitud positiva era algo mayor (76%), pero no muy distinta de la que declaraban las personas de edad intermedia (en torno al 70%). Incluso entre los de más edad, los mayores de 65 años, la actitud positiva superaba claramente el 50%. La actitud más positiva era la de los votantes de IU (más del 90%), seguidos por los del PSOE (80%), pero, incluso entre los menos entusiastas, los votantes del PP, la actitud positiva llegaba hasta el 56%.

Muy similares conclusiones se extraen de la encuesta de Metroscopia para *El País* realizada en fechas parecidas⁹⁰: el 66% expresaba más bien simpatía hacia el movimiento, basada fundamentalmente en que una inmensa mayoría (81%) piensa que los *indignados* tienen razón, mientras que sólo al 9% le parece que carecen de argumentos. Aunque la simpatía es más

⁸⁹ E. 2.905, realizado del 2 al 9 de junio de 2011 sobre una muestra de 2.472 entrevistas.

⁹⁰ Encuesta de Metroscopia sobre una muestra de 1.002 casos publicada en *El País* el 5 de junio de 2011.

intensa entre los votantes del PSOE (78%) que entre los del PP (46%), en ambos grupos resulta la opción mayoritaria.

Algo más matizado aparece el panorama en una encuesta realizada por la misma empresa para el mismo medio apenas tres semanas después⁹¹, cuando ya se habían producido algunos incidentes (el más importante, el cerco al Parlamento de Cataluña el 15 de junio). Aunque el monto general de simpatía apenas había descendido un par de puntos, la polarización en torno a él había aumentado: ya entre los votantes del PP la proporción de gente que simpatiza con el movimiento había descendido hasta igualarse con la de rechazo hacia el mismo.

Por otra parte, el repaso que en la encuesta se hace a las “propuestas” de los indignados (el catálogo de medidas políticas y económicas que se han ido *aproband*o en sus interminables debates asamblearios) revela un amplio apoyo a la inmensa mayoría de las mismas, desde simplezas como ofrecer en alquiler protegido las viviendas vacías o crear un banco público para reducir el poder de los mercados (en ambos casos, con un apoyo superior al 60%), a propuestas efectistas como la prohibición de promover ERE a las empresas mientras tengan beneficios (por encima del 85% de apoyo). La supresión de cualquier ayuda de dinero público a la Iglesia Católica también recaba un apoyo del 60% y sólo en el caso de la “nacionalización de la Banca” (*sic*) hay un equilibrio entre posturas favorables (43%) y contrarias (41%).

⁹¹ Encuesta de Metroscopia sobre una muestra de 803 casos publicada en *El País* el 26 de junio de 2011.

Una encuesta –un tanto *sui generis*⁹²– realizada sobre los *indignados* de Salamanca nos permite un acercamiento –que debería ser cauteloso– al perfil de este movimiento.

En la medida en que sus conclusiones resulten generalizables, esto es, que la población observada reproduzca las características de la población *indignada* en su conjunto, lo más relevante es que retrata a una población con un perfil izquierdista fuertemente definido: entre los *indignados* entrevistados el 65% se posiciona en las posiciones más a la izquierda (del 1 al 3)⁹³, espacio en el que –en el conjunto de la población adulta– se colocan apenas el 26%⁹⁴. Así, frente a una media en la escala de auto-posicionamiento ideológico de 4,75 en la población general⁹⁵, la media resultante en esta población es de 2,84.

Este es el **principal malentendido** al que nos referimos. En las dos encuestas de Metroscopia sobre este movimiento hay una amplísima mayoría (58% en la primera encuesta y 59% en la segunda) que suscriben la opinión de que se trata de un “movimiento sin tendencia política concreta”, frente a un 29% que lo adscribe a la izquierda y menos del 2% que lo *apunta* a la derecha.

⁹² Encuesta realizada sobre “más de 250 personas” (*sic*; a través del texto se puede deducir que fueron exactamente 257) participantes en las Asambleas y acampadas de Salamanca entre el 18 de mayo y el 12 de Junio. Cfr. Calvo, K., Gómez-Pastrana, T. y Mena L.: “Movimiento 15-M. ¿quiénes son y qué reivindican” en *Zoom Político. Especial 15-M*, Laboratorio de Alternativas, Fundación Alternativas (www.falternativas.org).

⁹³ “Movimiento 15-M...” *cit.*, página 8.

⁹⁴ *Post-Electoral Elecciones Generales y al Parlamento de Andalucía 2008, cit.*

⁹⁵ E. 2.909, *cit.*

Lo más llamativo, con todo, es que ese malentendido acerca de la significación ideológica del 15-M lo comparten en parecida medida los votantes del PSOE (para el 65% de los cuales se trata de un movimiento sin tendencia política concreta) y los del PP (53%). Aún más extraordinario resulta descubrir que el sesgo de percepción es más intenso entre quienes, por su edad, están más cerca del movimiento: el 67% de los entrevistados menores de 35 años suscriben la opinión de que no hay una tendencia política concreta en el 15-M.

Más dominante todavía resulta la impresión de que no estamos ante un movimiento antisistema, sino ante un “movimiento pacífico que pretende regenerar la democracia”, opinión que suscribe el 71% de los entrevistados por Metroscopia⁹⁶. En este caso no hay una cesura tan clara entre la actitud de los participantes y la imagen que proyectan, puesto que, en efecto, entre los *indignados* también predomina –aunque con menor intensidad– la visión del movimiento como *reformista* (62%) y no como *rupturista* (38%)⁹⁷.

Todo ello tiene algo de intrigante. Intriga que una identidad ideológica tan nítida en el sentido de sus *propuestas* sea descifrada de modo tan desenfocado, e intriga doblemente la tranquilidad con la que la sociedad (y los propios actores de la protesta) se niegan a ver (o a reconocer) la condición radical de la misma. Y, lo que me parece aún más intrigante de todo, na-

⁹⁶ *Post-Electoral Elecciones Generales y al Parlamento de Andalucía 2008*, cit.

⁹⁷ “Movimiento 15-M...” cit., página 14.

die parece reparar en la condición **profundamente reaccionaria** de buena parte de lo que proponen.

En efecto, el movimiento ha *vendido* su mensaje centrándolo en dos ideas muy simples: en lo político, reformar lo que no funciona de la democracia representativa, y en lo económico, reducir el que considera excesivo poder de los *bancos* y los *mercados* sobre la *política democrática*. Se trata de un envoltorio hábilmente construido, de *mínimo denominador común* con el que es fácil suscitar una corriente de adhesión mayoritaria.

Sin embargo, lo que el 15-M ha elaborado, sus *Propuestas*⁹⁸, van bastante más allá. Es verdad que buena parte de ellas son generalidades desiderativas más o menos obvias (supresión de gastos inútiles, control del fraude fiscal, reducción de cargos de libre designación) con las que es difícil estar en desacuerdo *de principio* (a nadie le gusta que se incurra en gastos *inútiles*), aunque la concreción puede ser más problemática (la *inutilidad* del gasto no significa lo mismo para todo el mundo).

Ahora bien, cada vez que se desciende a una mínima concreción, *asoma la patita* una idea o bien *estatista* (legislación laboral más rígida en lugar de más flexible, aumento de personal sanitario y educativo, control público de la investigación, expropiación por el Estado de viviendas para darlas en alquiler, aumento de los impuestos y restablecimiento del impuesto de Patrimonio, *tasa Tobin*) o, incluso, con un puntito *soviético* (la

⁹⁸ Las *Propuestas* del movimiento se pueden consultar en www.democraciarealya.es/documento-transversal/.

más notable, la “equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español”, sin distinguir entre el presidente del Gobierno y el concejal de un pequeño pueblo).

Y, tal vez lo más llamativo, en medio de una crisis fiscal como la que atraviesa España, la práctica totalidad de las propuestas se traduce en aumentos del gasto (sanitario, educativo, dependencia) junto a reducción de tasas o precios públicos para financiarlo (transporte, educación superior). Junto a ello, algún detallito más que ecológico puramente regresivo, como la propuesta de “restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE” (al menos, no exige que sea con locomotoras de vapor).

En suma, una mezcla de socialismo utópico, radicalismo político y supino desconocimiento de que en la vida social las ambiciones y los recursos tienen que ir de la mano. A esto se le pueden añadir varias gotas de ignorancia y de simpleza (algunas verdaderamente antológicas en los documentos más elaborados, como la que en su Manifiesto contra el Pacto del Euro señala que el gasto sanitario en España es del 0,4% del PIB, y otras semejantes). Y, como consecuencia de todo ello, la sorpresa ante el eco –cuantitativo y cualitativo– de un movimiento cuya importancia –al igual que la noticia de la supuesta muerte de Mark Twain que publicó un tabloide americano mientras el escritor disfrutaba de unas apacibles vacaciones en Inglaterra– *ha sido notablemente exagerada.*

5

CONCLUSIONES: ¿AHORA QUÉ?

A la vista de todo lo anterior, volvemos a formularnos la pregunta del **qué hacer** en esta precisa coyuntura con la que abrimos estas reflexiones. Se me viene a la cabeza la propuesta –que podría parecer un tanto cínica– de quien fuera Chief of Staff de Obama, el actual alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, de **“no dejar que una crisis tan seria se desperdicie”**⁹⁹. Es un buen programa, pero lo importante es menos la enunciación que la ejecución. Y el repaso que hemos hecho a los mapas mentales de los españoles nos indica que hay serias barreras y frenos para conseguir ese aprovechamiento de la crisis para tomar impulso como país y como sociedad.

Como país y como sociedad. Hay que **retomar –o refundar– el vínculo nacional y el vínculo social debilitados respectivamente por errores políticos y falencias sociales de distinto tipo**. Se echa en falta proyecto, porque la percepción que transmiten los españoles es la de la pérdida de sentido de un proyecto, de una dirección, de metas y objetivos claros. La pérdida de confianza en el liderazgo, no sólo político, sino también so-

⁹⁹ Declaraciones a *The Wall Street Journal*, 19 de noviembre de 2008.

cial, la pobre imagen de las instituciones vertebradoras de la sociedad y no sólo de las de carácter político integran un cuadro que es preciso superar. La relación con la crisis económica de este deterioro institucional es más que evidente. Pero sería un error confinar a lo económico la solución. Hay una crisis económica muy profunda, pero no es la única crisis a la que nos enfrentamos colectivamente.

La sociedad española vive un momento de frustración anímica que, posiblemente, tenga detrás la sensación de haber vivido engañada y, en algunos casos, de haber sido presa demasiado fácil del engaño. Salir de ella exige un impulso de sus élites en la dirección de la sinceridad en el fondo y la claridad en la forma. Los estudios realizados acerca de la comprensión de la crisis y las actitudes de sus *sujetos pasivos* ante ella¹⁰⁰ revelan junto a una insuficiente comprensión de los mecanismos causales de aquella, una disposición a aprender y un cierto espíritu de colaborar en la superación. Es una tarea espinosa, llena de dificultades, porque *prima facie* lo que corresponde proponer es un programa, si no de *sangre*, ni necesariamente de *lágrimas*, sí, sin duda, de *sudor*.

Y la disposición a aceptarlo, el estado mental de asumir eso que llaman los americanos *morder la bala*, no va a tener lugar si, al tiempo, no se consigue construir **un relato de sacrificios compartidos y de sacrificios con sentido**. Esto es, si no se buscan bases desde las que añadir un *codicilo* al *contrato social* mediante el cual todos aceptemos que para que las cosas me-

¹⁰⁰ Especialmente, en este sentido, *Alerta y Desconfiada...*, cit. páginas 205 y ss.

joren todos debemos hacer renunciaciones y asumir la parte que nos toca del *onus* colectivo. Que para volver a vivir mejor –o incluso, para encontrar una nueva forma de vivir mejor– todos debemos aceptar un principio de diferimiento de las recompensas, de sacrificios inmediatos de alguna parte de aquellas.

En otras palabras, un programa *reformista* de verdad, que tiene más reformas dolorosas que placenteras que proponer, sólo resulta aceptable si es honesto, justo y tiene detrás la promesa igualmente honesta, es decir, veraz, de algún futuro mejor.

Esto exige que el comienzo de la nueva etapa política que va a abrirse venga marcado además por un importante número de **gestos encaminados a restituir lo más rápido que sea posible la parte más dañada de la *moral colectiva***, a intentar restablecer la confianza en la honestidad, el espíritu de servicio, la transparencia y la rendición de cuentas (*accountability*) en el espacio público en general y en el político en particular.

Cómo remover las resistencias sociales a las reformas necesarias pasa en primer lugar por hacerlas inteligibles y, en segundo lugar, por dotarlas de mecanismos compensadores, por evitar que las mismas adolezcan de cualquier forma de *asimetría social* o sean percibidas así. Sin duda, esto es más fácil de decir que de hacer, puesto que lo más probable es que el partido ganador no se encuentre en una disposición favorable en su principal oponente para ayudarlo a conseguir esa complicidad social que necesita, sino más bien en la disposición contraria. Pero, aun así, **el esfuerzo por lograr una base amplia**

de comprensión al menos y de complicidad idealmente parece del todo indispensable.

Ante este panorama, **algo que hay que evitar a todo trance es el *overbid***, la promesa que no se puede cumplir, en los planteamientos programáticos. Al margen incluso de consideraciones morales, es que, desde el punto de vista instrumental, ni siquiera es preciso hacerlas para conseguir la victoria en las elecciones. La próxima legislatura va a ser muy dura y muy exigente para el futuro Gobierno y bastante lastre va a llevar en todo caso como para necesitar ponerse él mismo más carga sobre los hombros. Un programa sin demasiados compromisos cifrados, de ideas y proyectos más que de números espectaculares. Es mejor afrontar la crítica a la inconcreción que el repudio al incumplimiento.

Pero, además de las dimensiones económicas y sociales, que sin duda son prioritarias en la mente de la ciudadanía, agobiada por el *primum vivere* en muchos casos de forma dramática, hay que enfrentarse a muchas otras cuestiones que también forman parte de la salida de la crisis entendida en un sentido más amplio y que, como aquellas, exigen tanto sentido como pedagogía.

Una de ellas que claramente se echa de menos entre líneas cuando se analizan las actitudes de la gente tiene que ver con lo que llamaríamos **la amplitud de la mirada**. Por debajo de buena parte de las insuficiencias de comprensión de la situación y, consecuentemente, de la simpleza de las reacciones negativas a la misma están las limitaciones de

comprensión de las interdependencias globales, un cierto provincianismo en la *lectura* del fenómeno de la globalización y también una comprensión insuficiente o sesgada de las implicaciones de la pertenencia a un espacio económico supranacional como el de la Unión Económica y Monetaria. En este último ámbito, observamos ya un tenue debilitamiento del sentimiento europeísta de los españoles (en su nivel más bajo desde la incorporación de España a la Unión Europea) y algunas reacciones “soberanistas” a las –mal explicadas– intervenciones europeas en la gestión de la crisis y, especialmente, en las exigencias de la consolidación fiscal. Ciertamente, estamos muy lejos de la visceralidad que, por ejemplo, se está dando en otros países periféricos, como Grecia e incluso Portugal, pero, tendencialmente, encontramos aquí fenómenos inquietantes.

Otro de los temas que reclama grandes reformas y mucha pedagogía de las mismas es el **tema educativo**. He aquí un ejemplo difícilmente superable del malentendido en que se ha operado en el espacio político. España –incluso desde antes de que llegara la democracia, desde los primeros años 70 con la *Ley Villar*– ha hecho un ingente esfuerzo económico para recuperar uno de los atrasos más duraderos, palmarios (y dañinos) de nuestra sociedad, el del bajo nivel de educación formal de los españoles. Los resultados *formales* de ese esfuerzo son evidentes en la escolarización universal gratuita hasta la Enseñanza Secundaria y la espectacular extensión (y democratización) de la educación universitaria. Pero, culminado ese esfuerzo, no ha habido –fuera de alguna retórica, sobre todo en las vísperas de las elecciones– el cambio de

chip que era preciso para pasar de lo cuantitativo (la cobertura) a lo cualitativo (los resultados) y de lo económico (los recursos) a lo moral (los valores).

En este sentido nos encontramos con un discurso –del que el anterior Gobierno socialista no se ha apeado, ni siquiera ante la evidencia de su sinsentido– en el que el elemento de justificación de la política educativa, no ya su *ultima ratio* sino su *única ratio*, eran los recursos insumidos por el sistema. En vísperas de las últimas elecciones municipales¹⁰¹, todavía Zapatero establecía como referencia de la política educativa de su Gobierno el aumento en el número de becas y en su cuantía, sin detenerse un momento a reflexionar que presumir de aumentar los recursos cuando disminuyen los resultados es tanto como sentar acta de la disfuncionalidad del sistema.

Tenemos una de las más altas tasas de fracaso escolar en Europa, sólo superada por Portugal y Malta¹⁰²; obtenemos resul-

¹⁰¹ Zapatero, en un mitin del PSOE en Zaragoza el 15 de mayo de 2011 (ver *El País* del 16 de mayo).

¹⁰² El porcentaje de españoles entre 18 y 24 años que han completado como máximo sólo el nivel inferior de la enseñanza secundaria, y que no están en la actualidad siguiendo ningún programa educativo (incluida la formación para el empleo) alcanzaba en 2009 el 31.2%, igual al de Portugal y sólo superado por Malta. En ese año, la media de fracaso escolar en los 27 países de la Unión Europea era del 14.4%, menos de la mitad de la de España. Pero aun peor: frente a una media de reducción del abandono escolar temprano en el conjunto de la UE a lo largo del decenio anterior del 18.2%, en España la tasa de abandono había crecido un 7.2% en ese periodo. Además de España, sólo Finlandia y Suecia (ambas partiendo de tasas muy bajas de fracaso) habían experimentado en el decenio un aumento de la tasa de fracaso. La tasa española más que triplica el objetivo 2010-2020 establecido por la UE. Cfr. *Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda*, Bruselas, enero 2011 (www.europa.eu/education).

tados pobres en las comparaciones internacionales sobre rendimiento académico de nuestros jóvenes¹⁰³; el nivel de conocimiento de lenguas extranjeras y, especialmente, del inglés, es significativamente más bajo en España que en la Unión Europea¹⁰⁴; ninguna de las Universidades españolas ocupa un lugar siquiera *digno* en los *rankings* internacionales de excelencia¹⁰⁵.

Todo ello junto se llama **retraso educativo**. Y en un entorno como el actual, retraso educativo es sinónimo de retraso económico (y, por supuesto, social). La *Economía del Conocimiento* da lugar a que hoy la materia prima más importante de la *riqueza de las naciones* sea cada vez más su *stock* de talento bien formado.

¹⁰³ El último *Informe PISA*, pese a un ligera mejora sobre los pésimos resultados de 2006, muestra que tanto en destreza lectora como en ciencias y matemáticas, los jóvenes españoles de 15 años obtienen resultados inferiores a la media de la OCDE y, sobre todo, no muestran –en el curso del decenio que cubren los sucesivos informes– otra cosa que un estancamiento en su retraso. Cfr. *PISA 2009. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. OCDE. Informe español*, Ministerio de Educación, 2010 (www.educacion.gob.es).

¹⁰⁴ De acuerdo al Eurobarómetro especial *Europeans and their Languages* (2005), los españoles monolingües representan una proporción sólo superada por húngaros, portugueses e italianos (aparte de los británicos e irlandeses). Sólo el 27% dice hablar inglés (la media europea de angloparlantes excluidos aquellos para los que es su lengua materna es del 44%). De los que afirman hablar inglés, sólo el 12% dice hablarlo *muy bien* (www.europa.eu/education). Por otra parte, un reciente estudio de Ipsos Marketing (2010) reduce al 20% la proporción de españoles que consideran su nivel de inglés *intermedio* o *avanzado*.

¹⁰⁵ De acuerdo al *Academic Ranking of World Universities 2010*, las cuatro primeras instituciones universitarias españolas (Autónoma y Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona y Politécnica de Valencia) se encuentran en el tramo 201-300 de los 500 centros clasificados (www.arwu.org). Por encima de nuestras Universidades mejor clasificadas hay 15 Universidades alemanas, 14 del Reino Unido, 7 de Francia y 4 de Italia, por referirnos sólo a los principales países europeos.

Y el error de seguir considerando que ese retraso es, sólo o principalmente, una **cuestión de recursos** es un error que nos está costando muy caro. Los recursos son importantes, pero más importante es la **organización del sistema** y los **valores educativos que prevalecen**.

Los errores que se han cometido en nombre de la *renovación educativa* son ya tan evidentes que no vale siquiera perder el tiempo en enumerarlos. Conceptos equivocados en cuanto a la organización y los valores han dado lugar a un sistema que no valora el esfuerzo, que no recompensa el mérito, que es complaciente en exceso con el fracaso, que, más allá de la voluntad y el compromiso de los docentes, aparece estructuralmente orientado a la mediocridad y contrario a la excelencia. He aquí un reto de primer nivel que hay que acometer sin tardanza y cuya importancia no es preciso ponderar.

Y, sin duda, dentro de la agenda de contenido más político, aunque las reverberaciones económicas de la misma están a la vista, se inscribe la necesidad de **racionalizar aspectos centrales de la organización política del Estado**, especialmente en lo que se refiere a una mirada autocrítica a las falencias del Estado de las Autonomías y a la reforma de la Justicia.

No podemos engañarnos sobre lo primero. **Racionalizar el Estado multinivel** suprimiendo la mirada de duplicaciones, solapamientos e ineficiencias del mismo hoy no es algo conveniente, sino **algo imprescindible y urgente**. No va a ser fácil, porque algunos de los vicios de funcionamiento de aquel se han enquistado con mucha fuerza en el sistema y removerlos va

contra un sólido cuerpo de intereses que no son sólo los de los *nacionalistas confesos* como suele pensarse, sino también de aquellos a quienes –parafraseando a Hayek– llamaríamos los *nacionalistas de todos los partidos*, las élites regionales y locales que han colonizado nuestro Estado compuesto. Pero esta es una de las tareas que no admite demora ni paños calientes. Tenemos una Administración *antieconómica* no sólo por lo que cuesta, sino por lo que entorpece la vida económica y social. Fenómenos como la hiperlexis, la multiplicidad reglamentaria, las contradicciones normativas, las intervenciones administrativas múltiples, perjudican la actividad económica y atentan contra la unidad de mercado. Podar todo esto sólo es posible a través de un sólido acuerdo político entre los partidos nacionales y un compromiso honrado también con los partidos nacionalistas y con las sociedades en las que aquellos se han arraigado. Pero la búsqueda de esos compromisos no puede enervar eternamente la acción. Esta reforma será mucho mejor con ese acuerdo, pero la falta de él no puede ser excusa para abordarla.

Y en ese mismo contexto es preciso abordar una **reforma de la Administración de Justicia** con el doble propósito de reducir el coste económico de la *no-Justicia* (por ineficiencia o simplemente por lentitud) y de mejorar el crédito de los ciudadanos hacia una Justicia que puedan percibir como eficaz, rápida, justa (valga la redundancia) y no sometida a las presiones políticas.

En fin, la pregunta de *qué hacer* tiene desde luego una respuesta segura: *muchas cosas*. Hace falta que el liderazgo po-

lítico sea capaz de transmitir a la ciudadanía que tiene en la cabeza una agenda orientada no sólo a salir del bache, sino a salir con la fuerza necesaria para conquistar la siguiente colina. Debe ser capaz de conseguir la complicidad requerida para que la mayoría comparta los objetivos y les vea el sentido. Para ello tiene que recauchutar el espíritu de solidaridad y esfuerzo compartido, por encima de las divisiones y fracturas políticas y sociales. Si todo eso se consigue, esta encrucijada puede ser la ocasión buscada para un nuevo impulso colectivo que nos ponga de nuevo en la pista del éxito que ya hemos conocido en tantas cosas a lo largo de los últimos treinta y cinco años y que nada impide que volvamos a recorrer.

POST-SCRIPTUM

LAS ELECCIONES GENERALES 2011, UN ANÁLISIS PRELIMINAR*

* Una primera versión de este texto fue presentada en un seminario de la Fundación FAES y difundida por la Fundación Ciudadanía y Valores en su boletín electrónico. www.funciva.org

1. Los números de la elección: la victoria del PP, la implosión del PSOE y el aumento de la fragmentación

Los resultados del 20-N no depararon grandes sorpresas. Si los comparamos con el *poll of polls* (media de los 10 últimos sondeos difundidos antes de la elección), las desviaciones se limitan a una sobreestimación ligera del potencial del PP (la media era de 189 escaños frente a los 186 que finalmente obtuvo) y una sobreestimación algo mayor en el del PSOE (media de 118 escaños frente a los 110 conseguidos realmente). Consiguientemente, el potencial de las minorías fue infraestimado por las encuestas: casi todas las relevantes –IU, CiU, UPyD y Amaiur– obtuvieron más escaños de los que les otorgaban la media de esas previsiones.

Vamos a examinar en primer lugar los resultados desde el punto de vista *numérico*, intentando sintetizar lo más relevante de la ingente masa de datos que la elección proporciona (estática y dinámicamente), para abordar en el siguiente epígrafe un intento de interpretación de la dinámica política subyacente, y finalizar con una aproximación a las previsibles consecuencias inmediatas en la vida política española.

Comenzamos pues con una consideración de los resultados nacionales y su comparación con el precedente electoral anterior, el de 2008, como se muestra en el Cuadro 1.

POST-SCRIPTUM. CUADRO 1

Elecciones Generales 2011

(% sobre voto válido y escaños)

	Resultados 2011	Resultados 2008*
	44,6 (186)	40,1 (154)
	28,7 (110)	43,6 (169)
	6,9 (11)	3,8 (2)
	4,1 (16)	3,1 (10)
	4,7 (5)	1,2 (1)
	1,1 (3)	1,2 (3)
	1,3 (5)	1,2 (6)
	0,8 (2)	0,8 (2)
	0,6 (2)	0,7 (2)
	1,4 (7)	N.P.
	0,4 (1)	N.P.
	0,5 (1)	N.P.
	0,2 (1)	N.P.
Otros y blancos	4,7 (--)	4,3 (1)
Participación (%)	71,69	75,32

Fuente: Ministerio del Interior

*Para mantener homogénea la comparación no se considera el voto de los residentes ausentes

La primera conclusión que de esta agregación nacional de los resultados se deduce es que **hemos regresado a los niveles de *no competitividad* de la década de los 80**, con el PP convertido en **partido hegemónico** en el papel que entonces ocupara el PSOE.

En el **Congreso**, una ventaja de **16 puntos porcentuales y 76 escaños** le reportan un exceso de 10 diputados sobre la mayoría absoluta.

En el **Senado**, el predominio del PP –incluyendo los designados por las CC.AA. **tiene 161 de los 268 senadores**– le permite la **mayoría cualificada** de 3/5 sin concurso externo alguno.

El **PP gobierna en 11 de las 17 Comunidades Autónomas**, a las que se podría unir en breve Andalucía, el último bastión socialista en el que el PP derrotó ampliamente al PSOE en las elecciones del 20 de noviembre, y gobierna además en la mayor parte de las ciudades importantes del país (entre ellas, en 42 de las 50 capitales).

Podemos afirmar que estas elecciones quiebran el ciclo de alta competitividad (con la señalada excepción de 2000) y creciente concentración bipartidista (sin excepciones hasta ahora) que se venía produciendo desde 1993, tras la prolongada hegemonía socialista entre 1982 y 1993, **como podemos ver en el Cuadro 2.**

POST-SCRIPTUM. CUADRO 2

Competitividad y concentración

Resultados del PSOE y del PP en Elecciones Generales (1993-2011)

	1993	1996	2000	2004	2008	2011
	38,8	37,6	34,2	42,6	43,9	28,7
	34,8	38,8	44,5	37,7	39,9	44,6
Σ PSOE + PP	73,6	76,4	78,7	80,3	83,8	73,3

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. Para mantener homogénea la comparación no se considera el voto de los residentes ausentes

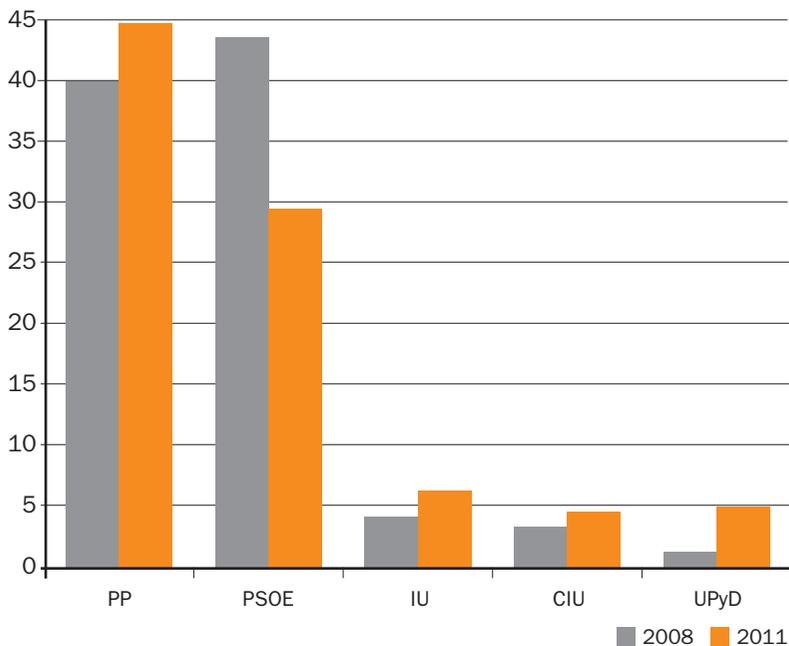
Y esta quiebra se traduce en un regreso a **niveles de asimetría de representación cuyo precedente más próximo son las elecciones de 1986**, en las que el PSOE obtuvo 184 escaños y la Coalición Popular 105. Pero aquellas elecciones eran el segundo hito de la etapa hegemónica del PSOE y eran elecciones *de continuidad* y estas son unas elecciones *de cambio* que, por el contrario, hacen añicos el *ciclo zapaterista*. Aquellas fueron elecciones de normalidad y estas tienen elementos de marcada excepcionalidad.

En términos de la **evolución del espacio electoral** de los principales partidos, el Gráfico 1 permite apreciar cómo la descomposición electoral del PSOE aprovecha a todos sus competidores electorales de forma desigual: los respectivos crecimientos de PP, IU, CiU y UPyD se deben en buena parte a ese descenso socialista, que explica también el notable incremento de la abstención (Cuadro 3).

POST-SCRIPTUM. GRÁFICO 1

Evolución espacio-electoral de los principales partidos

(2008-2011)



Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. Para mantener homogénea la comparación no se considera el voto de los residentes ausentes

A reserva de conocer los datos sobre los flujos de transferencia de votos entre partidos que sólo pueden proporcionar las encuestas post-electorales (la del CIS, esencialmente) se puede aproximar una conclusión sobre dónde han ido a parar los votos perdidos del PSOE basada en el análisis ecológico (distribución territorial del voto) de los resultados.

POST-SCRIPTUM. CUADRO 3

Evolución del número de votos (2008-2011)*

	2008	2011	SALDO
	10.169.973	10.830.693	+660.720
	11.064.524	6.973.880	-4.087.644
	963.040	1.680.810	+717.770
	774.317	1.014.263	+239.946
	303.535	1.140.242	+836.710
Votos válidos totales	25.352.255	24.272.671	-1.079.584

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior.

* Datos sin voto de residentes ausentes para mantener homogénea la comparación

Según esa aproximación hipotética¹, el PP podría haber obtenido cerca de un millón de esos votos, su mayor nutriente nuevo en la cosecha electoral. Entre votantes fallecidos (alrede-

¹ La primera aproximación a este tipo de análisis realizada por César Molinas ("La izquierda volátil sigue decidiendo, pero..." *El País*, 23 de noviembre, página 35) presenta cifras más modestas en esa transferencia. Al margen de discrepancias analíticas, Molinas da cifras algo inexactas, porque establece los saldos de voto comparando inadecuadamente el voto total (incluidos no residentes) de 2008 con el voto sólo de residentes de 2011 y desprecia el impacto de los fallecimientos inter-electorales. Así, la cuenta de pérdidas y ganancias que ofrece tiene algunos errores: el PP gana entre los residentes 100.000 votos más de los que señala Molina mientras que el PSOE pierde 200.000 votos menos de los que él registra, si comparamos *like for like* con rigor. Sin embargo, la escasísima participación registrada en el voto en el exterior (no llegan a 69.000 según los primeros datos, frente a los más de 382.000 registrados en 2008) da lugar a que las cifras consolidadas se aproximen bastante a las que presenta. No obstante, dado que las cifras del voto de no residentes son, por definición, opacas (no son encuestables), nosotros hacemos todo el análisis sobre el voto de los residentes. Un trabajo de José Juan Toharia, José Pablo Ferrándiz y Josep Llobera ("Fidelidad y fuga", *El País Domingo*, 27 de noviembre, págs. 6-7) ofrece conclusiones similares a las nuestras, si bien, a nuestro juicio, sobrestima la fuga de votantes del PP, especialmente hacia UPyD.

dor de 400.000) y votantes que optaron por otras fórmulas o por abstenerse (según las encuestas preelectorales, en torno a 600.000), el contingente de votantes fieles de 2008 representaría alrededor de 9,2 millones, lo que supone que 1,6 millones de sus votos en esta elección provienen de nuevos votantes del partido. Alrededor de la mitad de los 600.000 que no provienen del PSOE serían nuevos votantes por edad, y el resto abstencionistas anteriores y votantes de partidos minoritarios.

También los incrementos de los demás partidos deben al PSOE la parte del león de su crecimiento. Indudablemente ese es el caso en los votos de IU y el análisis ecológico sugiere que también sucede lo propio en los casos de CiU y UPyD.

Respecto a CiU, no puede haber duda alguna de que, en grandes números, son votantes del PSC-PSOE los que le transfirieron su voto en la mayor proporción: todos los demás partidos con representación crecen en número de votos en un entorno en que la abstención, a su vez, también aumenta en más de 4 puntos porcentuales.

En cuanto a UPyD, a escala nacional, su salto en espacio electoral –a diferencia de lo que sucedió en 2008, en que se *nutrió* equilibradamente de anteriores votantes socialistas y populares– registra en estas elecciones su notable crecimiento a expensas fundamentalmente del PSOE, lo que parece llevar consigo un cambio radical en el perfil social del votante.

Podemos ilustrar esta transformación con el caso de Madrid, circunscripción donde en 2008 UPyD consiguió un 43% de to-

dos sus votos. En esta ocasión, sus votos madrileños representan sólo el 30% de todos los que ha obtenido en España, lo que ilustra el mejor reparto territorial de su fuerza. Pues bien, en 2008, UPyD era más fuerte en los distritos y municipios de mayor renta. En 2011 sucede lo contrario. Mientras en ese tipo de entornos el crecimiento relativo es más modesto (aproximadamente dobla su espacio electoral) en los entornos menos privilegiados económicamente más que triplica su cosecha y se sitúa por encima de la media de la Comunidad (Cuadro 4).

POST-SCRIPTUM. CUADRO 4

Evolución del voto del PP, PSOE, y UPyD en distintos entornos de Madrid (2008-2011)

(% del voto válido)

						
	2008	2011	2008	2011	2008	2011
Distritos alta renta						
Retiro	60,5	60,1	28,8	19,5	4,9	9,5
Salamanca	66,2	66,8	23,8	15,9	4,5	8,3
Chamartín	66,3	67,7	23,7	15,3	5,2	8,7
Distritos baja renta						
Villaverde	38,9	40,5	49,3	35,2	2,7	9,8
Villa Vallecas	37,8	38,7	49,8	32,2	3,2	11,8
Vicálvaro	38,6	39,6	48,5	32,1	4,2	12,3
Municipios alta renta						
Majadahonda	62,0	63,9	26,7	16,6	5,7	10,4
Pozuelo	64,8	65,7	25,2	16,1	5,4	10,2
Municipios baja renta						
Alcorcón	45,7	47,9	43,5	28,7	3,5	10,8
Móstoles	45,2	47,3	44,5	29,3	2,9	10,7
TOTAL COMUNIDAD	49,3	50,8	39,5	26,0	3,8	10,3

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. Para mantener homogénea la comparación no se considera el voto de los residentes ausentes

Más allá de las hipótesis –o incluso, conjeturas– acerca de las corrientes transferenciales del voto, nos interesa detenernos ahora en la dimensión territorial de la dinámica de las dos principales fuerzas políticas entre esta y la anterior elección. Esta dinámica –a nivel de Comunidad Autónoma– se encuentra reflejada en el Cuadro 5.

De este cuadro podemos derivar algunas conclusiones importantes sobre el resultado de la elección y la significación de su dinámica en lo que se refiere a los actores centrales del sistema.

La victoria del PP se produce no sólo por mayoría absoluta, sino por mayoría *universal*. En efecto, el PP se impone en 15 de las 17 CC.AA. y en 45 de las 52 circunscripciones electorales. El PSOE sólo lo hace –por muy estrecho margen en ambas– en las circunscripciones de Barcelona y Sevilla². Ni siquiera en 1982, a pesar de que entonces la distancia del PSOE respecto a la Coalición Popular fue 6 puntos más amplia que la obtenida ahora por el PP respecto al PSOE, la victoria del PSOE alcanzó tanta transversalidad territorial, ya que el PSOE se impuso entonces *sólo* en 42 circunscripciones y no fue primera fuerza en el País Vasco y en Galicia.

La derrota del PSOE, en lo básico una simetría inversa de lo anterior, **resulta, incluso, aún más *universal*.** En efecto, vista a este nivel de agregación, da lugar a una situación inédita en

² En el resto, CiU gana en Cataluña y 3 de sus provincias, el PNV lo hace en el País Vasco y en Vizcaya, y, por último Amair es primera fuerza en Guipúzcoa.

POST-SCRIPTUM. CUADRO 5

Elecciones Generales (2008-2011)

(Espacio electoral de PP y PSOE por CC.AA. y variación relativa en %)

ESPAÑA/ COMUNIDAD	PSOE			PP		
	2008 (% v.v.)	2011 (% v.v.)	Var %	2011 (% v.v.)	2008 (% v.v.)	Var %
 ESPAÑA	43,64	28,73	-34,2	40,11	44,62	+11,2
 ANDALUCÍA	51,76	36,57	-29,3	38,35	45,57	+28,6
 ARAGÓN	46,25	31,47	-32,0	37,12	47,73	+21,1
 ASTURIAS	46,26	29,19	-36,9	42,08	35,41	-15,9
 BALEARES	44,12	28,86	-34,6	44,04	49,53	+12,5
 CANARIAS	39,65	24,82	-37,4	35,52	48,00	+35,1
 CANTABRIA	43,43	25,18	-42,0	50,19	52,20	+4,0
 CASTILLA LA MANCHA	44,38	30,31	-31,3	49,48	55,84	+12,9
 CASTILLA Y LEÓN	42,35	29,12	-31,2	50,42	55,44	+10,0
 CATALUÑA	45,33	26,63	-41,3	16,39	20,71	+26,4
 C. VALENCIANA	40,83	26,71	-34,6	51,72	53,32	+3,1
 EXTREMADURA	52,14	37,13	-28,8	42,00	51,24	+22,0
 GALICIA	39,49	27,69	-29,9	44,50	52,52	+18,0
 LA RIOJA	43,59	31,06	-28,7	49,59	54,71	+10,3
 MADRID	39,45	26,03	-33,0	49,34	50,84	+3,0
 MURCIA	32,57	20,97	-35,6	61,43	64,27	+4,6
 NAVARRA	34,58	22,00	-36,4	39,29	38,18	-2,8
 PAÍS VASCO	38,09	21,54	-44,4	18,50	17,80	-3,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. Para mantener homogénea la comparación no se considera el voto de los residentes ausentes

toda la historia de este tipo de elecciones, a saber, que **el principal partido de la oposición no es la primera fuerza ni en una sola de las 17 CC.AA.**

Dentro de ello, registramos distintas coloraciones en la **declinación territorial**. Mientras en el caso del PSOE hay prácticamente un único acorde de modulación y una intensidad bastante homogénea, en el caso del PP hay mucho mayor *recorrido* en las diferencias no sólo en intensidad, sino incluso en sentido.

En efecto, con una caída media del espacio electoral superior al 34% en el conjunto de España, **el PSOE pierde espacio en todas las Comunidades**, oscilando su pérdida entre un mínimo ligeramente inferior al 30% (Rioja, Galicia, Extremadura y Andalucía) y un máximo algo superior al 40% (41% en Cataluña, 42% en Cantabria, 44% en el País Vasco). El recorrido, por tanto, es de alrededor de 16 puntos. Esto es, **se trata de una caída en la representación notablemente homogénea que parece trasladar un sentido inequívoco sobre sus causas**. Como consecuencia, el PSOE no consigue ser la primera fuerza en ninguna Comunidad, habiéndose quedado *literalmente* sin feudos propios: sólo en Andalucía y Extremadura supera ligeramente el 35% del voto, y en 12 de las Comunidades está por debajo del 30%.

En el caso del PP nos encontramos, en cambio, con una gama de situaciones mucho más amplia. El crecimiento medio nacional, del 11%, es, como resulta obvio, bastante más *modesto* que el descenso del PSOE, lo que, contra lo que se

está escuchando abundantemente en comentarios desde la derecha más radical, no significa un “fracaso político” sino un puro corolario de sentido común. Si el PP hubiera conquistado todo el voto perdido por el PSOE habría obtenido más del 55%, algo inimaginable en un sistema multipartidista como el nuestro, con 13 formaciones distintas que han obtenido representación parlamentaria³. Se podría decir, incluso, que si no existieran esos receptáculos del voto distintos del PP, es muy difícil pensar que el PSOE hubiera perdido tanto espacio.

En efecto, el PP ha alcanzado un espacio electoral muy cercano al máximo histórico del PSOE en 1982, ha logrado un nuevo techo de la formación, por encima del conseguido en 2000, y la segunda mayoría más amplia desde 1977, superada sólo por los 202 escaños del PSOE en 1982.

Pero sus ganancias tienen una localización geográfica matizada. Sólo en Canarias hay una correspondencia muy alta entre lo que pierde el PSOE y lo que gana el PP. Además de en ese archipiélago, donde más gana el PP es en Andalucía –donde por primera vez no sólo supera al PSOE, sino que, además, obtiene un porcentaje del voto superior a su media nacional–, en Cataluña, Extremadura y Aragón. En esas 5 Comunidades sus ganancias en espacio electoral superan el 20%.

³ De hecho, estas elecciones marcan un hito en cuanto al número de partidos/coaliciones que han logrado representación. Trece formaciones distintas (que serían quince si tomamos en cuenta que UPN y PAR, coligados con el PP, han logrado también representantes) han conseguido algún escaño, marca hasta ahora sólo alcanzada en 1979 y 1989.

Retrocede ligeramente en Navarra (en coalición con UPN) y en el País Vasco (aunque aumenta sus votos, porque hay más participación) y experimenta el mayor retroceso en Asturias como consecuencia de la irrupción del partido de Álvarez-Cascos. Los incrementos relativos más modestos se producen donde su cuota electoral era ya más elevada (Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria), pero en todas ellas supera el 50%, y en Murcia, concretamente, llega al 64%. En 9 de las 17 CC.AA. y en las dos Ciudades Autónomas consigue más de la mitad del voto válido.

Ciertamente, el PP mantiene una cierta debilidad en los dos escenarios regionales, País Vasco (17,8%) y Cataluña (20,7%), que tradicionalmente constituían sus *agujeros negros* de representación. Pero esa distancia en espacio electoral respecto a su media no es crítica en esta elección respecto a su competidor de referencia. Si en 2008 el PSOE aventajó al PP en estas dos Comunidades en 23 escaños, en las elecciones del 20-N lo hizo apenas en 4.

La *debacle* del PSOE da lugar a una corrección de los espacios políticos que se dibujan por la intersección de los ejes izquierda/derecha y ámbito nacional o subnacional de actuación⁴ que afecta, sobre todo, al espacio de la izquierda de ámbito nacional, el más deteriorado (50 escaños menos) en beneficio de todos los demás, como se expresa en el Cuadro 6.

⁴ La práctica totalidad de los partidos que aquí llamamos subnacionales por su ámbito de presencia son partidos convencionalmente llamados *nacionalistas*, quizá con la única excepción del partido de Álvarez Cascos que sería más bien *regionalista*.

POST-SCRIPTUM. CUADRO 6

Distribución de los espacios políticos entre partidos con representación (2008-2011)

(% Voto válido, escaños y variación relativa en ambos)

ESPACIO	2008	2011	VARIACIÓN RELATIVA (% en votos y escaños)
Derecha nacional 	40,1 (154)	44,6 (186)	+11,2 (+20,8)
Izquierda nacional 	47,4 (171)	35,7 (121)	-24,7 (-29,2)
Centro nacional 	1,2 (1)	4,7 (5)	+291,7 (+400)
Derecha sub-nacional** 	4,9 (18)	6,9 (24)	+40,8 (+33,3)
Izquierda sub-nacional* 	2,2 (6)	3,9 (14)	+72,6 (+133,3)
TOTAL REPRESENTADO	98,1	95,3	--

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. Para mantener homogénea la comparación no se considera el voto de los residentes ausentes.

* En 2008, Esquerra, BNG y Na-Bai; en 2011, Esquerra, BNG, Amaiur, Compromís-Q y Geroa-Bai.
** En 2008, CIU, PNV y CC; en 2011, los tres anteriores más FAC

2. La interpretación: una elección de excepción en un entorno de excepción

¿Qué nos dicen los números acerca del *sentido* del comportamiento de los electores? Entramos en un territorio analítico más resbaladizo que el puramente aritmético en el que hasta ahora nos hemos movido. Como antes apuntábamos, mientras

no dispongamos de encuestas en las que los votantes nos digan *de viva voz* de dónde vienen sus votos (y qué les ha llevado a votar a cada uno) estaremos en alguna medida elaborando conjeturas.

Pero con la *realidad dura* (los números electorales) que tenemos ante nuestros ojos, podemos avanzar algunos criterios interpretativos. Empezaremos por el análisis de la participación.

La habitual confusión reinante acerca de su evolución⁵ que se genera en la noche electoral ha llevado a casi todo el mundo a dar por bueno lo que dijo el ministro del Interior, quien comparó el 71,69% del voto computado el día de la elección con el 73,85% del voto total (incluidos residentes ausentes) de 2008, para concluir que se había producido un ligero descenso de 2 puntos en la participación.

En realidad, el descenso *like for like* (sin residentes ausentes) es de 3,63 puntos, un 4,9%. Según los datos avanzados sobre el voto de esos residentes ausentes –entre los que la participación, como consecuencia de la introducción del *voto por rogado*⁶ que ha contemplado la última modificación de la

⁵ Confusión a la que contribuye el Ministerio del Interior que siempre compara los datos consolidados de la elección anterior (por tanto, con el voto de los residentes en el exterior) con la participación entre residentes que es la que se computa en los resultados provisionales.

⁶ El voto por rogado significa que el residente ausente que desee ejercerlo debe solicitar la documentación electoral personalmente y votar en el Consulado o remitir al Consulado por correo su voto legitimado. En esta ocasión, sólo el 9,4% de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes solicitó la documentación y menos de la mitad de ellos han votado finalmente.

Ley Electoral, ha bajado desde el 31,7% al 4,6%— la participación consolidada ha bajado aun más: 5 puntos porcentuales, un 6,7% en términos relativos.

Considerando sólo el voto de los residentes, la única excepción en ese generalizado descenso del voto se registra en el País Vasco, donde ha habido un incremento de la participación del 6,6%, claramente como consecuencia de la presencia de la *izquierda abertzale* a través de Amaiur (en 2008 la consigna *abertzale* fue la abstención y hubo una participación más de 9 puntos inferior a la media nacional; ahora la participación en el País Vasco es sólo 2 puntos inferior a esa media). Aparte de esa excepción, donde menos desciende la participación es en Navarra, donde baja menos de 2 puntos, y donde crece más la abstención es en Baleares, donde lo hace en 6 puntos. Pero, en general, el descenso de la participación es bastante uniforme.

Estamos ante el **primer episodio de descenso de la participación en unas elecciones de cambio**. Probablemente ello tenga sobre todo que ver con la **ausencia de incertidumbre sobre el desenlace**. Los resultados apuntan vigorosamente a que ese incremento de la abstención puede haber percutido especialmente sobre los anteriores votantes del PSOE. En todo caso, lo que este dato pone de manifiesto es la inutilidad de la apelación a la movilización *reactiva* frente a un eventual triunfo del PP, que ha sido el *leitmotiv* más recurrente de la campaña del PSOE.

Ante los llamamientos diversos de los distintos movimientos *anti o parasistémicos* (*15-M, Democracia Real Ya*) a formas de *voto de protesta*, se registra un incremento relativo muy no-

table del voto nulo (pasa del 0,6% al 1,3% de los emitidos, 155.000 votos más) y, en cambio, apenas crece el voto en blanco (48.000 votos más, pasando del 1,1 al 1,4% de los válidos). Sin embargo, una pintoresca formación, *Escaños en blanco*, que se ha presentado en 22 circunscripciones, ha obtenido casi 100.000 votos al Congreso y más de 230.000 votos para sus primeros candidatos al Senado⁷.

Por lo que se refiere a la **distribución del voto**, los resultados de los distintos partidos relevantes sugieren las consideraciones que siguen.

PP. Ya hemos anticipado que la victoria del PP se basa en una excepcionalmente alta *viscosidad* de su electorado (tasa de fidelidad superior al 90%) y la capacidad de *redondearlo* con la aportación de un contingente significativo (cercano al 10%) de anteriores votantes del PSOE, además del aporte de nuevos votantes en los que, según las encuestas previas, más que doblaba al PSOE. Estos avances, combinados con los muy superiores retrocesos del PSOE cuyos votos van a otros partidos o a la abstención, le permiten una preeminencia electoral, como venimos destacando, no sólo muy amplia globalmente, sino también muy transversal territorialmente.

Sin duda, además, se ha ensanchado su *appeal* social, puesto que un 44,6% del voto emitido no se consigue sin una

⁷ Esta formación, de origen catalán, propugna que los escaños que consiga se dejen abandonados y sus titulares no perciban sus salarios, como forma de visibilizar la protesta contra la clase política. En Barcelona, esta lista consiguió el 1,5% en el Congreso y el 3,5% (87.000 votos) a su primer candidato al Senado.

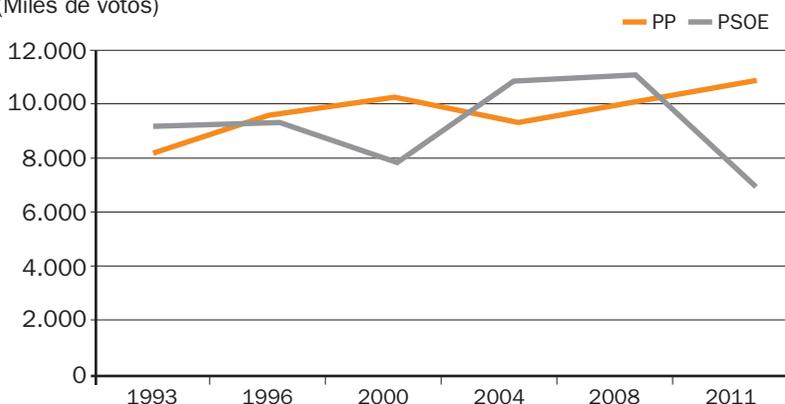
penetración estimable en las capas populares de la sociedad. Por ejemplo, en Madrid, el PP vence en todos los distritos de la capital, salvo Puente de Vallecas, y en todos los municipios del cinturón, incluido alguno como Parla, donde aventaja al PSOE en 11 puntos, cuando en 2008 el PSOE le sacaba 16 puntos de ventaja. Sin embargo, ello se debe en general más a los retrocesos *tous azimuts* del PSOE que a los propios avances del PP. Es la descomposición electoral del PSOE (más intensa en estos entornos: en Parla, por ejemplo, pierde el 39% de los votos que tuvo en 2008) la que genera la ventaja *posicional* del PP.

La pregunta *natural* que surge es: ¿estamos ante el *techo* del PP? No hay elementos suficientes para responderla con argumentos solventes. Por un lado, lo que la historia electoral reciente nos enseña es que la *banda de fluctuación* del PP es bastante más estrecha que la del PSOE (Gráfico 2).

POST-SCRIPTUM. GRÁFICO 2

Evolución electoral PP y PSOE (1993-2011)

(Miles de votos)



Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. Votos sin CERA

Por otro lado, parece claro que los sucesivos techos del PP (2000 y 2011) coinciden con abruptas caídas del PSOE, pero no es menos evidente que la contribución esencial al suelo más sólido del PP reposa en el factor de alta viscosidad y elevada movilización de su *core electorate*, que se mantiene elección tras elección.

En efecto, desde que las urnas en 1993 devuelven al sistema la competitividad que había perdido en 1982, la fluctuación del PP en términos de *espacio electoral bruto*⁸ (proporción de voto sobre censo) se mueve entre el 26,6% (1993) y el 31,5% (2011), mientras que en términos de *espacio electoral neto* (proporción de voto sobre voto válido) la oscilación va desde el 34,8% (1993) al 44,62% (2011), el 22%, básicamente porque sus mejores penetraciones en estos términos coinciden con episodios de elevada abstención (2000 y 2011).

La volatilidad electoral del PSOE es muy superior, especialmente en la primera de las métricas, la penetración electoral bruta, donde oscila entre el 20,3% de la pasada elección y el 32,7% de la anterior, con una variación del 38%, en tanto que en la penetración electoral neta su recorrido es algo más corto (más abstención en su peor resultado), entre el 28,7% de esta elección y el 43,6% de la anterior, una variación del 34%.

¿Cuál es el significado de estas diferencias? El *parti pris* ideológico suele sugerir –desde la izquierda– que el votante

⁸ En todos estos análisis, como en los anteriores, los cálculos están realizados sin considerar el voto de no residentes.

de derechas es más benévolo con los errores del partido que les representa, que está más comprometido... Hipótesis difíciles de demostrar. Porque en realidad las dos mayorías absolutas del PP no pueden basarse en fundamentos más opuestos: la primera, la del año 2000, es un *tributo* a una exitosa gestión (sobre todo, económica) de gobierno en los años anteriores. La segunda, la actual, es un *castigo* a una mala gestión de la crisis por parte del PSOE. **El único elemento en común, en ambos casos, es que ambas mayorías requieren un elevado diferencial de movilización entre los dos bloques centrales del electorado.**

Como en 2000, el PP ha captado una franja crítica del electorado socialista, la más centrista, y ha visto cómo otra se abstenía. La fundamental diferencia respecto a aquel antecedente radica en que **ahora tanto IU como UPyD han sido potentes buffers de almacenamiento del desencanto del votante socialista**⁹. Sin consecuencias políticas que vayan a perjudicar inmediatamente al PP, dada la composición del Parlamento resultante, pero con un potencial de *agitación* del estanco del *bipartidismo creciente* en el que hemos vivido los últimos veinte años.

PSOE. Lo más sustancial que tiene que ver con las dimensiones cuantitativas de su resultado ya lo hemos visto y lo podemos resumir en un brochazo: **su peor resultado y el peor en**

⁹ César Molinas, en el artículo antes citado, estima que IU ha captado 0,7 millones de anteriores votantes del PSOE, mientras que a UPyD habrían ido a parar casi otros tantos: entre ambos habrían succionado cerca de millón y medio de votantes socialistas de 2008.

todas partes. Tampoco parece existir excesiva controversia acerca de la génesis del mismo: la percepción prácticamente universal –incluido el grueso de los votantes socialistas– de una pésima gestión de la crisis económica explica un abultado porcentaje de su resultado.

Ahora bien, más por el interés de futuro que por lo que aporta al análisis del pasado, vale la pena discutir, siquiera sea de forma sucinta y un tanto provisional, a la espera de las encuestas postelectorales, **si el candidato y la campaña han o no tenido algún impacto en el resultado y cuál ha podido ser.**

La comparación diacrónica de las encuestas preelectorales desde que, en julio, se conforma el *marco* (candidato socialista y fecha de la elección) de los comicios **mostraría una notable estabilidad en las preferencias electorales que, en principio, apunta a un efecto nulo tanto del candidato como de la campaña.** Remontándonos algo más en el tiempo observamos apenas dos pequeños repuntes en la intención del voto al PSOE que vienen a registrarse tras el anuncio de la renuncia de Zapatero a ser candidato (abril) y la confirmación de que Rubalcaba sería candidato sin oposición interna (junio). Ambos repuntes resultaron no sólo escasos, sino de rápida volatilización.

El *efecto Rubalcaba* en la práctica no ha encontrado manifestación tangible. En el curso de los meses de su máxima exposición, su imagen se ha ido deteriorando no sólo –como hubiera sido de esperar– entre los votantes del PP, sino incluso

entre los del propio PSOE, a tal punto que, hacia el final de la campaña Rajoy le aventajaba en valoración en prácticamente todas las encuestas. A su vez, podemos preguntarnos qué parte de ese deterioro de su imagen tiene un carácter *posicional* —es decir, deriva de la mayor carga de polarización que tiene la posición de líder electoral del PSOE respecto de la de ministro del Interior que antes ocupaba— y qué parte tiene carácter *performativo*, es decir, se relaciona con su desempeño en el nuevo papel. El hecho de que se deteriore en medida similar entre los *propios* que entre los *ajenos* sugiere un *mix* equilibrado de ambos ingredientes.

Y, por lo que a la campaña se refiere, lo mejor que de la misma cabe decir es que no ha deteriorado más las perspectivas iniciales bajo las que la elección se presentaba para el PSOE. La orientación izquierdista-populista que se le imprimió iba aparentemente más orientada a la movilización de la *izquierda volátil* que a la retención del segmento más centrista de sus votantes. Es obvio que no lo ha conseguido. Quedará para siempre sin respuesta la pregunta de qué hubiera sucedido con un enfoque distinto, por ejemplo, asumiendo con más determinación la política llevada a cabo por Zapatero en el último año y medio, presentándola como una política *responsable* y buscando por esa vía retener el electorado más centrista. Lo que sí puede afirmarse, a la vista de las encuestas, es que era justamente ese segmento el que dejaba mayor margen para la retención, puesto que los votantes socialistas que se ubicaban ideológicamente más al centro eran quienes mostraban proporciones mayores de duda sobre su voto.

IU. Después del rotundo descalabro de las elecciones de 2000, la progresiva pérdida de espacio de IU parecía condenarle, en las sucesivas elecciones de 2004 y 2008, a la marginalización completa. Sin embargo, este proceso se ha revelado como una *ventana de oportunidad* que, por el momento, ha despejado ese horizonte. No obstante, IU está aún muy lejos de su *techo* histórico y su crecimiento –claramente superior a lo que las elecciones del pasado mes de mayo daban a entender– le debe mucho al hecho de que el PSOE no ha podido utilizar de forma verosímil en esta ocasión el argumento del *voto útil de la izquierda* ante la convicción generalizada de que en todo caso el PP iba a ganar las elecciones. Es prematuro juzgar hasta qué punto se trata de un cambio duradero de tendencia. Sin duda, el incremento de su presencia parlamentaria, el volver a disponer de grupo parlamentario propio, le va a dar más visibilidad y los tiempos que se avecinan podrían ser propicios para este grupo, si consigue convertirse en lo que ha pretendido en estas elecciones, la voz de una izquierda radical que no *negocia* con los *mercados*.

UPyD. El camino electoral seguido por el partido de Rosa Díez guarda algún paralelismo con el que siguió –entre 1982 y 1986– el CDS de Adolfo Suárez, pero a mucha menor escala. Más allá de multiplicar por más de 4 su espacio electoral y por 5 su representación parlamentaria, lo más importante que ha conseguido este partido en las elecciones es conseguir una implantación electoral nacional, por más que la misma resulte parlamentariamente estéril excepto en su principal feudo, Madrid, y en la Comunidad Valenciana. Pero

en Comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Rioja, sin llegar a obtener escaños, ha rondado o superado el 5% del voto. Y, sobre todo, como antes apuntábamos al mostrar el caso de Madrid, ha demostrado una apreciable capacidad de penetración en entornos sociodemográficos más populares, restando voto al PSOE. Sólo en Cataluña, Navarra y el País Vasco su voto es casi irrelevante. A partir de ahí, UPyD puede construir un relato algo más verosímil sobre su capacidad de actuar como *contrapeso* nacional de populares y socialistas que evite al ganador, en su caso, depender únicamente del apoyo de los nacionalistas. Dependerá de cómo sepa jugar sus cartas en el nuevo escenario.

Por lo que se refiere a los **partidos nacionalistas**, los casos más dignos de comentario son los de los dos grandes triunfadores en sus respectivos espacios, **CiU** en Cataluña y **Amaiur** en el País Vasco.

CiU gana por primera vez en Cataluña en unas elecciones de este tipo y, evidentemente, lo hace porque succiona una parte significativa del voto del PSC-PSOE. Su avance no es una sorpresa, pero su intensidad sí lo es: ninguna encuesta avanzaba el *sorpasso* que se ha producido. Además, pese a la política de austeridad que está llevando la Generalitat, los avances son generalizados, incluidos los estratos demográficos más populares. Tal vez esto muestra que el coste electoral de esas medidas se *descuenta* con demasiada precipitación y que la gente, más allá de la protesta de los afectados por virulenta que sea, es capaz de entender aquella política.

Por lo que se refiere a **Amaiur** –que gana en escaños en el País Vasco, gracias a su hegemonía en Guipúzcoa, pero no en votos– sus resultados están siendo un tanto magnificados por un error de perspectiva histórica. No se pueden comparar los resultados de **Amaiur** sólo con los de Herri Batasuna, sino con los del conjunto *abertzale* en los distintos episodios con los que se ha comparado. Por ejemplo, en 1986, la suma de HB y Euskadiko Ezkerra totalizaba casi 3 puntos más de los que ha conseguido Amaiur y, en 1989, estos dos más Eusko Alkartasuna (hoy integrada en Amaiur) llegaron a sumar el 36,5%, mientras la suma de PSOE y PP apenas representó el 30,5% (este año esa suma alcanza el 39,3%). Cierto que el panorama que se dibuja cara al futuro inmediato pinta bastante oscuro respecto a la importancia de este voto en el escenario vasco¹⁰, pero no estamos ante una situación peor que otras que, mal que bien, han sido *gestionadas* en su momento.

En suma, estamos ante unos **resultados de excepción en una situación de excepción**. Si exceptuamos el caso de las elecciones de 1982, nunca hasta ahora habíamos asistido a un *swing* electoral tan desmesurado como el que este proceso ha deparado. Ello es la consecuencia, por supuesto, de una monumental crisis, de la incapacidad para gestionarla y hasta para *relatarla*, y de la devastación económica y social que la misma ha provocado. Pero no sólo de ello. Hay mu-

¹⁰ Una proyección de los resultados de estas elecciones a un supuesto de Elecciones al Parlamento Vasco arrojaría 20 escaños para Amaiur, otros tantos para el PNV, 18 para el PSE-PSOE, 15 para el PP y 2 para EB-IU.

chas crisis superpuestas ahora mismo en nuestro país y cada una de ellas ha dejado alguna impronta en estos resultados. La urgencia de *la* crisis no debe oscurecer la importancia de *las otras* crisis: la de representación, la de legitimidad, la de valores cívicos y sociales. Estas elecciones son un *partaguas* nacional en muchos sentidos, y sería bueno que los líderes lo entendieran así.

3. Las consecuencias: el PP, ante la hora de la verdad; el PSOE, ante la necesidad de reinventarse

La *claridad* del resultado político de las elecciones –por otra parte, *descontada* en la opinión informada– es sin ninguna duda un aspecto positivo cara a los desafíos inmediatos. Pero, como hemos podido comprobar ya, carece *per se* de cualquier efecto taumatúrgico. Así, ha resultado perfectamente irrelevante a la hora de aliviar la tensión sobre la Deuda o cualquier otro aspecto de la situación.

El PP ha recibido un *mandato amplio y un apoderamiento fuerte*. Desde el punto de vista del respaldo político y parlamentario está completamente habilitado para hacer lo que tenga que hacer.

Ese no es su problema. Su problema es el margen de agencia autónoma de que dispone. Su problema son las decisiones (y, sobre todo, las *indecisiones*) que se toman (y las que *no se toman*) fuera de aquí. Y, en concreto, la angustiada situación financiera que la falta de concreción de medidas

a escala europea está provocando. En rigor, los primeros pasos del Gobierno de Rajoy tienen que mirar más a Bruselas, a París y a Frankfurt que a los centros domésticos.

Con todo, la agenda interna no está, en absoluto, falta de apremios y exigencias. El PP llega al poder *avisado* por la velocidad con la que otros Gobiernos que han tomado el timón en medio de la crisis pierden en meses –si no en semanas– el crédito que les otorgaba el mandato electoral y se enfrentan a respuestas airadas de los afectados por la política de austeridad que intentan imponer, ya sean los estudiantes en el Reino Unido, los funcionarios en Portugal, o todo el mundo en Grecia. Cualquier procrastinación o retraso en la adopción de medidas tras la constitución del Gobierno sería probablemente un error irreparable. Una cosa es respetar los tiempos –por premiosos que sean– del relevo, algo que resulta no sólo inevitable legalmente sino también irreprochable políticamente, y otra no tomar las medidas preparatorias necesarias en este tiempo de espera, de suerte tal que a partir de la toma de posesión no se pierda un minuto y se pueda afrontar la *carga* de las decisiones con el crédito electoral íntegro.

Porque es evidente que las cuevas que debe subir el nuevo Gobierno no sólo son muy empinadas, sino que el trazado de las mismas no permite adivinar dónde está la cima. El país –probablemente también su entorno de integración, la Unión Europea– se encuentra ante un *turning point* del que no sabemos si saldrá con una renovada capacidad de seguir aproximándose a los estándares de los

países más ricos y avanzados del mundo o continuará descendiendo por la *slippery slope* en la que viene deslizándose en los últimos años.

El PP debe ser consciente de que, por amplia que haya sido su victoria, la misma tiene un carácter más *reactivo* o incluso *punitivo* que *proyectivo*; es decir, que le debe más a la voluntad de sancionar negativamente el desempeño del Gobierno saliente que a la confianza positiva que a la expectativa que su futuro desempeño suscite.

Esa expectativa está por construir. Ciertamente hay un vago remanente de *goodwill* histórico basado en lo que queda en la memoria colectiva del periodo anterior de Gobierno del PP, pero de recuerdos no se vive (menos aún en una situación como esta) y, además, la herencia económica que ahora recibe el PP es infinitamente más complicada y los recursos propios de gobernanza económica infinitamente más reducidos. De modo que Rajoy tiene que construir un *relato* nuevo, relato que no es precisamente un cuento de hadas.

Ningún criterio más apropiado que el que ofrecen las palabras de Maquiavelo, al final del capítulo VIII de *El Príncipe*, sobre cómo los “actos de rigor” deben aplicarse todos al tiempo, al principio del *reinado*:

“Es menester, pues, que el que adquiera un Estado ponga atención en los actos de rigor que le es preciso ejecutar, a ejercerlos todos de una sola vez e inmediatamente, a fin de no verse obligado a volver a ellos todos los días, y poder, no renován-

dolos, tranquilizar a sus gobernados, a los que ganará después fácilmente, haciéndoles bien. El que obra de otro modo, por timidez o guiado por malos consejos, se ve forzado de continuo a tener la cuchilla en la mano, y no puede contar nunca con sus súbditos, porque estos mismos, que le saben obligado a proseguir y a reanudar los actos de severidad, tampoco pueden estar jamás seguros con él. Precisamente porque semejantes actos han de ejecutarse todos juntos porque ofenden menos, si es menor el tiempo que se tarda en pensarlos; los beneficios, en cambio, han de hacerse poco a poco, a fin de que haya lugar para saborearlos mejor. Así, un príncipe debe, ante todas las cosas, conducirse con sus súbditos de modo que ninguna contingencia, buena o mala, le haga variar, dado que, si sobrevinieran tiempos difíciles y penosos, no le quedaría ya ocasión para remediar el mal, y el bien que hace entonces no se convierte en provecho suyo, pues lo miran como forzoso, y no se lo agradecen”¹¹.

La cita anterior no sirve sólo para ilustrar las prioridades de Rajoy, sino que también explica la ruina de Zapatero. No cabe la menor duda acerca de la imperiosa necesidad de esos *actos de rigor*. Probablemente tampoco la albergan la mayoría de los ciudadanos ni de los políticos¹². Pero eso no quiere decir que no vaya a haber ruido y algo más. El temple de gobernante se mide en estas circunstancias, y Rajoy debe ser consciente de lo que le aguarda.

¹¹ Nicolás Maquiavelo, *El Príncipe* (comentado por Napoleón Bonaparte), Espasa-Calpe (Colección Austral Humanidades), Madrid, 2006, pág. 92.

¹² No olvidemos que dentro del catálogo de reformas hay un compromiso de adelgazamiento de las Administraciones que afectaría, sobre todo, a las élites políticas que han colonizado las Administraciones regionales, provinciales y locales.

Lo cierto es que el único elemento de confort que –en estos primeros pasos de su andadura de gobierno– va a encontrar el PP es el estado del PSOE. El ahora principal partido de la oposición se encuentra ante una situación extremadamente complicada que le va a llevar en los próximos meses a dedicar más energía a poner en orden (lo que queda de) su casa que al ejercicio de la función a la que las urnas le han relegado.

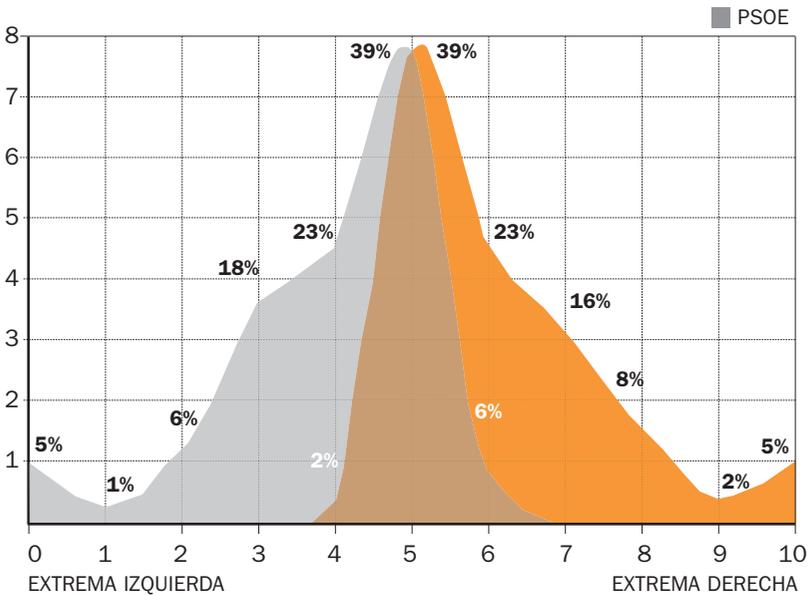
Lo que al exterior trasciende del proceso que se está vi- viendo dentro de ese partido no resulta precisamente alentador en la perspectiva de un pronto restablecimiento del *enfermo*. Da la impresión de que todo se limita a una batalla por conservar/renovar el liderazgo, cuando el problema tiene, a nuestro juicio, un alcance mucho mayor. El liderazgo es *instrumental* para desempeñar un papel político que es lo primero que hay que definir. Y, a juzgar por lo sucedido en la pasada campaña –el sesgo izquierdista-populista que la misma adquirió– y por la ausencia de posterior reflexión (al menos pública) sobre estas cuestiones, se diría que dentro del PSOE no se ha profundizado en la cuestión del posicionamiento del partido. Una encuesta pre-electoral de Metroscopia para *El País*, realizada sobre una muy amplia base muestral, ofrece el siguiente *identikit* ideológico de los dos electorados centrales, el socialista y el popular (ver Gráfico 3).

POST-SCRIPTUM. GRÁFICO 3

Autoubicación ideológica de los votantes del PP y del PSOE en 2008

¿En qué punto de la escala se situaría usted?

Entrevistados que en las Elecciones Generales de 2008 votaron al...



Fuente: Metroscopia, noviembre de 2011. *El País*

Como el gráfico muestra, ambos electorados presentan un llamativo paralelismo en su distribución (el PSOE, de la izquierda al centro; el PP, de la derecha al centro) respecto al peso respectivo del componente centrípeto y centrífugo de cada uno. **Pero, sin duda, lo más relevante es que en ambos electorados el punto de concentración modal sea el centro, y que el peso de esa moda sea idéntico en ambos electorados (39%), mientras que también ambos electorados concentran idéntica proporción (62%) en la suma de la posición central y**

la inmediata a la izquierda (en el caso del PSOE) y a la derecha (en el del PP)¹³. Todo esto dibuja vigorosamente un corolario estratégico que hace de la conquista del centro el corazón de la disputa electoral.

Esa no ha sido, desde luego, la directriz estratégica que el equipo de Rubalcaba ha seguido. Y lo sorprendente –visto desde fuera– es que la información demoscópica disponible apuntaba a que el núcleo de indecisos entre los votantes del PSOE de 2008 se ubicaba predominantemente en el centro.

Pasada la elección, lo que el PSOE tiene por delante no es sólo un PP parlamentariamente muy fuerte, sino una competencia bilateral que a su derecha no sólo es el PP, sino también UPyD (y en Cataluña, CiU), y a la izquierda es una IU que vuelve a ser relevante en el Parlamento y que aspira a serlo más en la calle. Un panorama que parece requerir de mucho talento en la gestión, si el PSOE no quiere correr el riesgo de ver puesto en cuestión su papel de referente hegemónico de la izquierda.

Pero también es cierto que la excepcional situación que desde el punto de vista económico y político estamos vi-

¹³ Sin embargo, la encuesta preelectoral del CIS –realizada prácticamente al mismo tiempo– ofrece un perfil algo distinto, en el que los electores del PSOE de 2008 se posicionan algo más a la izquierda (el 49% en las posiciones 3 y 4 de la escala y sólo el 26% en las posiciones 5 y 6), mientras los del PP lo hacen más a la derecha (42% en las posiciones 7 y 8, y 37% en las posiciones 4 y 5). Es decir, nos retrata una polarización mayor de ambos electorados y, por tanto, no sugiere tan nítidamente la condición centrípeta de la estrategia.

POST-SCRIPTUM

viendo concede una dimensión totalmente nueva al *tiempo*. Bajo circunstancias normales, un resultado como el del 20-N llevaría al PSOE a la certeza de la oposición durante dos legislaturas (al menos). Hoy, en cambio, vemos que los Gobiernos se abrasan en meses y que la *rotación* en las preferencias se produce a ritmos desconocidos. Por ello, cualquier conjetura sobre el tiempo que requiere el PSOE para volver a convertirse en partido *verosímil* de gobierno nos parecería temeraria.

Esto es lo que –en el terreno estrictamente político– nos parece ahora esencial. Quedan por tratar asuntos como el futuro del bipartidismo, el nuevo papel de las minorías, los movimientos *anti* o *parasistema* y la reconfiguración de los espacios políticos en el País Vasco, que requieren más tiempo y parsimonia intelectual para su análisis del que ahora estamos en condiciones (y perspectiva) de dedicarle.

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y CUADROS

LOS ESPAÑOLES ANTE EL CAMBIO

GRÁFICO 1.	Opinión ante el Estado (1989-2008)	28
GRÁFICO 2.	Práctica religiosa en España (1970-2011)	40
GRÁFICO 3.	Natalidad en España (1976-2010)	59
GRÁFICO 4.	Nupcialidad en España (1986-2010)	60
GRÁFICO 5.	Nacidos de madre no casada (1975-2009)	61
GRÁFICO 6.	Evolución de las percepciones de la situación económica y de la situación política (1996-2011) . . .	70
GRÁFICO 7.	La clase política, los partidos y el Gobierno como problema (2008-2011)	82
GRÁFICO 8.	Evolución de los problemas relacionados con la política desde 1985	84
GRÁFICO 9.	Indicadores de confianza en el sistema Gobierno/oposición (1997-2011)	86
GRÁFICO 10.	Autoposicionamiento ideológico (1996-2011)	95
CUADRO 1.	Identidad regional excluyente	18
CUADRO 2.	Importancia asignada a distintos aspectos de la vida	45
CUADRO 3.	Cosas que importan en la vida	46

CUADRO 4. Jerarquía de los valores finalistas	47
CUADRO 5. Nivel de justificación de diferentes comportamientos . .	52
CUADRO 6. Pluralismo y respeto a la diversidad	65
CUADRO 7. Nivel de confianza en instituciones y grupos sociales .	89

POST-SCRIPTUM

GRÁFICO 1. Evolución espacio-electoral de los principales partidos (2008-2011)	122
GRÁFICO 2. Evolución electoral PP y PSOE (1993-2011)	135
GRÁFICO 3. Autoubicación ideológica de los votantes del PP y del PSOE en 2008	148
CUADRO 1. Elecciones Generales 2011 (% sobre voto válido y escaños)	119
CUADRO 2. Competitividad y concentración. Resultados del PSOE y del PP en Elecciones Generales (1993-2011)	121
CUADRO 3. Evolución del número de votos (2008-2011)	123
CUADRO 4. Evolución del voto del PP, PSOE y UPyD en distintos entornos de Madrid (2008-2011)	125
CUADRO 5. Elecciones Generales (2008-2011) (Espacio electoral de PP y PSOE por CC.AA. y variación relativa en %)	127
CUADRO 6. Distribución de los espacios políticos entre partidos con representación (2008-2011)	131

¿Qué piensan los españoles de sí mismos?, ¿cuáles son sus creencias?, ¿cómo se reconocen y con qué se identifican?, ¿qué les disgusta del presente y qué esperan del futuro?, ¿cuál es su estado de ánimo para afrontar los problemas de la crisis y los retos pendientes?

En *Los españoles ante el cambio*, el sociólogo y actual Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, busca dar respuesta a estas preguntas y plantea los nuevos interrogantes que nuestra sociedad debe enfrentar y resolver. Este informe es una reflexión pausada y un inexcusable punto de partida para conformar un mapa empírico de opiniones, actitudes y valores. El libro incluye también el análisis preliminar que el propio autor hizo de las Elecciones Generales de 2011.

faes Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
C/ María de Molina, 40 6ª Planta, Madrid 28006
Tel: +34 91 576 68 57 Fax: +34 91 575 46 95
e-mail: fundacion@fundacionfaes.org

www.fundacionfaes.org